



La Alianza Global Jus Semper



## Derechos Humanos y Empresa

Hacia un Nuevo Paradigma de Democracia Real  
y el Sostenimiento de la Gente y el Planeta,  
o Derechos Retóricos en un Mar de Engaños y Apariencias

*La trillada y vieja fórmula de cambiar para que todo siga igual...*

Álvaro de Regil Castilla





La Alianza Global Jus Semper

# Derechos Humanos y Empresa

Hacia un Nuevo Paradigma de Democracia Real  
y el Sostenimiento de la Gente y el Planeta,  
o Derechos Retóricos en un Mar de Engaños y Apariencias

*La trillada y vieja fórmula de cambiar para que todo siga igual...*

---

Álvaro de Regil Castilla\*

Enero de 2008

© 2008. La Alianza Global Jus Semper  
Portal en red: [www.jussemper.org/](http://www.jussemper.org/)  
Correo-e: [informa@jussemper.org](mailto:informa@jussemper.org)





# Índice

<b>Prólogo.....</b>	<b>7</b>
<b>I. El Escenario Mundial en Contexto.....</b>	<b>9</b>
I.(a) Sobre las condiciones económicas y sociales	9
I.(b) Sobre las condiciones de la democracia	11
I.(c) Sobre las condiciones de real sostenimiento	13
I.(d) Sobre la incompatibilidad del capitalismo con el real sostenimiento	13
I.(e) Sobre el estado de los DDHH	15
<b>II. Breve periplo en el desarrollo de la RSC en general y en particular en el entorno de los DDHH.....</b>	<b>19</b>
II.(a) Las Normas de la ONU	20
II.(b) El Pacto Mundial	20
II.(c) Otros marcos multilaterales	20
II.(d) Marcos voluntarios multi-sectoriales	21
<b>III. La discusión dentro del seno de la ONU y la Unión Europea sobre las responsabilidades de las empresas con respecto a los DDHH.....</b>	<b>23</b>
III.(a) El Caso Central de la Normas de la ONU	23
III.(b) La Reacción de la Comisión de DDHH	25
III.(c) Valoración de la Visión e Influencia del Pacto Mundial	28
III.(d) La posición de la Unión Europea	30
<b>IV. El Trabajo del Representante Especial sobre los DDHH – El Primer Informe.....</b>	<b>35</b>
IV.(a) Valoración del Primer Informe (provisional) 2006 del RESG-DDHH	36
IV.(b) La Reacción de la Sociedad Civil	39
IV.(c) Valoración final del primer informe del RESG-DDHH	40
<b>V. Valoración del Informe Final de 2007 del RESG-DDHH.....</b>	<b>43</b>
V.(a) Principales juicios de valor	43
V.(b) Valoración del RSSG de normas y prácticas que regulen la responsabilidad de las empresas	45
V.(c) Los Documentos Adjuntos del Informe	47
V.(c1) Responsabilidades de los estados en materia de regulación y arbitraje de las actividades empresariales	
V.(c2) Cuestiones relacionadas con la responsabilidad empresarial con arreglo al derecho internacional y con la regulación extraterritorial	
V.(c3) Políticas de DDHH y prácticas de gestión: resultados de las encuestas realizadas a gobiernos	
V.(c4) Estudio sobre variaciones regionales y sectoriales en las políticas empresariales de DDHH	
V.(c5) Evaluaciones de impacto y cuestiones metodológicas	
V.(d) La posición empresarial	52
V.(e) Posiciones de la Sociedad Civil	54
V.(f) Valoración final de la labor del RESG-DDHH	56
<b>VI. La Iniciativa de DDHH de los líderes empresariales (BLIHR) y su prueba de las Normas.....</b>	<b>59</b>
VI.(a) El propósito del proyecto	59
VI.(b) Premisas principales del tercer reporte	60
VI.(c) Contexto de la Iniciativa	60
VI.(d) Conceptos para clarificar el papel de los negocios en los DDHH	60
VI.(d1) Conceptos para trasladar a los DDHH a un contexto de negocios	
VI.(d2) Prácticas mínimas y adicionales	

VI.(d3) Delimitación de las responsabilidades de estados y empresas	
VI.(g) Conclusiones y expectativas de la BLIHR:	63
VI.(h) Valoración de la Iniciativa de la BLIHR	63
VI.(h1) Contexto de mercado	
VI.(h2) Legal o voluntario	
VI.(h3) Marco valorativo de los DDHH.	
VI.(h4) Delimitación de las responsabilidades de estados y empresas	
VI.(h5) Normas de Derechos Humanos	
VI.(h6) Visión de las Normas	
VI.(h7) Visión de los procesos	
VI.(h8) Democracia, sostenimiento y preeminencia en la determinación de criterios	
VI.(i) Conclusiones en la valoración del proyecto de la BLIHR	67
<b>VII. Hacia un nuevo paradigma de derechos humanos respecto a la responsabilidad social de las empresas.....</b>	<b>69</b>
VII.(a) Contexto	69
VII.(b) Las dos premisas infranqueables de los DDHH	70
VII.(b1) Real democracia	
VII.(b2) Real sostenimiento holístico	
VII.(c) Derechos Humanos y sus conceptos en el ámbito de las empresas	72
VII.(c1) Fin sostenible de la empresa – un nuevo concepto	
VII.(c2) Conceptos de DDHH en el nuevo concepto de la empresa	
VII.(c3) Marco valorativo de los DDHH en el paradigma DRSGP	
VII.(d) Derecho a un salario digno – el DDHH de mayor impacto en el ámbito de la empresa	75
VII.(d1) Por el fin del trabajo esclavo	
VII.(d2) El salario digno como derecho humano	
VII.(d3) Evasión institucional del derecho a un salario digno	
VII.(d4) La propuesta LISDINYS hacia un salario digno	
VII.(e) Los mecanismos de rendición de cuentas	78
VII.(f) Realidad en el largo plazo	79
<b>VIII. Implementación del Nuevo Paradigma de DDDHH.....</b>	<b>83</b>
VIII.(a) Rutas de implementación	84
VIII.(a1) Vía lenta	
VIII.(a2) Vía rápida	
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>87</b>
<b>Bibliografía:.....</b>	<b>89</b>



## Prólogo

Este estudio lo provocan la inquietud y frustración ante la falta de avances significativos en la lucha por establecer un marco normativo que proteja a los derechos humanos (DDHH) en todo el ámbito de acción de las empresas. A mi mejor entender, padecemos una era en la que se nos ha impuesto a la humanidad y al planeta, por decir lo menos, un entorno de mercado salvaje y perverso, como un paradigma de vida con reglas y estructuras diseñadas en función directa de las condiciones exigidas por las empresas para su exclusivo beneficio. Como consecuencia, los derechos humanos de las sociedades son sistemáticamente pisoteados por el quehacer empresarial en nombre del llamado libre mercado. En este contexto, La Alianza Global Jus Semper (LAGJS) ha seguido de cerca el desarrollo del debate a partir de la publicación, en 2003, del borrador de las Normas Sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la

Esfera de los Derechos Humanos,<sup>1</sup> por parte de la Subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, dependiente de la hoy extinta Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En ese entonces manifestamos nuestra posición de apoyo crítico a dichas Normas. Las valoramos en su momento como un vehículo de mucho mayor fuerza que todos los existentes para alcanzar eventualmente normas mínimamente aceptables de responsabilidad empresarial, a pesar de su amplia ambigüedad y graves omisiones.<sup>2</sup> Sin duda, dichas Normas constituyen un primer paso positivo sobre el cual construir, con la participación directa de la sociedad civil global, un verdadero marco regulador que proteja efectivamente a los DDHH del impacto de la actividad empresarial.

Mas a partir de la decisión en 2003 de un pequeño grupo de transnacionales (TNLs), conformadas en la Iniciativa sobre DDHH de Líderes Empresariales (BLIHR por sus siglas en inglés) de probar las Normas, de que las Normas fueran rechazadas para su adopción por la Comisión de DDHH en 2004, del nombramiento en 2005 del Señor



John Ruggie como Representante Especial en referencia a los DDHH y las empresas, y del reemplazo de dicha Comisión por el Consejo de DDHH en 2006, devino preferible esperar a 2007 para preparar una valoración del avance en la lucha por desarrollar un marco regulador de los derechos humanos en el ámbito de las empresas. Considerando que para estas fechas diferentes sectores de la sociedad civil y del mundo empresarial han presentado sus posiciones, tanto respecto a las Normas como respecto al trabajo de la ONU sobre el tema, a través del Sr. Ruggie y del foro del Pacto Mundial, y que la BLIHR ya ha probado por varios años las Normas, fue mejor esperar a obtener una visión de conjunto en lugar de valorar estas actividades de forma aislada conforme se sucedían.

Es así como he preparado una valoración del debate sobre la responsabilidad de las empresas respecto a los derechos humanos en particular, pero también sobre los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y laborales en general; valoración que además constituye la posición de nuestra única iniciativa: La Iniciativa Salarios Dignos Norte y Sur (LISDINYS) respecto a los DDHH en la empresa.

Con el fin de realizar una valoración lo más detallada y holística posible, he trazado un sendero en el que el periplo inicia haciendo una breve relación de los principales recursos existentes respecto a la responsabilidad social, ambiental y de DDHH de las empresas. Esto abarca tanto a normas, guías y directrices de origen multilateral como de origen multi-sectorial; es decir, de diferentes partes interesadas. El periplo continúa valorando la discusión sobre el tema en el seno de la ONU y de la Unión Europea. Me he abocado a ellas porque este es el entorno de organismos multilaterales y gobiernos donde más se ha desarrollado el debate, con los principales actores –gobiernos, organismos empresariales, y sociedad civil– cabildeando en dichos senos. He continuado enseguida con el estudio del mandato del Representante Especial Ruggie, así como de los reportes y materiales preparados por la BLIHR, ya que ambos intentan contribuir a definir un futuro marco de respeto a los DDHH en las empresas desde sus respectivas visiones. Finalmente, concluyo mi periplo proponiendo un nuevo paradigma de DDHH respecto a la responsabilidad social de las empresas (RSE), desde la perspectiva de LISDINYS, anclada en la real democracia y el verdadero sostenimiento.

Antes de iniciar este periplo, no obstante, establezco claramente el contexto del escenario mundial desde los ángulos económico, democrático, de sostenimiento real y del estado actual de los DDHH en el ámbito empresarial, del cual parto para emitir esta valoración.

Desafortunadamente, es inevitable adelantar en el título del estudio mi percepción conjunta de la lucha por

establecer un marco regulador de la responsabilidad de las empresas en el respeto de los DDHH en su ámbito de actividad. Es mi convicción que existe una posición dominante de rechazo a la regulación del impacto de la actividad empresarial en el goce de los DDHH mediante un marco obligatorio, sin más argumentos que la primacía del mercado sobre la gente y el planeta. Es más que evidente la clara reticencia de los gobiernos miembros de la ONU a cumplir con su responsabilidad democrática más elemental: reforzar el marco actual de DDHH en un mundo globalizado por los dueños del mercado, y garantizar la protección de los ya existentes. Así las cosas, lo que se observa, frente a una avalancha de evidencias avasalladoras sobre la violación sistemática de los DDHH por parte de las empresas, es una serie de gesticulaciones y posturas que pretenden cambiar todo para que, al final de cuentas, sigamos igual, según los designios de los dueños del mercado. Por supuesto, no está dicha la última palabra y la sociedad civil, el ciudadano común en países ricos y pobres, no nos cruzamos ni nos cruzaremos de brazos.

<sup>1</sup> Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 55º período de sesiones. Tema 4 del programa. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Comentario relativo a las normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.1 4 de agosto de 2003.

<sup>2</sup> La Alianza Global Jus Semper. La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU ha emitido normas que apuntan a un posible advenimiento de una RSC obligatoria, pero continúa legitimando una estructura que genera inequidad sin límites. Comentario Temático LISDINYS. Septiembre 2003.





## I. El Escenario Mundial en Contexto

Es importante empezar por establecer brevemente las verdaderas condiciones socio-económicas, democráticas, de real sostenimiento de la humanidad y del planeta, y de cómo inciden éstas en el disfrute de los DDHH enarbolados por la comunidad de naciones, especialmente aquellos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, ya que todos los convenios y pactos que conciernen a los DDHH, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son posteriores a ésta y la utilizan como marco de referencia. Es necesario hacerlo porque el contexto positivo que se pretende imponer sobre la condición humana y del planeta está muy lejos de la realidad, que es deplorable. De aquí que premeditadamente haga énfasis en referirme a lo verdadero y no a falsas pretensiones sin ningún fundamento.

*“el dramático ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres y la rápida concentración de la riqueza en una microscópica élite mundial son una constante y una muy dura y procaz verdad irrefutable”*

### I.(a) Sobre las condiciones económicas y sociales

Como veremos más adelante, el contexto utilizado por la mayoría de los actores participantes en el debate dentro de Naciones Unidas y en los gobiernos miembros, respecto a las condiciones económicas y sociales actuales de las sociedades de mercado, es descaradamente triunfalista. Se argumenta que la globalización ha generado reducciones “impresionantes” de la pobreza en los principales mercados llamados eufemísticamente “emergentes” y bienestar generalizado en los países del Norte. Constantemente se argumenta que la responsabilidad social hará a las economías de mercado más robustas e inclusivas, y se insiste en la apertura de los mercados, como si se tratara, según su discurso, sólo de mejorar las ya de suyo positivas condiciones de la globalización impuesta para generar aún mayor bienestar.

Esta retórica no puede estar más lejos de la realidad. Si nos apoyamos en los datos proporcionados por las mismas instituciones internacionales, de las que parcialmente parte el contexto apologista del paradigma neoliberal globalizado, podemos afirmar con toda certeza que el dramático ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres y la rápida concentración de la riqueza en una microscópica élite mundial son una constante y una muy dura y procaz verdad irrefutable.

El Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD –el más reciente de éstos en valorar a todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) en su conjunto– concluye en relación con el progreso obtenido en el cumplimiento de los ODMs –programados para lograrse en 2015– que el tiempo se acaba. El reporte explica que, entre otros, los compromisos de los ODMs para reducir la pobreza extrema a la mitad, reducir las muertes de niños a dos tercios, y lograr la educación primaria universal para el 2015, bajo la tendencia actual, no serán cumplidos. Algo que debe de sorprender a muy pocos dado el estado deplorable de las relaciones mundiales. En efecto, el reporte informa que la brecha entre la meta de los ODMs de reducir la pobreza en el mundo a la mitad y los resultados proyectados indica que la cantidad de personas que viven con un dólar diario o menos (más de 1.100 millones) habrá aumentado en 380 millones en 2015, 34 por ciento.

El reporte también destaca la escala de la brecha internacional de la riqueza: las 500 personas más ricas del mundo tienen un ingreso combinado mayor que el de los 416 millones de personas más pobres. Por ello, no sorprende visitar nuevas cifras que ilustran con crudeza los extremos de la condición humana, en la que 2,5 millardos de personas, viviendo con menos de \$2 dólares al día –40 por ciento de la población mundial– representan el 5 por ciento del ingreso global, mientras que el 10 por ciento más ricos, casi todos viviendo en países de altos ingresos, representan el 54 por ciento del ingreso global.<sup>3</sup> Por supuesto, la concentración global extrema de la riqueza en una pequeña élite puede observarse también en países supuestamente en desarrollo. El caso más conspicuo de todos es México. Un país con más de la mitad de la población padeciendo algún tipo de pobreza, tiene el vergonzoso “mérito” de haber creado las condiciones de “capitalismo de compinches” para tener al hombre más rico del mundo a partir de este verano,<sup>4</sup> el cual ya era segundo en la revista Forbes en la pasada primavera.

En 2006, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, dedicado al agua, reportó, como podría esperarse, que el compromiso específico dentro de los ODMs de reducir a la mitad los 1.100 millones de personas sin acceso a agua potable y los 2.600 millones de seres humanos sin acceso a servicios de saneamiento no serán conseguidos mientras el mundo continúe por la misma vía.<sup>5</sup> Sólo la condición humana puede explicar que mientras miles de millones de personas en el mundo no tienen acceso al goce de sus derechos humanos más básicos, como son el acceso al agua, otros se jacten de grandes avances científicos, innumerable veces utilizados en el flagelo de la guerra, y una quinta parte de la población viva en el hedonismo, consumismo y egoísmo extremos, sin inmutarse de la miseria humana.

*“los datos que exhiben la creciente desigualdad en el corazón del actual sistema no dejan lugar a dudas sobre la mendacidad del triunfalismo de los apologistas del paradigma neoliberal”*

Así las cosas, el PNUD informa en el mismo prólogo de su Reporte 2007 sobre los ODMs: *los ODMs aún son factibles si actuamos ya. Para ello, se precisará una gestión global acertada, un aumento de la inversión pública, un crecimiento económico, una mayor capacidad productiva y la creación de puestos de trabajo digno.*<sup>6</sup> Por desgracia, la realidad fehaciente indica que la tendencia es precisamente la opuesta, destacando la explotación del hombre por el hombre como sistema mediante el moderno trabajo esclavo.<sup>7</sup> Este es el rasgo principal de esta nueva era mercantilista de capitalismo salvaje, darwinista, de economía de oferta, en la cual, respecto a la relación Norte-Sur, el intercambio desigual, tan bien descrito por Arghiri Emmanuel desde hace décadas, pervive cada vez con mayor fuerza.<sup>8</sup> En efecto, a pesar del considerable crecimiento económico mundial en las pasadas décadas, la desigualdad ha aumentado exponencialmente. En los pasados 40 años, el ratio de ingreso del 20 por ciento más pobre al 20 por ciento más rico fue de 1:30 en 1960, mientras que hoy es de 1:80.<sup>9</sup>

*“el actual sistema es un generador de suma injusticia lo cual forzosamente requiere de la violación sistemática de los DDHH”*

En cuanto al supuesto bienestar generalizado en los países ricos, los datos que exhiben la creciente desigualdad en el corazón del actual sistema no dejan lugar a dudas sobre la mendacidad del triunfalismo de los apologistas del paradigma neoliberal. Un reporte del Economic Policy Institute muestra que el crecimiento económico en Estados Unidos ha pasado de largo a todos excepto a los más ricos; los salarios se han estancado a pesar del rápido crecimiento en productividad; los salarios de los trabajadores más jóvenes están por debajo de sus predecesores; hay menos movilidad hacia arriba que en países con economías similarmente avanzadas; y el país tiene el más alto grado de desigualdad de todos los países de la OCDE analizados. El estudio de los autores concluye que si los hallazgos en los cientos de tablas y cifras en el reporte fuesen reducidos a una sola observación, ésta sería que, cuando se trata de una economía que debe trabajar para las familias de la clase trabajadora, el crecimiento en sí mismo es una condición necesaria mas no suficiente. El crecimiento tiene que llegar a la gente. Los parámetros bajos los cuales se juzga a la economía tienen que reflejar estas preocupaciones distributivas, y tienen que crearse las instituciones y las políticas que las aborden.<sup>10</sup> Evidentemente lo real es lo opuesto.



Entonces es claro que, si bien ha habido una constante en el crecimiento económico global, la riqueza generada cada vez se concentra más en menos manos y la desigualdad ha aumentado vertiginosamente. Entonces, no hay razón para respaldar al actual sistema como creador y dador de riqueza y bienestar. Al contrario, el actual sistema es un generador de suma injusticia lo cual forzosamente requiere de la violación sistemática de los DDHH.

### **I.(b) Sobre las condiciones de la democracia**

Si la situación económica generada por el actual paradigma económica neoliberal de apoyo a la oferta, a los dueños del mercado, ha generado una tendencia constante hacia la polarización de la desigualdad, tanto en el Norte como en el Sur, ciertamente no es porque esto ha sido resultado de decisiones previamente conciliadas y aprobadas democráticamente por las sociedades de mercado. El paradigma neoliberal ha sido una imposición como resultado directo del sistema elitista que la mayoría de las sociedades de mercado padecemos. A este sistema podemos denominarlo de diversas formas, entre ellas: oligocracia, mercadocracia, corporatocracia y mediocracia, mas nunca como democracia real.

*“en la enorme mayoría de los casos, no obstante, las políticas y acciones de estos poderes están lejos de cumplir con el fin más elemental de todo gobierno que se precie de ser democrático: procurar el bienestar de todos y cada uno de los rangos de la sociedad, especialmente de los desposeídos”*

Si bien la mayoría de los estados se precian de haber construido sistemas democráticos, la realidad está muy lejos de la retórica. Sin duda, en la mayoría se celebran periódicamente procesos electorales, se tienen congresos electos mediante el voto popular y sistemas con divisiones claras de poderes. En la enorme mayoría de los casos, no obstante, las políticas y acciones de estos poderes están lejos de cumplir con el fin más elemental de todo gobierno que se precie de ser democrático: procurar el bienestar de todos y cada uno de los rangos de la sociedad, especialmente de los desposeídos.

Lo que tenemos es una enorme parodia democrática. Sin duda, hay elementos democráticos que se utilizan a diario en muchos países del mundo, especialmente los procesos electorales, presumiblemente democráticos, que se realizan en todos los niveles de gobierno. Mas esto no significa que las elecciones sean auténticamente democráticas. Cada vez con mayor frecuencia las campañas electorales son financiadas y apoyadas por poderosos intereses económicos con los que los candidatos están coludidos. Intereses que son diametralmente opuestos a las demandas sociales de cualquier sociedad democrática. De este modo, a pesar de que hay naciones consideradas como tales desde hace

más de un siglo, muchas elecciones en todo el mundo todavía siguen siendo tildadas de fraudulentas por segmentos muy significativos del electorado. Entre ellas destacan las elecciones presidenciales de 2000 y 2004 en Estados Unidos que, a pesar de la aprobación tácita de los grandes medios, han sido y siguen siendo cuestionadas por amplios segmentos estadounidenses por considerar que su manipulación cambió los resultados oficiales. Un caso muy reciente ocurrió en la parodia democrática mexicana de 2006, cuando todo el proceso electoral fue denunciado antes, durante y después de la jornada electoral, por ser controlado ilegalmente por el ejecutivo; al grado de que, un año después, más de un tercio del electorado continúa denunciando el fraude y no reconoce al señor Calderón como legítimo presidente.

*“preguntémonos ¿quién decidió que la llamada globalización neoliberal iba a ser aplicada en un Estado dado? ¿Se le pidió a la gente que eligiera entre un abanico de políticas económicas para que entonces los gobiernos obedecieran la voluntad popular?”*

El fondo del problema obviamente no se limita a la manipulación de los procesos electorales, ya que aún en los casos en que el electorado otorga legalidad a los procesos, esto no altera el entorno escasamente democrático en la mayor parte del mundo llamado democrático. Evidentemente, la manipulación de los procesos tiene un motivo ulterior bien definido por parte de poderosos grupos económicos –con muy privados intereses– que financian las campañas de sus candidatos contendientes en las gestas electorales: controlar la agenda pública legitimando a los supuestos triunfadores mediante contiendas electorales apoyadas masivamente a través de los grandes medios corporativos de comunicación –a menudo en violación de las propias leyes electorales. El interés privado ha coaccionado al interés público. De ahí que la norma de la llamada democracia representativa se haya vuelto la privatización del interés público para que los políticos discutan en privado la agenda pública con los dueños del capital.

Por ello, esta parodia democrática, llamada representativa, está lejos de ser un sistema donde el poder realmente emane del pueblo y los representantes obedezcan fielmente el mandato popular, un postulado aún muy lejos de la realidad. Así, la democracia en el siglo XXI es predominantemente un ejercicio donde la participación cívica se limita al proceso electoral, sin entablarse una relación real entre representados y representantes con el fin de que las iniciativas y políticas de gobierno sean producto directo de una cohesión permanente entre sociedad y servidores públicos. Como es de esperarse, dada las condiciones del entorno político actual, la norma es que las sociedades, formalmente declaradas democráticas, padezcan a gobiernos que predominantemente sirven a intereses de élite.

Así las cosas, la razón primigenia de la real democracia: procurar y cuidar un entorno de justicia social, es hoy en día una utopía por voluntad y convicción de quienes detentan el poder real. Con excepción de un puñado de naciones, sobre todo escandinavas, prevalece en el mundo un sistema de explotación impuesto por la mercadocracia global, tanto en el Norte como en el Sur, cuando menos a un segmento significativo de la población, si no a la mayoría. De no ser así, si existiera un entorno de verdadera democracia directa, participativa, de abajo hacia arriba, resultaría imposible imaginar a un mundo globalizado con un paradigma capitalista diseñado para imponer estructuras económicas en beneficio de la oferta, los dueños del capital, a costa de la mayoría.

*“en suma, ¿se informó a la gente que el mercado iba a ser situado más que nunca por encima nuestro y que la responsabilidad primigenia de los llamados gobiernos democráticos, de procurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad, sería ignorada? La respuesta a estas preguntas es consistentemente no en todo el mundo”*

En efecto, más de treinta años después de que se abandonó el paradigma de demanda, las ciudadanías de las naciones “democráticas” donde se impuso la llamada “nueva economía” de la globalización neoliberal de oferta, nunca han sido convocadas a un proceso de toma decisiones ni se les ha solicitado su debido respaldo democrático al neoliberalismo económico. Si duda cabe, preguntémonos ¿quién decidió que la llamada globalización neoliberal iba a ser aplicada en un Estado dado? ¿Se le pidió a la gente que eligiera entre un abanico de políticas económicas para que entonces los gobiernos obedecieran la voluntad popular? Por lo menos ¿se le informó a la gente, en términos llanos, que la desregulación y privatización de sectores económicos enteros era parte del paradigma económico neoliberal y que esto significa que las políticas económicas dejarían de apoyar a la generación de la demanda para apoyar a la oferta, que pertenece al gran capital? ¿Se les informó que para este fin, el mantra neoliberal precisa de la reducción de impuestos y la drástica reducción del Estado de Bienestar? En suma, ¿se informó a la gente que el mercado iba a ser situado más que nunca por encima nuestro y que la responsabilidad primigenia de los llamados gobiernos democráticos, de procurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad, sería ignorada? La respuesta a estas preguntas es consistentemente no en todo el mundo. En lugar de convocar a la ciudadanía para conciliar el interés privado con el público, supeditando al primero de tal forma que las políticas de gobierno sean diseñadas ex profeso para garantizar el bienestar social –destacando el goce y protección de los DDHH, como, en el caso de las políticas económicas, el goce del derecho a una remuneración del trabajo que procure un calidad de vida

acorde con la dignidad humana– estas decisiones, en la *real politique*, se toman en privado en sesiones de *petit comité* en función de sus muy privados intereses.

Por ello, es de fundamental importancia dejar claro que las políticas de gobierno, sobretudo las socioeconómicas, se toman por norma sin seguir un proceso debidamente democrático, porque no hay participación real ni debate entre las ramas de gobierno y la sociedad; y lo peor es que esta norma sigue consolidándose.<sup>11</sup> Los gobiernos han traicionado a la democracia representativa y en lugar de responder al interés del pueblo son meros agentes del mercado, que responden mayoritariamente a la voluntad mercadocrática, con la cual muchos políticos están en cercana sociedad. En consecuencia, la agenda de trabajo de los gobiernos mayoritariamente se contrapone a las demandas sociales reales, pues la democracia ha sido corrompida hasta la médula, incluyendo el funcionamiento de las principales instituciones multilaterales, y sólo se mantiene una fachada democrática para justificar una legitimidad que rápidamente se erosiona.

*“el actual entorno es insostenible, no sólo porque sea evidentemente inaceptable sino porque el actual entorno avanza rápidamente hacia el quiebre y agotamiento de todos los sistemas de vida”*

Es en esta realidad de enorme déficit democrático que hoy vive el mundo que se lucha por hacer valer los DDHH en el ámbito de actividad de las empresas. En un entorno donde el mercado, el capitalismo salvaje darwinista, de economía de oferta, de los inversionistas institucionales y sus empresas, ha sido impuesto como religión por encima del sostenimiento de la gente y el planeta, es sumamente ilusorio albergar voluntad política alguna para hacer valer y proteger los DDHH ante los embates del mercado. Es así que existen toda suerte de obstáculos, tanto en esferas multilaterales como nacionales de gobierno, para anteponer los DDHH al mercado. La mercadocracia, la lógica del mercado y sus dueños, rigen sobre los pueblos, por lo que los criterios sobre los DDHH son analizados, muchas veces inconscientemente, mas muchas otras perversamente, supeditándolos a los derechos privados y supuestas prerrogativas de la libre empresa. La lógica pseudo-democrática dominante es entonces dirigida en grado sumo por los intereses de las corporaciones globales. De esta misma forma se gestiona la defensa de los DDHH, multilateral y nacionalmente, en el centro y en la periferia. Aunque se declara que vivimos en democracia, se impone el capitalismo salvaje. En él, el dios dinero y su paraíso, el mercado, a imagen y conveniencia de los grandes inversionistas institucionales y sus corporaciones, han sido proclamados dogma de fe, de manera por demás mendaz, como camino hacia la prosperidad, el bienestar y la armonía social. En contraste, cuando los pueblos se



movilizan para construir un verdadero entorno democrático, llega la represión, violando los DDHH civiles y políticos más básicos. En suma, se le llama democracia a las estructuras de explotación económica que reproducen y acumulan el capital para una élite mundial, y se reprimen los intentos de construir un verdadero entorno democrático. Es inevitable entonces tomar consciencia de que para hacer valer y proteger a los DDHH ante la empresa es imprescindible antes eliminar nuestro enorme déficit democrático.

### **I.(c) Sobre las condiciones de real sostenimiento**

Dadas las deplorables condiciones socioeconómicas y democráticas, el actual entorno es insostenible, no sólo porque sea evidentemente inaceptable sino porque el actual entorno avanza rápidamente hacia el quiebre y agotamiento de todos los sistemas de vida, como es de suyo conocido. La mayor parte del mundo está dominada por un capitalismo salvaje, darwinista, de economía de oferta, perverso, en el que millardos de seres humanos viven en la miseria para que una élite global viva la riqueza más abyecta. Algunos alegan que estamos mucho mejor que en otras épocas, mas la crasa y avasalladora realidad es que hemos regresado a épocas muy reminiscentes del despotismo ilustrado y de la revolución industrial. Como ya he ilustrado, lejos de los cánticos de las sirenas apologistas del mercado, vamos de regreso al oscurantismo conforme más gente vive peor en términos absolutos y, por ende, más gente padece la violación sistemática de uno o más de sus DDHH. Con certeza, conocidos filósofos del capitalismo moderno, como Adam Smith o John Stuart Mill, lamentarían tristemente las condiciones actuales del mundo. La obra de Smith refleja claramente cómo, cuando él abogaba por el *laissez faire*, su visión dibujaba un entorno de miles y miles de pequeños comerciantes y no de grandes empresas mercantes a las cuales aborrecía. De hecho, con el arribo de la revolución industrial, Smith llegó a observar la nueva tendencia hacia la pauperización de las masas trabajadoras debido a los monopolios, a los que ubicaba en las antípodas de su pensamiento. Stuart Mill tuvo la oportunidad de observar con mayor claridad en su época la dicotomía entre lo que consideraba las leyes naturales de la producción, gobernadas por la naturaleza, y las leyes humanas de la distribución, gobernadas por la voluntad humana.<sup>12</sup> Sin duda, estamos de regreso en la época de los “barones ladrones” y la “edad dorada” con las empresas controlando la vida y porvenir de la gente y el planeta.

La enorme diferencia con épocas del pasado, no obstante, es que ahora hemos llegado hasta el límite, porque el planeta y sus recursos simplemente no tienen capacidad de recuperarse para satisfacer las demandas de las sociedades capitalistas de consumo, manipuladas y enajenadas en el individualismo exacerbado. Es por ello

menester tomar consciencia de que el actual sistema de enorme desigualdad y depredación acelerada de los recursos naturales es insostenible, por más que los poderes fácticos insistan en él, y que nos aproximamos cada vez más a conflictos mayores que ponen en gravísimo peligro el futuro del planeta. En nuestra embriaguez antro-po-centrista, en la que nos auto-complacemos de ser la especie supuestamente superior en todos los sentidos, estamos demostrando con creces que somos la peor especie del planeta, la única capaz de acabar con nuestra propia existencia, con la de cada especie y con el planeta mismo.

*“el equilibrio requiere que ningún participante prospere a costa de otros. Una condición imposible de crear bajo el actual paradigma capitalista darwinista”*

Así las cosas, la imposibilidad de sostenimiento del paradigma actual es sistémico. La capacidad de recuperación de los recursos naturales, especialmente de aquellos imprescindibles para la vida, como el agua, es insostenible. El Informe de Desarrollo Humano 2006 dice sin ambages que *en términos claros, el mundo está acabando con uno de sus recursos naturales más valiosos y está acumulando una deuda ecológica insostenible, que heredarán las futuras generaciones.*<sup>13</sup> El PNUD tampoco ha dejado duda sobre el fracaso en cumplir bajo el actual paradigma con los ODMs. Por supuesto, el objetivo siete, de garantizar el sostenimiento ambiental, incluyendo el acceso a agua potable, como ya he expuesto, es insostenible. Es por ello que el contexto actual ante el que se enfrentan el respeto y protección de los DDH es el de un paradigma insostenible.

### **I.(d) Sobre la incompatibilidad del capitalismo con el real sostenimiento**

Hay docenas de definiciones de lo sostenible. La mayoría concuerdan en que un entorno sostenible debe ofrecer una norma de existencia de alta calidad en las dimensiones económica, social y ambiental, con sostenimiento a largo plazo. Esto implica un equilibrio en cada una de las dimensiones para que sus participantes: seres humanos, naturaleza y el planeta entero disfruten de una alta calidad de vida. El equilibrio requiere que ningún participante prospere a costa de otros. Una condición imposible de crear bajo el actual paradigma capitalista darwinista, de economía de oferta, donde la competencia salvaje es la norma y la lógica del mercado es ganar a costa de otros seres humanos, la Madre Naturaleza y el planeta. Una abrumadora cantidad de evidencia fehaciente disponible, incluyendo los reportes comentados del PNUD, muestra que la lógica del mercado es completamente insostenible para las tres dimensiones, incluyendo a los dueños del mercado, y nos llevará en el futuro no muy distante a la desaparición irreversible de todas las especies y el planeta.

El actual sistema abunda en situaciones completamente insostenibles que además causan gran miseria y sufrimiento todos los días a miles de millones de seres humanos y de otras especies. En la médula del actual paradigma, yacen los intereses de los grandes inversionistas institucionales. Éstos son quienes exigen a sus empresas rendimientos excesivos y siempre mayores a cada trimestre. El valor del accionista es el fin supremo del actual paradigma. La especulación en los mercados bursátiles financieros y de materias primas es uno de sus principales mecanismos de enriquecimiento, que a su vez causa la ruina de millardos de seres humanos.

Un ejemplo paradigmático es el caso del café. Cuando las cláusulas de cuotas del Acuerdo Internacional de Café (AIC) se suspendieron en 1989, cuando el gobierno estadounidense se separó de ellas –en ese entonces el AIC era el instrumento principal para estabilizar los precios internacionales de café– los consumidores gastaban aproximadamente US\$30 millardos al año en café (1990), de los que la participación de los países productores era aproximadamente de \$12 millardos (o 40 por ciento). Hoy en día, los consumidores gastan un promedio de \$80 millardos al año en café y la participación para los países productores se ha derrumbado a aproximadamente \$5,5 millardos (6,9 por ciento).<sup>14</sup> El colapso en la participación puede atribuirse principalmente al sistema especulativo impuesto por quienes controlan el mercado.

Este sistema especulativo opera a lo largo de toda la amplia gama de materias primas provenientes en gran parte de los países del Sur. El PNUD afirma que *las políticas de comercio injustas continúan negando a millones de personas en los países más pobres una ruta de escape de la pobreza, y perpetuando desigualdades obscenas*.<sup>15</sup> En efecto, mientras los países del Norte continúan manteniendo el proteccionismo para sus exportaciones, imponen premeditadas estructuras de explotación. Destacan entre ellas la función de la OMC y de las instituciones multilaterales de Bretton Woods y los bancos regionales de supuesto desarrollo. El financiamiento multilateral genera endeudamiento usurero, anatocista –cobro de intereses sobre intereses– y fuerza la apertura de los mercados a través de sus políticas de condicionamiento. Estas estructuras no tienen otro fin mas que la depredación capitalista por parte de las TNLs, las reinas del sistema.<sup>16</sup> La explotación no sólo sucede en el intercambio comercial de productos y servicios sino de manera muy importante en los salarios integrados en el intercambio comercial. De este modo, se imponen altas remuneraciones salariales para la mano de obra del Norte y remuneraciones de cuasi-esclavitud para la mano de obra del Sur. Estas remuneraciones, como nos explica Jedlicki, no son fijadas en función de la lógica del mercado, sino de manera exógena a ésta lógica, por vía institucional. Se trata del imperialismo comercial descrito por Emmanuel. Así, los términos de

comercio entre Norte y el Sur, resultan depredadores y por tanto absolutamente insostenibles para las sociedades del Sur. Este sistema de explotación conlleva inherentemente la violación sistémica de un buen número de DDHH en millardos de personas todos los días, principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales, mas no exclusivamente.

Es tal el empecinamiento de los gobiernos agentes del gran capital mundial, que aún tratándose de la búsqueda de fuentes alternativas y sostenibles de energía los criterios de la lógica del mercado capitalista persisten. En la actualidad nos enfrentamos –debido a poderosos capitales petroleros, automotrices y de otros sectores– a la aquiescencia reticente de la mayoría de los gobiernos hacia el consumo de fuentes de energía alternativas, no fósiles, supuestamente renovables y menos contaminantes. Si realmente se tuviera un compromiso con el sostenimiento holístico, habría gran interés y voluntad política para establecer como fin primordial, condición *sine qua non*, desarrollar un entorno equilibrado en el consumo de todas las fuentes de energía, privilegiando las menos contaminantes, y en su sostenimiento a largo plazo. Para lograrlo es más que evidente que tendríamos que modificar de raíz nuestros hábitos de consumo. Tendremos que dejar de ser sociedades de consumo por antonomasia para convertirnos en sociedades ancladas en la cultura del verdadero sostenimiento. En este patrón cultural, otorgaríamos absoluta prioridad, por ejemplo, a los medios de transporte masivos. En lugar de eso, las posturas actuales de los gobiernos exhiben sin ambages la intención de sustituir parcialmente el consumo de petróleo por etanol derivado del maíz, azúcar, soja y otros granos, sin trastocar los patrones de consumo de energía y de todos los productos característicos de nuestro actual entorno, sean o no realmente necesarios; ergo, sin trastocar el sistema de mercado imperante. Por designio del gran capital y de su socios en los gobiernos, se insiste en mantener como principal medio de transporte los mismos vehículos de transporte individual. No importan todas las consecuencias nefastas que dicha alternativa generará en muchos aspectos, como el impacto por la destrucción de ecosistemas boscosos para su producción –principalmente en el Sur– los impactos en la oferta y en la economía de las cadenas de alimentación, el consecuente impacto en la soberanía alimentaria de muchas naciones y en el mismísimo calentamiento global, con su enorme cauda de problemas, pues el etanol no está libre de contaminar por ser de origen vegetal. La publicidad automotriz, con el beneplácito de los gobiernos, está creando el mito de que un vehículo que utilice etanol en lugar de gasolina no es contaminante, cuando sólo es menos contaminante pues sigue emitiendo monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). No en balde, Noruega acaba de prohibir que la publicidad utilice términos como “limpio”

“ecológico” y “verde”.<sup>17</sup> Estos impactos, todos negativos, se derivan directamente del empecinamiento en pensar con criterios mercantilistas.

*“mediante una serie de mitos, como que los bio-combustibles no generarán deforestación, ni hambre, ni empobrecimiento rural en el Sur, se desvía nuestra atención de los intereses del gran capital”*

Los llamados bio-combustibles permiten a los políticos pintarse de verdes sin comprometerse con la construcción de un entorno verdaderamente equilibrado, sostenible a largo plazo y para todos, especialmente para los millardos de desposeídos. Como nos explica Eric Holtz-Giménez, mediante una serie de mitos, como que los bio-combustibles no generarán deforestación, ni hambre, ni empobrecimiento rural en el Sur, se desvía nuestra atención de los intereses del gran capital. Así, las TNLs comienzan a invertir grandes cantidades en el desarrollo de los bio-combustibles. Tras bambalinas, a pesar de las leyes anti-monopolio, TNLs de granos, automotriz e ingeniería genética: ADM y Monsanto; Chevron y Volkswagen; BP, DuPont, y Toyota, se están asociando con el fin de consolidar la investigación, producción, procesamiento y cadenas de distribución de alimentos y sistemas de combustibles. Indonesia y Malasia expanden sus plantaciones de palma para abastecer hasta el 20% del mercado de bio-combustibles de la Unión Europea, y Brasil se apresta a incrementar en 500 por ciento las hectáreas dedicadas a la caña de azúcar. Holtz-Giménez nos explica que la rápida capitalización y concentración de la industria de bio-combustibles es extrema, con un incremento de 800 por ciento en los pasados tres años.<sup>18</sup> Consecuentemente, el futuro de las fuentes alternativas de energía es totalmente gestionado hoy en día con los criterios mercantilistas de poderosos intereses privados, y los gobiernos se sienten muy cómodos con un enfoque que por definición no puede ser ni sostenible, ni democrático ni respetuoso de los DDHH. A propósito, Amigos de la Tierra Europa acaba de publicar un estudio que denuncia precisamente la cercana asociación de los gobiernos de la Unión Europea y las transnacionales para canalizar fondos públicos a empresas privadas en proyectos que están muy lejos de beneficiar al interés público. Se trata de los proyectos de la llamada “economía del bio-conocimiento” enfocada a la producción de bio-combustibles y organismos genéticamente modificados (OGMs) en los que la Comisión Europea está gustosamente cerrando tratos con Bayer Cropscience, DuPont/Pioneer, Monsanto y Syngenta entre otras. El reporte pone en seria tela de juicio la ausencia de compromiso de la Unión Europea con sus supuestos principios democráticos, al ignorar por completo la oposición pública a estos proyectos.<sup>19</sup>

Mientras tanto, una cuarta parte del planeta, la clase media que ha sido totalmente enajenada por el consumismo, el individualismo y la obsesión de que para estar bien hay que tener y no ser, continúa siendo manipulada mediante el señuelo de la gratificación instantánea y la adicción a consumir para satisfacer necesidades creadas que no son reales, sin darse cuenta de que cruzamos un umbral sin retorno que nos encamina rápidamente hacia nuestro exterminio.

*“en donde más prevalece y más trasciende la violación de los DDHH es en el ámbito de los negocios”*

Este entorno mercantilista es totalmente incompatible con el sostenimiento holístico a largo plazo y con el respeto de los DDHH. El paradigma capitalista va contra natura del verdadero sostenimiento. Los dueños del mundo insisten hasta la ignominia, obsesionados con el poder, en imponer al mundo el mismo sistema prevaleciente, a como de lugar, sin importar sus consecuencias finales. Mas la realidad es que no hay más opciones que cambiar de sistema o acabar con el planeta. Un sistema anclado en la desigualdad exacerbada es totalmente insostenible. ¿Cómo esperar que un sistema de mercado basado en la reproducción y acumulación de capital a costa de todo sea sostenible? Por naturaleza, dicho sistema es depredador. Por antonomasia, el capitalismo es depredador. Esta característica lo hace total y absolutamente incompatible con el verdadero sostenimiento. En consecuencia, para cambiar este derrotero, la *mercadocracia*, el sistema capitalista, tendrá que ser reemplazado por un nuevo entorno de real sostenimiento, con un verdadero compromiso con nuestra supervivencia, que vaya sin tregua en pos del sostenimiento de alta calidad en las dimensiones económica, social, ambiental y, por supuesto, con los DDHH.

*“se trata de evitar llevar a la discusión que el debate es precisamente que las empresas son sistemáticas violadoras de DDHH y que de lo que se trata es tan sencillo como que lo dejen de hacer”*

### **I.(e) Sobre el estado de los DDHH**

Habiendo un enorme déficit democrático y un paradigma económico muy injusto, depredador por antonomasia y de suyo incompatible con el verdadero sostenimiento, padecemos un amplísimo déficit en el respeto a los DDHH en todas las esferas de la vida. No obstante, precisamente porque la globalización del mercado neoliberal, en beneficio de los muy privados intereses del gran capital internacional y sus socios en los gobiernos, ha sido encumbrado como poder omnímodo que rige el destino de las sociedades y del planeta, en donde más prevalece y más trasciende la violación de los DDHH es en el ámbito de los negocios. Así, como veremos al analizar los documentos y el discurso de quienes

pretenden definir el papel de la empresa en el ejercicio y respeto de los DDHH inalienables, se habla de que la globalización es todo un éxito, que ha traído grandes beneficios para la enorme mayoría de los habitantes del planeta. Se nos dice que sólo se trata de contribuir a aumentar estos beneficios y que se goce aún más de los DDHH. Se arguye que cuando éstos no se respetan es responsabilidad de los gobiernos pero no del capital ni del sistema de mercado y sus empresas; que el fin de las empresas es sólo eso: el reproducir y acumular capital y no vigilar ni cuidar que se respeten los DDHH.

Es evidente que la argumentación intenta desviar el debate hacia las responsabilidades públicas frente a las de las empresas, las cuales, en efecto, no tienen que ver con el cuidar que se respeten los DDHH. En realidad se trata de evitar llevar a la discusión que el debate es precisamente que las empresas son sistemáticas violadoras de DDHH y que de lo que se trata es tan sencillo como que lo dejen de hacer. Se trata de hacerlas responsables ante la sociedad de sus actos de violación de DDHH, por acción o por omisión, en todo derecho humano que es violado como resultado del impacto generado por su actividad. Como dice el *Interfaith Centre on Corporate Responsibility*: “las empresas no son responsables de elevar el nivel de vida de un país, mas sí son responsables de sus acciones y de su impacto, positivo o negativo, en el esfuerzo de un país por elevar su nivel de vida”.<sup>20</sup>

Es imposible evadir la responsabilidad empresarial en la violación de DDHH cada vez que una empresa paga salarios miserables a miles de trabajadores o cuando subcontrata a otros exigiendo un precio que sólo puede ser garantizado pagando salarios miserables, como, por ejemplo, lo hace Wal-Mart por sistema, por estrategia, por cultura, por análisis financiero, por mejores prácticas. Estas empresas violan los derechos de los trabajadores a percibir un salario digno cada segundo que toma leer estas líneas. Mas, como veremos, curiosamente el tema de salarios dignos es casi inexistente en todos los marcos voluntarios multilaterales, como los de la OCDE o los voluntarios multi-sectoriales como los del GRI.<sup>21</sup> Como veremos, este indisputable derecho enarbolado en el artículo 23 de la Declaración Universal de DDHH y en el artículo 7 de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es sigilosamente omitido o cuidadosamente dejado en la ambigüedad para que sea presa de la interpretación que más convenga a cada quien.

A pesar de esta curiosa omisión, sucede que este derecho, el más sistemáticamente violado en las operaciones de las empresas en el Sur, la razón principal

–y a menudo exclusiva– por la que las empresas del Norte invierten en el Sur, tiene un impacto enorme en el porvenir de los pueblos del Sur. Si se explota sistemáticamente a los trabajadores del Sur –no sólo por TNLs sino también por empresas domésticas de los países supuestamente en desarrollo– no hay distribución de la riqueza, no hay derrama agregada, no hay mercado en el Sur. Estos rasgos fundamentales de la explotación Norte-Sur han permitido que buena parte de las sociedades del Norte, a pesar de los retrocesos recientes, accedan a una calidad de vida muy superior a la de los países del Sur. En efecto, esta relación Norte-Sur constituye un subsidio que el Sur da al “buen vivir del Norte”.

El respeto al derecho a un salario digno es el detonador principal del acceso a una calidad de vida digna y de su impacto positivo en el desarrollo económico de un entorno social. Su violación por sistema institucional constituye la violación de un derecho humano fundamental que impide a una empresa considerarse socialmente responsable. Las empresas violadoras de este derecho, la vasta mayoría de las TNLs –todas aquellas que practican por sistema el llamado moderno trabajo esclavo, el intercambio desigual, el imperialismo comercial– son las culpables directas de la miseria de decenas de millones de personas en el mundo. Son las autoras directas, intelectuales o materiales, de la violación del derecho a una vida digna. Entonces no se trata de si las empresas son responsables o no de que se respeten los DDHH o si lo son los gobiernos. Ésta no es la verdadera discusión. La auténtica discusión es el exigir que las empresas dejen de estar violando sistemáticamente los DDHH de sus trabajadores o los de sus cadenas de abastecimiento en el Sur, como es el caso de los salarios dignos, el de mayor impacto social, pero ciertamente no el único.

Así es como adelante analizaremos, con el mayor detalle posible, las posiciones de dos grupos. Uno son aquellos que se inclinan porque los DDHH sólo sean parte de las mejores prácticas de negocios y no como obligación directa de cualquier actor a respetarlos en todo momento, y que muchos de los conceptos se mantengan tan ambiguos como hoy. Esto se propone bajo el subterfugio de no abordar el tema de los actos de violación de las empresas sino de la responsabilidad de protección y penalización, que obviamente recae en los gobiernos. El otro grupo es aquel que insiste y exige que se establezca un marco legal universal que obligue a las empresas a dejar de violar los DDHH, como lo hacen hoy en día por sistema, y que sean penalizadas mediante un marco legal con verdadero poder de penalización y por ende de persuasión.



- <sup>3</sup> Informe sobre Desarrollo Humano 2005: La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 2005, p. 3 -5.
- <sup>4</sup> Mexican Carlos Slim Zips Past Gates in Rich Ranks: Report. Reuters, 3 July 2007.
- <sup>5</sup> Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 2006, p. 56.
- <sup>6</sup> Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2007. Organización de Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 2007, p. 3.
- <sup>7</sup> Alejandro Calvillo Unna y Álvaro de Regil Castilla. El Moderno Trabajo Esclavo. La Alianza Global Jus Semper, Comentario Temático LISDINYS, Marzo 2007.
- <sup>8</sup> Claudio Jedlicki. El Intercambio Desigual. La Alianza Global Jus Semper, Breviario Temático LISDINYS, Septiembre 2007.
- <sup>9</sup> Jean Marie Harribey, DO WE REALLY WANT DEVELOPMENT? Growth, the world's hard drug, Le Monde Diplomatique, agosto, 2004
- <sup>10</sup> Lawrence Mishel, Jared Bernstein and Sylvia Alegretto "The State of Working America 2006-2007", Economic Policy Institute, Cornell University Press 2006
- <sup>11</sup> Françoise Castex. Europe's undemocratic Union. Le Monde Diplomatique, January 2007.
- <sup>12</sup> Álvaro de Regil. The Neo-Capitalist Assault. The Historical Background in the XVIII and XIX Centuries. Essay II of Part I (The Economics of Reference). GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT – A TLWNSI ISSUE ESSAY SERIES. The Jus Semper Global Alliance, April 2003
- <sup>13</sup> Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 2006, p. vi.
- <sup>14</sup> Informe sobre Desarrollo Humano 2005: La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 2005, p. 158 - 161.
- <sup>15</sup> UNDP. Unfair Trade Policies Damaging Growth Prospects in Developing Countries. 2005 Human Development Report, Comunicado de prensa, 7 Septiembre 2005.
- <sup>16</sup> Un buen ejemplo actual puede observarse en los proyectos de gas natural en la cuenca amazónica peruana, en los proyectos Camisea I y II. Para mayor referencia ver: Tom Griffiths. Exigiendo Responsabilidad al BID y la CFI en Camisea II. Una Revisión de Estándares Internacionales Aplicables, y Diligencia y Conformidad Debidas. Amazon Watch, septiembre 2007.
- <sup>17</sup> Manuel Ansedé. Los coches 'verdes' también contaminan. Público. Madrid, España. 27 de septiembre de 2007
- <sup>18</sup> Eric Holtz Giménes. Exploding the biofuel myths. Displaced peasants, higher food prices – and a crutch for the petrol economy. Le Monde Diplomatique. July 2007.
- <sup>19</sup> Friends of the Earth Europe. Too Close for Comfort. The relationship between the biotech industry and the European Commission. An Analysis. October 2007.
- <sup>20</sup> Interfaith Centre on Corporate Responsibility. Letter to John Ruggie of 10 October 2006.
- <sup>21</sup> Álvaro de Regil Castilla. Salarios Dignos: El Eslabón Perdido del GRI. Las Nuevas "Directrices G3 de Reporteo de lo Sostenible" Continúan Evadiendo a los Salarios Dignos, el Eslabón Perdido de "lo Sostenible". La Alianza Global Jus Semper, Ensayo Temático LISDINYS. Marzo 2006.







## II. Breve periplo en el desarrollo de la RSC en general y en particular en el entorno de los DDHH

El desarrollo del debate acerca de las responsabilidades sociales y ambientales de las empresas data de por lo menos los años sesentas. Recuerdo bien en mi juventud los boicots de consumo contra Nestlé por su fórmula infantil, cuyas raíces se pueden rastrear hasta 1939.<sup>22</sup> Fue a partir de los setentas, con la transformación de muchas empresas en entidades globales, que se empezó a discutir cada vez con mayor énfasis los impactos negativos que la actividad de negocios tenían en todos los ángulos de la existencia humana y del planeta. Hasta ese entonces los convencionalismos sociales daban por descontado el impacto positivo de las empresas por naturaleza. Estas inquietudes portaban un trasfondo inherente anclado en los derechos humanos. Se juzgaba el impacto de las empresas en función del goce de derechos humanos que

formaban parte del sentido común, especialmente en las sociedades del Norte.

De esta forma, desde los años setentas se iniciaron también los esfuerzos por controlar en Naciones Unidas el impacto de los negocios sobre los DDHH. En 1974, se crearon la Comisión de Sociedades Transnacionales, dentro del Consejo Económico y Social de la ONU (CESNU), compuesta por 48 estados miembros, la cual creó un código de conducta, y el Centro de Sociedades Transnacionales, como organismo autónomo de la ONU. Organismos que, como relata el jurista Alejandro Teitelbaum, nunca pudieron cumplir con sus misiones originales por la oposición conjunta de las grandes potencias en sociedad con sus TNLs.<sup>23</sup> En cuanto a los Estados Miembros de la ONU, el desarrollo de marcos normativos con fuerza legal, como les corresponde, que regulen el impacto de las empresas nacionales o TNLs en su área de actividad, como cabe esperar, ha brillado por su ausencia absoluta, exceptuando una primera legislación de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) aprobada, apenas este verano, por el Parlamento de

Indonesia. La ley, sin embargo, no define las normas de RSC ni las sanciones por violarlas, aunque anuncia que lo hará en el futuro cercano.<sup>24</sup>

Por otro lado, en la última década, ante la creciente inquietud social por el impacto pernicioso de las empresas en su llamada “esfera de influencia” se han desarrollado un sinnúmero de marcos normativos, principios y directrices emanadas principalmente de organismos multilaterales y grupos multi-sectoriales, estos últimos con representantes de sectores sociales, gubernamentales y empresariales. Adelante brevemente se describen los principales.

## II.(a) Las Normas de la ONU

Las “Normas Sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos” fueron preparadas por el Grupo de Trabajo, creado para ese propósito por La Subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, dependiente del Consejo Económico y Social de la ONU (CESNU) en una resolución que data de 1998. La Subcomisión solicitó al Grupo de Trabajo investigar los métodos de trabajo y actividades de las empresas TNLs, estudiar la información sometida por los gobiernos, agencias especializadas, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas, y transmitir estos comentarios y recomendaciones a las empresas TNLs o a otras empresas pertinentes, gobiernos y organizaciones no gubernamentales u otras fuentes de información relevantes. Según relata Teitelbaum, quien participó directamente en el debate, el mandato del Grupo de Trabajo era darle continuidad a un estudio sobre la impunidad en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. De esta forma, después de cuatro años de debate y de fuerte oposición de las principales potencias,<sup>25</sup> la Subcomisión aprobó unánimemente en la sesión 55ª de agosto de 2003 a las Normas<sup>26</sup>, adoptándolas como borrador, y decidió transmitirlas a la Comisión de Derechos Humanos para la consideración y adopción de la Comisión en marzo de 2004.<sup>27</sup>

A pesar del largo debate, las Normas propuestas por la Subcomisión a la Comisión de DDHH nunca fueron adoptadas. La Comisión agradeció el esfuerzo y anunció que las evaluaría, mas afirmó sin ambages que el borrador no había sido solicitado por la Comisión y que, como borrador de propuesta, no tenía validez legal alguna, y comunicó a la Subcomisión que se abstuviera de realizar actividad de observación alguna con las empresas.<sup>28</sup> Así, el borrador de las Normas, neutralizado hasta ahora por quienes se le oponen, sólo queda como referencia del esfuerzo por desarrollar un marco normativo.

*“como muchos sectores sociales lo han expresado, el rasgo común de todos los instrumentos, a pesar de su naturaleza voluntaria, es aspirar al más bajo común denominador en la definición de las responsabilidades empresariales por el impacto de su actividad”*

## II.(b) El Pacto Mundial

Si duda cabe sobre en dónde yace el interés de quienes controlan a la ONU, el llamado Pacto Mundial es una clara alegoría de las posturas que aparentan cambiar para que todo siga igual. El Pacto Mundial, propuesto por el Secretario General de la ONU en 2000, consistió originalmente en un conjunto de nueve principios, a los que posteriormente se agregó el principio de luchar contra la corrupción.<sup>29</sup> Además de este tema, el Pacto cubre las áreas de DDHH, derechos laborales y medio ambiente. Por su naturaleza moral, los principios se ofrecen para observarse por las empresas de manera exclusivamente voluntaria. En la mayoría de los sectores de la sociedad civil global, se considera al Pacto como un instrumento retórico de relaciones públicas, dada su naturaleza desprovista de balance por ser extremadamente amistosa hacia las empresas.

## II.(c) Otros marcos multilaterales

Además del borrador de las Normas de DDHH y del Pacto Mundial, existen una serie de marcos multilaterales de RSE que intentan de alguna forma reducir la enorme brecha existente entre la responsabilidad empresarial por los impactos de su actividad en su esfera de influencia y el clima de neoliberalismo económico sin cortapisas que impera. En ese sentido hay tres instrumentos a destacar:

### ♦ Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Las Directrices de la OCDE son recomendaciones que hacen los gobiernos miembros de esta organización a las TNLs que operan en o desde los estados que se adhieren a las Directrices. Éstas tienen como fin ayudar a asegurar que las TNLs actúen en armonía con las políticas de los países donde operan y con las expectativas sociales. Constituyen el único código de conducta para las TNLs respaldado multilateralmente. Las Directrices se componen de una serie de principios y normas de conducta empresarial responsable en las áreas de DDHH, transparencia, corrupción, impuestos, relaciones laborales y ambientales y protección de los consumidores, de forma estrictamente voluntaria. Destaca en este marco el instrumento de los Puntos Nacionales de Contacto (PNCs), los cuales se consideran responsabilidad de los estados miembros para establecerlos dentro de su gobierno, con el fin de realizar actividades de promoción, gestionar las consultas y contribuir a la resolución de los problemas que surjan.<sup>30</sup> Lejos de constituir un marco regulador excelso, las Directrices dejan mucho que desear, a pesar de que han mejorado.



Este es el caso de la admisión, a partir de 2000, del derecho de la sociedad civil de utilizar a los PNCs en los países miembros y los no miembros que se hayan adherido a las directrices para presentar quejas concretas contra actos irresponsables perpetrados en cualquier país por una TNL.<sup>31</sup> Además de la enorme debilidad, al ser voluntarias, su otra gran debilidad es el hecho de depender de la poca voluntad política de los gobiernos para presionar a las empresas para integrar a las Directrices como parte de su cultura de negocios.

#### ♦ **Declaración Tripartita de Principios Sobre las Empresas Multinacionales (EMNs) y la política social.**

La Declaración EMN de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) data de 1977 y expresa fomentar la asociación y la cooperación entre las empresas, los trabajadores y los gobiernos para maximizar las contribuciones positivas que las inversiones de las TNLs pueden aportar al progreso económico y social, y ayudar a resolver las dificultades a que puedan dar lugar dichas inversiones. La Declaración EMN constituye una serie de principios que buscan orientar a las empresas en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales, algunos de los cuales están inspirados en la Declaración Universal de DDHH. Refuerzan sus disposiciones los convenios medulares de la OIT así como otros convenios prioritarios. Mediante esta Declaración se insta voluntariamente a las empresas a observar en la medida de lo posible los principios que la integran.<sup>32</sup>

♦ **Libro Verde.** Este instrumento fue ideado por la Unión Europea para fomentar a la RSE. El documento declara como objeto iniciar un amplio debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la RSE a nivel europeo e internacional. El Libro Verde no establece normas o principios sino una serie de conceptos que cubren las dimensiones social, económica, ambiental y de DDHH en el ámbito de acción de las empresas. El instrumento representa en sí un raro ejercicio sobre el tema desde el ángulo de los gobiernos. No obstante, como veremos adelante, en años recientes la UE ha adoptado posiciones claramente de respaldo al actual contexto voluntario rechazando el desarrollo de cualquier legislación.<sup>33</sup>

## II.(d) Marcos voluntarios multi-sectoriales

Además de los instrumentos multilaterales, existen más de media docena de normas, directrices, códigos de conducta y principios internacionales, de origen multi-sectorial, varios de ellos respaldados parcialmente por las empresas. Entre ellos destacan la Iniciativa del Comercio Ético (ETI por sus siglas en inglés), SA 8000, Instituto Ethos, Principios Caux Mesa Redonda, GRI, AA 1000 y

los Principios Globales Sullivan. Todos abordan directamente el respeto de los DDHH y, por supuesto, todos se proponen en el contexto de la responsabilidad voluntaria. Algunos, como el GRI, incluso permiten que las empresas elijan las actividades que sí deseen reportar y omitan las que no les parezcan pertinentes, según sus propios criterios.<sup>34</sup> En los últimos años el GRI y el SA 8000 parecen haberse convertido en los instrumentos de referencia más populares entre las empresas. El GRI aborda todas las dimensiones que reciben el impacto de la actividad empresarial y el SA8000 se especializa en los derechos laborales.

Como es claro, tanto los instrumentos multilaterales como los multi-sectoriales comparten como hilo conductor el contexto de la responsabilidad voluntaria. La gran mayoría, en cada una de las áreas que abordan se basan en convenios y declaraciones internacionales, como la Declaración Universal de los DDHH y, en materia de derechos laborales, en los Convenios y Recomendaciones de la OIT. No obstante, además de compartir su naturaleza voluntaria, todos comparten la omisión del derecho a un salario digno. Aunque algunos retóricamente proponen un enfoque progresista hacia el salario digno, su normativa exige, voluntariamente, el salario mínimo. Además, nadie define lo que debe de ser un ingreso adecuado para el goce de una calidad de vida digna ni mucho menos lo que debe de ser un salario digno. Todo queda en la ambigüedad o en la franca omisión. Como muchos sectores sociales lo han expresado, el rasgo común de todos los instrumentos, a pesar de su naturaleza voluntaria, es aspirar al más bajo común denominador en la definición de las responsabilidades empresariales por el impacto de su actividad. Desde la perspectiva de Jus Semper, es menester destacar el rasgo común de todos en la virtual ausencia del pago de salarios dignos como un derecho inalienable; no sólo por ser un detonador económico fundamental sino porque está detrás, y en la médula, del sistema de explotación que padece la humanidad, especialmente en las relaciones Norte-Sur. Así, por omisión, todos los instrumentos antes comentados condonan la violación sistemática de este, recalco, derecho humano inalienable, la razón de ser de Jus Semper.

No es el caso del borrador de las Normas de DDHH de la ONU. En contraste con los instrumentos anteriores, y a pesar de que las Normas requieren, como expondré adelante, de la clarificación adecuada de muchos conceptos, éstas esbozan el posible advenimiento de un marco obligatorio, con sistemas de control, y en general son más precisas al abordar el respeto a los DDHH en el lugar de trabajo.<sup>35</sup>

- <sup>22</sup> Noemí Bromberg Bar-Yam, The Nestle Boycott: the story of the WHO/UNICEF Code for Marketing Breastmilk Substitutes, Mothering Magazine, invierno 1995.
- <sup>23</sup> Alejandro Teitelbaum. EL TEMA DE LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES EN LA ONU. Agosto 2006.
- <sup>24</sup> Andi Haswidi, The Jakarta Post, Jakarta. CSR becomes mandatory for most companies. 21 de julio de 2007
- <sup>25</sup> Alejandro Teitelbaum. EL TEMA DE LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES EN LA ONU. Agosto 2006.
- <sup>26</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 55º período de sesiones. Tema 4 del programa. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Comentario relativo a las normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.1. 4 de agosto de 2003
- <sup>27</sup> La Alianza Global Jus Semper. La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU ha emitido normas que apuntan a un posible advenimiento de una RSC obligatoria, pero continúa legitimando una estructura que genera inequidad sin límites. Comentario Temático LISDINYS. Septiembre 2003.
- <sup>28</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 60 periodo de sesiones.. INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 60 PERÍODO DE SESIONES, respecto E/CN.4/2004/L.11/Add.7 22 abril 2004: Resolución 2004/116, pg. 87.)
- <sup>29</sup> Organización de Naciones Unidas. La responsabilidad cívica de las empresas en la economía mundial. El Pacto Mundial. Mayo 2005.
- <sup>30</sup> Organisation for Economic Cooperation and Development. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises. REVISION 2000. Paris, France, 2000.
- <sup>31</sup> OECD Watch. CINCO AÑOS DESPUES. Una revisión de las Directrices de la OCDE y los Puntos Nacionales de Contacto. SOMO - Centre for Research on Multinational Corporations. Amsterdam, Holanda. 2005
- <sup>32</sup> OIT. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, tercera edición. Ginebra, Suiza. Oficina Internacional del Trabajo, 2001
- <sup>33</sup> Comisión de las Comunidades Europeas. LIBRO VERDE. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, Bélgica, 18.7.2001
- <sup>34</sup> Álvaro de Regil Castilla. Salarios Dignos: El Eslabón Perdido del GRI. Las Nuevas "Directrices G3 de Reporteo de lo Sostenible" Continúan Evadiendo a los Salarios Dignos, el Eslabón Perdido de "lo Sostenible". Ensayo Temático LISDINYS, Ensayo Temático LISDINYS. Marzo 2006.
- <sup>35</sup> Alyson Warhurst and Katy Cooper, in association with Amnesty International. The 'UN Human Rights Norms for Business'. Maplecroft. Bradford on Avon, UK. 26 July 2004.





### III. La discusión dentro del seno de la ONU y la Unión Europea sobre las responsabilidades de las empresas con respecto a los DDHH

El debate surgido debido al impacto de la actividad empresarial en el respeto a los DDHH se ha generado principalmente dentro de los senos de la ONU y la UE o se ha dirigido hacia ellos, con los países cabildeando internamente en estos senos o simplemente guardando un bajo perfil. Aunque el debate tiene décadas, es a partir de la publicación del borrador de la Normas de DDHH de la ONU que éste se ha intensificado, acorde con la creciente presión que ejerce la sociedad civil en todo el mundo para meter en cintura a las empresas. En ese debate se han decantado claramente dos bandos.

#### III.(a) El Caso Central de la Normas de la ONU

Como es muy previsible, en contra se tiene a los organismos multilaterales, gobiernos de muchos estados, gremios empresariales y empresas, y a favor a la mayor parte de la sociedad civil organizada, incluyendo a muchos académicos, abogados y consultores en el tema.<sup>36</sup>

♦ **Posición a favor.** En forma sucinta, quienes están a favor comparten el consenso de que las Normas, considerando el contexto neoliberal actual y los recursos de RSE disponibles, son un claro paso, legítimo y con autoridad, en la dirección de un marco legal que gobierne el impacto empresarial en los DDHH. Esa posición la han externado sin ambages organizaciones de la talla de Amnistía Internacional<sup>37</sup> y la Federación Internacional de DDHH, así como miles de organizaciones sociales, incluyendo asociaciones de consumidores y profesionales relacionados con la materia en todo el mundo. Destaca también, singularmente, la decisión de un grupo de TNLs de la BLIHR antes mencionada, que, a diferencia de la vasta



mayoría de empresas, no rechazaron de entrada a las Normas y en cambio decidieron, desde finales de 2003, ponerlas a prueba durante varios años para valor los resultados.<sup>38</sup>

Otros argumentos positivos destacables son:<sup>39</sup>

- sobrepasa el ámbito de las normas laborales,
- suma y no duplica otras iniciativas al especializarse en DDHH,
- propone una serie completa de normas de DDHH y reglas de juego equitativas para todas las empresas,
- establece un adecuado equilibrio entre las obligaciones de los estados y las de las empresas en materia de DDHH,
- propone un modelo para establecer legislación nacional en la materia,
- toma en cuenta el cansancio y la desconfianza de la sociedad civil ante las iniciativas voluntarias,

♦ **Posición en contra.** Quienes están en contra alegaron que el borrador de las Normas representa un cambio mayor que se aleja de la adhesión voluntaria de las empresas a las normas de DDHH y que ese cambio no ha sido demostrado. Se arguye también, con actitud legalista, que muchas de las Normas no han sido ratificadas por muchos estados y que se intenta adjudicar a las empresas responsabilidades que corresponden sólo a éstos. Los principales objetantes de las normas, además de muchas empresas y gremios empresariales internacionales, fueron la Cámara Internacional de Comercio y la Organización Internacional de Patrones (IOE por sus siglas en inglés), organismos cúpula de las grandes empresas en el mundo. Otros argumentos negativos destacables son:

- redacción negativa y tono parcial en contra de las empresas,
- contenido vago e impreciso,
- se exige más a las empresas que a los estados mismos,
- aplicación gravosa y de imposible observancia,
- duplicación con directrices de la OCDE y la declaración tripartita de la OIT

*“las Normas siguen un derrotero distinto y positivo en contraste con lo hasta hoy disponible multilateral y sectorialmente”*

❖ **Valoración de las Normas.** El borrador de las Normas tiene muchos conceptos que deben aterrizar y proveer de mecanismos que midan la observación de normas específicas por parte de las empresas. Desde la perspectiva LISDINYS, el concepto medular de salario digno es ejemplo inmejorable para ilustrar el argumento, pues dista mucho de estar definido con claridad. Las

Normas no aluden al pago de salarios dignos sino que, como lo explican en sus comentarios, enuncian el concepto de salarios justos, que aseguren un nivel de vida adecuado con vistas hacia la mejoría progresiva, haciendo énfasis en tener cuidado de pagar salarios justos en los países menos desarrollados. El salario digno, enarbolado en la Declaración Universal de los DDHH (artículo 23) y en los Derechos ECOSOC (artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y fundamental para aspirar a un entorno verdaderamente sostenible, es abordado implícitamente en la norma 8 al referirse a la necesidad de una remuneración justa y razonable. No obstante, se mantiene el mismo criterio actualmente utilizado por la OIT, respecto a un salario mínimo, de “práctica y condiciones nacionales”. Ni en la Declaración Universal de DDHH ni en la Derechos ECOSOC se hace referencia a las condiciones nacionales. Esto hace al concepto de compensación justa de las Normas claramente ambiguo al declarar que la remuneración justa y razonable deberá ser *libremente convenida o fijada por las leyes o reglamentos nacionales (la mayor de las dos cifras)*.<sup>40</sup> ¿Cómo pueden las leyes nacionales otorgar salarios dignos y adecuados, cuando la mayoría de éstas sólo aluden al salario mínimo en función del Convenio 131 y la Recomendación 135 de la OIT, sobre la fijación de salarios mínimos? No hay Convenio de salario digno en la OIT. Si en las mayores potencias económicas un salario mínimo está muy lejos de ser un salario digno ¿cómo puede hablarse de salarios justos y adecuados en función de leyes o reglamentos nacionales que sólo aluden al salario mínimo? Hay una enorme brecha entre los conceptos de salario justo y de salario mínimo. Además, no se definen qué es justo, razonable, nivel de vida adecuado, países menos desarrollados, etcétera. Estas ambigüedades requieren de enorme clarificación y de criterios y mecanismos precisos para establecer un concepto universal de remuneraciones dignas –lo mismo sucede con otros conceptos utilizados por las Normas como abordaré adelante.

Es muy posible que la gran ambigüedad sea consecuencia directa del jaloneo en el debate entre quienes desean un marco normativo legal –y cuyas normas sean congruentes con las Declaraciones de respeto a los DDHH– y quienes se le oponen, como relata Alejandro Teitelbaum al comentar los cuatro años de debate para producir el borrador de las Normas. Es muy posible que ésta sea también la causa –las presiones de gobiernos y empresas– para que todos los marcos voluntarios sean muy consistentes en la forma oblicua de abordar el tema de salarios dignos, siempre en función de prácticas y condiciones nacionales y siempre llenos de ambigüedad. A pesar de todo, no hay duda de que las Normas siguen un derrotero distinto y positivo en contraste con lo hasta hoy disponible multilateral y sectorialmente. Se destacan los siguientes rasgos:

- **Obligatoriedad.** Las Normas se proponen como modelo para el desarrollo de la legislación nacional pertinente. Esta es la diferencia fundamental más no la única importante.
- **Un sólo nivel de DDHH en la empresa.** En lugar de pensar en función de diferentes generaciones de DDHH, los llamados “esenciales, esperados y deseables” que, como veremos, tanto dentro de la ONU como afuera se están promoviendo, las Normas establecen un “norma común a alcanzarse” en la que todo es obligatorio y no una opción competitiva con criterios mercantilistas.
- **Proceso inclusivo.** En lugar de permitir que las empresas decidan qué es y qué no es esencial, se arriba a un marco obligatorio, por defectuoso que sea el primer esfuerzo, definido después de cuatro años de debate en el que, a pesar de las obvias asimetrías de poder entre los participantes, hubo gran consideración de la sociedad civil.
- **Responsabilidad omnipresente.** Las Normas se consideran derechos a respetarse en todos los países en la “esfera de influencia” de la empresa, sin importar si existe o no la voluntad política de los gobiernos por protegerlos.
- **Todos somos partes interesadas.** En contraste con la enorme mayoría de instrumentos disponibles, en los que la empresa decide quienes son sus partes interesadas, las Normas hacen un buen esfuerzo por declarar a todos partes interesadas. La norma 22 define a cualquier persona o grupo que resulte afectado directa o indirectamente por la actividad de la empresas como parte interesada, incluyendo a consumidores, clientes, gobiernos, comunidades vecinas, pueblos y comunidades indígenas, ONGs, instituciones crediticias públicas y privadas, proveedores, asociaciones comerciales y demás.
- **Verificación y compensación.** Otra norma a destacar es la 16, que obliga a las empresas a la vigilancia y verificación periódicas independientes, nacional e internacionalmente, aunque difícilmente podrá establecerse objetividad si los verificadores son los gobiernos o la propia ONU, por lo que “otros mecanismos por crearse”, que también considera, sería lo apropiado. Además se considera que el incumplimiento de una norma requerirá medidas de reparación o compensación.
- **Contexto sostenible.** Las Normas hacen un esfuerzo en la norma 10 por establecer el contexto del derecho de las sociedades a un desarrollo sostenible incluyendo el respeto a la soberanía y las políticas de desarrollo nacionales.

En suma, a pesar de sus muchas lagunas y a pesar de visualizarse en el contexto que asume que continuará el paradigma neoliberal actual, incompatible con el real sostenimiento, las Normas fueron pensadas desde su inicio para tener dientes y, por ese sólo hecho, son una

buena plataforma sobre la cual construir un verdadero marco normativo obligatorio del impacto de las empresas en los DDHH, en la que el fin de las sociedades sea el bienestar social y del planeta y no el valor del accionista.

### III.(b) La Reacción de la Comisión de DDHH

Como sabemos, la Comisión de DDHH rechazó, en la resolución 2004/116, el borrador de las Normas para ser considerado para su adopción por los estados miembros. En esa misma resolución solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH la elaboración de un informe que fijara el enfoque y estado legal de las actuales iniciativas y normas, *inter alia* el borrador de las Normas, en relación con las responsabilidades de las empresas y que para su elaboración se consultaran las opiniones de las principales partes interesadas. El informe presenta las principales cuestiones que considera pendientes de resolverse:

- ¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas en la esfera de los DDHH?
- ¿Cuáles son sus límites?
- ¿Con respeto a qué DDHH es responsable una empresa?
- ¿Cómo puede garantizarse la responsabilidad de las empresas?
- ¿Es preciso que la ONU establezca normas universales para la responsabilidad de las empresas en la esfera de los DDHH?
- ¿Cuál sería su naturaleza jurídica?
- ¿Qué instrumentos se necesitan para promover el respeto de los DDHH en el ámbito de las empresas?

*“la actuación de la Comisión de DDHH, respecto a las Normas y las responsabilidades de los negocios por su impacto sobre los DDHH, está anclada claramente en el contexto del mercado como piedra angular de la vida de las sociedades humanas”*

El informe de la Alta Comisionada<sup>41</sup> también arriba a una serie de conclusiones, entre las que destacan:

- Existe un brecha en la comprensión de los DDHH y la empresa.
- Hay interés creciente en debatir sobre una declaración de la ONU sobre normas universales de DDHH en las empresas.
- Hay creciente interés en continuar el diálogo, especialmente incorporando a las opiniones del Sur.
- Hay mérito en las Normas para ser consideradas, en especial para definir qué elementos son útiles. El experimento de la BLIHR podrá contribuir a una mejor comprensión de las responsabilidades.
- los principales temas que requieren mayor clarificación y estudio incluyen:
  - esfera de influencia,
  - complicidad,

- la naturaleza de las responsabilidades positivas de las empresas en apoyo a los DDHH,
- la responsabilidad de las empresas en los DDHH respecto a sus subsidiarias y cadena de abastos,
- la cuestión de jurisdicción y protección de los DDHH cuando el Estado se niega a protegerlos,
- estudios sectoriales sobre el mismo tema,
- estudios de situaciones específicas sobre el mismo tema.

No obstante la retórica sobre el mérito de las Normas, desde que fueron presentadas existió un enfrentamiento entre posiciones irreconciliables a favor y en contra de las Normas;<sup>42</sup> por lo que, con el fin de romperlo, se solicitó al Secretario General el nombramiento de un Representante Especial sobre el tema de las responsabilidades de los negocios respecto a los DDHH.<sup>43</sup> Así, en julio 2005 se nombró al Señor John Ruggie como Representante Especial para el tema con un mandato inicial de dos años, solicitándole un reporte intermedio en 2006 y el final en 2007. Menos de un año después, debido a la grave polarización en la ONU por el control político de la misma por parte de las principales potencias, se maniobró disolviendo a la Comisión de DDHH, que padecía de grave descrédito, para reemplazarla con el actual Consejo de DDHH.<sup>44</sup> Esto provocó que el primer informe<sup>45</sup> del señor Ruggie no se revisará en la siguiente sesión de la Comisión que ya no se celebró propiamente.

*“el sistema de mercado actual es violador sistemático, por naturaleza, de muchos de los derechos humanos enarbolados en la Declaración Universal de DDHH. Entre todos ellos, el más conspicuo es el pago de una remuneración digna”*

❖ **Valoración de la labor de la Comisión.** La actuación de la Comisión de DDHH, respecto a las Normas y las responsabilidades de los negocios por su impacto sobre los DDHH, está anclada claramente en el contexto del mercado como piedra angular de la vida de las sociedades humanas; ergo: el mercado es rey. Esto genera como consecuencia natural que su posición esté claramente en línea con otras iniciativas de la ONU relacionadas con el tema, especialmente con el Pacto Mundial, que favorecen claramente el interés privado de los dueños del mercado.

❖ **Sesgo hacia lo voluntario.** Así las cosas, aunque el Informe preparado por la Comisión no desecha el escenario de Normas obligatorias, es evidente su inclinación hacia la perspectiva empresarial voluntaria. La mayoría de las denominadas cuestiones pendientes del Informe son preguntas razonables que requieren discutirse y clarificarse bajo un amplio consenso. Es

correcto que el borrador de las Normas, como primer esfuerzo detallado en la ONU sobre este tema, deja varias lagunas pendientes. Sin embargo, hay posturas fundamentales en el Informe que exhiben sin ambages la visión de mercado. El caso que más sobresale es la pregunta de si es necesario un marco universal de respeto a los DDHH en el ámbito empresarial no obstante las abundantes evidencias de violación de DDHH por las empresas.

❖ **No reconocimiento de la violación cotidiana de los DDHH en la empresa.** Partiendo de un alud abrumador de evidencias documentadas por innumerables organizaciones civiles a lo largo y ancho del planeta, así como por diversos reportes anuales de las organizaciones multilaterales, podemos afirmar con toda certeza que el sistema de mercado actual es violador sistemático, por naturaleza, de muchos de los derechos humanos enarbolados en la Declaración Universal de DDHH. Entre todos ellos, el más conspicuo es el pago de una remuneración digna. Es menester insistir que es de suyo conocido que las empresas no pagan salarios dignos a sus trabajadores en el Sur, que el motivo principal por el que las empresas instalan o subcontratan operaciones de producción en el Sur es para tener un costo laboral mínimo, que no tiene nada que ver con la lógica económica sino con la lógica institucional entre gobiernos y empresas. Es también de suyo conocido que a la mano de obra se le trata como a un insumo más en la cadena de producción y que es usada y desechada como tal. Las empresas saben perfectamente de esto –sus planes incorporan estas condiciones en sus estrategias premeditadamente, están arraigadas en la cultura de negocios de hoy en día– y tienen total consciencia de la calidad de vida miserable que padecen –debido a estas condiciones– muchos de los seres humanos que participan en sus operaciones.

Juan Somavía, Director General de la OIT, al hablar de lo que debe de ser una globalización justa, declara que el concepto de trabajo decente en la OIT ha llevado al consenso internacional de que el empleo productivo y el trabajo digno son elementos medulares para lograr la reducción de la pobreza.<sup>46</sup> En gran contraste, empresas y gobiernos han hecho todo lo posible por globalizar las demandas de los inversionistas institucionales para proteger sus valores de acción a través de una variedad de instrumentos, como los tratados comerciales y las reglas de inversión. Así, se universaliza el acceso a los mercados de consumo y de mano de obra mediante las mismas reglas, así como los precios de sus productos y servicios; mas, supuestamente, no se comprende por qué deben universalizarse, en un contexto de mercado universal, las reglas de responsabilidad de las empresas y mucho menos el pago de salarios dignos en un contexto universal y obligatorio. ¿En dónde quedó el



consenso internacional al que alude Somavía? Sin pecar de exageraciones, el cuestionamiento sobre la necesidad de un marco universal a estas alturas está cargado de un cinismo franco. Podría entenderse como pregunta retórica, mas denominar al marco universal una cuestión pendiente envía claramente el mensaje de que su necesidad es todavía cuestionable, a pesar de la enorme desigualdad que caracteriza a nuestra era, lo cual hace a esta pregunta reprochable.

*“no hay noción sobre la explotación humana que realizan la enorme mayoría de empresas cada minuto de las jornadas de trabajo de millones de seres humanos y, por ende, en las vidas de sus familias”*

♦ **Sesgo en favor de enfocarse en los crímenes de lesa humanidad.** Otro ejemplo emblemático de la falta de objetividad es el postulado sobre el que, la Comisión explica, sustenta su exposición de las cuestiones pendientes. El Informe declara: *las empresas pueden desempeñar una función de gran importancia creando un entorno propicio para el disfrute de los derechos humanos mediante inversiones, la creación de empleos y el estímulo del crecimiento económico. En ciertas situaciones, las actividades empresariales han puesto en peligro los derechos humanos y algunas de ellas se han hecho cómplices de violaciones de esos derechos. Aclarar las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos podría contribuir a evitar problemas en esta esfera, ayudar a los estados a reglamentar más eficazmente las actividades de las empresas y, al mismo tiempo, facilitar la utilización de una parte de sus beneficios para promover los derechos humanos.* El Informe apoya su alusión a “cómplices de violaciones de DDHH” con un pie de página que hace referencia a situaciones en las que las empresas han “iniciado conflictos armados para saquear países para enriquecerse a sí mismas”.<sup>47</sup> Es decir, el reconocimiento de violaciones a los DDHH por parte de las empresas se limita a algunos casos aislados de crímenes mayores, conflictos armados que se consideran crímenes de lesa humanidad. No hay noción sobre la explotación humana que realizan la enorme mayoría de empresas cada minuto de las jornadas de trabajo de millones de seres humanos y, por ende, en las vidas de sus familias. La disparidad entre ensalzar la función positiva de las empresas en el disfrute de los DDHH y la ausencia total de reconocimiento a la violación cotidiana de los mismos mediante la explotación laboral es patética e insulta el sentido común, especialmente cuando se expresa que hay necesidad de aclarar las responsabilidades; como si el pago de salarios de hambre o la represión a los sindicatos libres necesitara mayor explicación en materia de violación de DDHH.

♦ **Contexto de mercado.** En congruencia con el contexto de mercado que el Informe utiliza, se mantiene el concepto empresarial de derechos “esenciales, esperados y deseables” propuesto por las empresas y se da especial importancia a la opinión empresarial – como es el caso de la BLIHR – para definir qué derechos corresponden a cada clasificación, sin siquiera buscar un consenso previo sobre si es razonable o no clasificar a los derechos en diferente niveles de importancia. Debo aclarar que el Informe refleja las apreciaciones de un universo diverso de partes interesadas en las que, a grandes rasgos, hay casi tantas organizaciones civiles como empresas –aunque varias de las primeras no reflejan posturas ciudadanas sino de multi-partes interesadas, incluyendo en primera fila a las empresas, como es el caso del GRI. Por ello, a pesar de un universo diverso, el contexto de mercado, y no el de real democracia y sostenimiento, es el que prevalece en todo momento en el Informe.

*“en el Informe y en la mayoría de los documentos sobre este tema de la ONU, no hay alusión alguna a la democracia”*

♦ **Pobre inclusión del Sur.** Por otro lado, es de llamar la atención que el Informe no refleje las opiniones de organizaciones de base del Sur. Esto genera un claro sesgo hacia los puntos de vista de las sociedades del Norte. No obstante, a pesar de la falta de balance en las apreciaciones incluidas, ha de reconocerse que el Informe en sus conclusiones al menos da cabida, en el futuro inmediato, a la amplia consulta con especial énfasis en las partes afectadas del Sur. De este modo, cuestiones torales como la obligatoriedad, la misma determinación de los DDHH que son afectados por la acción de la empresa, los límites entre los DDHH y el derecho a la ganancia, la esfera de influencia y la complicidad, entre otras, quedan, en principio, abiertas al debate de todas las partes interesadas. Está por verse todavía la congruencia entre retórica y hechos.

♦ **Democracia en el olvido.** Por último, hay un factor muy importante a destacar. En el Informe y en la mayoría de los documentos sobre este tema de la ONU, no hay alusión alguna a la democracia, seguramente porque se considera que el concepto está implícito en el contexto de su labor. Esto hace aún más evidente que no hay realmente un consenso democrático ya que en las consultas se otorga más peso a la visión de los gremios empresariales, precisamente porque el verdadero contexto es el mercado y no la democracia. Si fuese al revés, si quienes decidiéramos fuésemos las sociedades civiles, si los gobiernos respondieran a sus representados, si el contexto fuese la gente y el planeta, la única opinión a tomar en cuenta sería la de la ciudadanía, sistemáticamente, porque las empresas, como órganos de la sociedad, estarían sujetas a la

voluntad popular. El bien común, el bien público, estaría privilegiado sobre el bien individual o de grupo: el bien privado. No lo es así. En el rechazo a las Normas se tomó en cuenta de manera preponderante el rechazo de los dueños del mercado. Si lo que hubiese regido fuese la voluntad popular, el borrador de las Normas hubiese sido aceptado para ser considerado para adoptarse, y entonces hubiesen entrado a discusión todos los pormenores, todas las lagunas. Los parlamentos de los estados estarían muy cerca de sus representados. El tema sería llevado a debate y a consulta social, mediante referéndums nacionales, para que después los estados miembros llevarán la postura aprobada por sus sociedades al seno de la ONU para un debate final y un voto en la Asamblea General. Esto no existe mas que por excepción en algunos países; y el hecho de seguir teniendo cinco países con poder de veto en la ONU impide que dicha organización pueda siquiera aspirar a actuar realmente de forma democrática. Es por esto muy relativo el peso que pueda tener la participación civil en el proceso por establecer un marco de DDHH en la esfera de influencia de la empresa. Mas no por eso debemos dejar de exigirlo.

### III.(c) Valoración de la Visión e Influencia del Pacto Mundial

Considero importante describir el caso del Pacto Mundial porque devela el pensamiento dominante en la ONU y por su influencia en las posturas de la Comisión en su Informe, ya que ésta lo utiliza frecuentemente como referencia y como un positivo ejemplo a seguir al expresar: *A escala internacional, muchas empresas participan en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en virtud del cual esas sociedades deben apoyar y respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente* (párrafo 23).

*“el contexto es, sin ambages, el mercado. De esta forma, las empresas son quienes deben de determinar sus propios valores y no la sociedad”*

♦ **Escaso interés empresarial.** La realidad es que el Pacto tiene escasa participación a pesar de su excesiva consideración de los intereses de los dueños del mercado, como hemos señalado. Según el portal del propio Pacto Mundial, éste sólo tiene registradas a estas fechas a 4.326 empresas entre 70.000 empresas globales y casi 700.000 subsidiarias de acuerdo a la ONU.<sup>48</sup> Además, actualmente tiene a 782 empresas desactivadas por no haber reportado nunca, o al menos en los últimos dos años, sobre su cumplimiento de los 10 principios del Pacto, y a 441 empresas que tampoco lo han hecho después de la fecha límite.<sup>49</sup> Todo a pesar de que, como el mismo Informe de la Comisión expresa, los principios del Pacto se apoyan en la responsabilidad pública, la transparencia y el interés

bien entendido (párrafo 16) y de que el Pacto no precisa qué derechos humanos deben respetar las empresas (párrafo 17). Interés empresarial que queda totalmente desacreditado cuando revistas tan emblemáticas de la visión empresarial, como *The Economist*, reportaron que muchas de las empresas estadounidenses decidieron respaldar al Pacto sólo después de que tres años de esfuerzos, entre Naciones Unidas y la Asociación de la Barra Estadounidense, produjeron una carta llena de blindajes legales, la cual protege a las empresas de ser demandas por no haber cumplido con los principios del Pacto. Según la revista, así es como empresas como Gap, Starbucks y Newmont Mining, se apresuraron a adherirse.<sup>50</sup> Coincidentemente, es de llamar la atención que a la fecha –tres años después del artículo de la revista– el Pacto sólo tenga a 95 empresas estadounidenses activas, 17 que no han reportado a tiempo y 32 desactivadas por no reportar. Siendo la mayor economía del Mundo, es sorprendente que menos del tres por ciento de las empresas activas en el Pacto Mundial sean estadounidenses.

♦ **El mercado es Rey.** Es en verdad sorprendente la bajísima popularidad del Pacto entre las empresas considerando su extrema afinidad con la visión empresarial, que se refleja en el dominio del Consejo por miembros de este sector. No es de sorprender por ello, que El Sr. Klaus Leisinger, quien fue Asesor Especial para el Pacto Mundial –del entonces Secretario General, Kofi Annan– y quien también funge como Director de la Fundación Novartis –de la transnacional farmacéutica Novartis– y es profesor de la Universidad de Basilea, refleje con claridad cristalina el trasfondo del pensamiento empresarial que proyecta el Pacto. En su valoración de la Responsabilidad Social para los DDHH<sup>51</sup> Leisinger es consistente en todas sus apreciaciones. Para él el contexto es, sin ambages, el mercado. De esta forma, las empresas son quienes deben de determinar sus propios valores y no la sociedad. Así, las empresas son quienes determinan y diseñan independientemente lo que él denomina “gestión de valores”. Pregunta: *¿en dónde “fijamos” los límites de nuestra responsabilidad .... cómo definimos “nuestra” esfera de influencia? ¿cómo debería una compañía, compitiendo con integridad, definir “complicidad”?*<sup>52</sup> De la misma forma, en lo que respecta al “proceso de toma de decisiones” con respecto a los compromisos de la empresas con los DDHH, Leisinger expresa que *parte de esta tarea es identificar a las partes interesadas esenciales para la empresa y abordar sus inquietudes*. Es decir, es la empresa quien decide quiénes son sus partes interesadas y no la sociedad.<sup>53</sup> Esta visión además lleva implícito que todo debe de ser voluntario, ya que si la empresa es quien define sus valores y a las partes afectadas por su actividad entonces no hay cabida para



que un marco legal universal, producto de un amplio y democrático consenso social, sea quien lo defina.

*“aquí no importa que los salarios sean de miseria, no importa verificar si realmente los salarios habilitan a los trabajadores a asegurarse el goce de una calidad de vida digna”*

♦ **Amnesia y negación de la explotación salarial.** Por otro lado Leisinger acusa a los sectores sociales que proyectamos a las empresas que operan en escala internacional como a grandes violadores de DDHH y como a los principales bellacos –según su terminología– quienes no muestran más que desprecio por la humanidad en lo que él considera una *chronique scandaleuse* que pinta a todas las empresas con la misma brocha. Para sustentar su alegato, Leisinger argumenta que las críticas se basan en los peores casos provenientes de sectores como el de las industrias extractivas; y arguye que esas *crudas generalizaciones* pueden ser refutadas fácilmente mediante *análisis empíricos serios*.<sup>54</sup> Evidentemente, Leisinger ignora o no reconoce la explotación salarial consuetudinaria que practican la vasta mayoría de empresas globales, regionales y domésticas en el Sur, la cual es demostrable objetiva y puntualmente, mediante “análisis empíricos serios” tanto utilizando los datos oficiales publicados por gobiernos y organismos multilaterales como haciendo trabajo de campo visualmente, visitando los barrios de enorme miseria en donde viven cientos de millones de asalariados por todo el Sur.

♦ **Lo legal se impone a la ética.** Para Leisinger lo que vale es lo legal y no la ética. Entonces argumenta: *es la función social básica de las empresas producir productos y servicios legalmente y venderlos en el mercado. Para este fin, contratan empleados adultos quienes trabajan por propia voluntad a cambio de una paga definida en contratos legales o en contratos colectivos. Adicionalmente, las empresas pagan contribuciones a la seguridad social. De esta forma, las empresas habilitan a sus empleados a asegurarse sus propios derechos humanos económicos*.<sup>55</sup> O sea: todos felices. Aquí no importa que los salarios sean de miseria, no importa verificar si realmente los salarios habilitan a los trabajadores a asegurarse el goce de una calidad de vida digna, porque eso es lo que dice el artículo 23 de la Declaración Universal de los DDHH. No importa si los gobiernos impiden que haya sindicatos libres o que, si los hay, a menudo no se les permite convocar a huelga y se les reprime. Tampoco importa que el sistema por naturaleza tenga atrapados a los trabajadores entre la hambruna, la mitigación de la pobreza, con un sueldo miserable, o la emigración forzada y arriesgada al Norte, porque el capitalismo darwinista, de economía de oferta, impide el gozo de

los DDHH económicos básicos, esenciales para la vida. Para él, por lo visto, lo que cuenta es estrictamente lo legal, y, siguiendo la lógica empresarial de lo “esencial, esperado y deseado” los salarios dignos no son un derecho esencial, sino de segunda categoría o de segunda generación,<sup>56</sup> como él los califica, porque actualmente no constituyen un derecho legalmente obligatorio.

*“¿qué tiene que ver la supuesta escasez de recursos de un país pobre si quien paga el salario no es el gobierno sino las empresas?...las empresas sí son violadoras sistemáticas y consuetudinarias del derecho humano a una vida digna...la discusión no es sobre la transferencia de responsabilidades de los estados a las empresas, sino sobre la exigencia de que las empresas se hagan responsables por las violaciones a los DDHH que éstas cometen, promueven, participan o instigan”*

♦ **Mitos y falacias del subdesarrollo.** Según Leisinger, la razón por la que no se goza de estos derechos en los países pobres es por falta de recursos. Una enorme falacia que tanto empresas como gobiernos se han encargado en promover. Arghiri Emmanuel, en *El Intercambio Desigual*,<sup>57</sup> estableció desde hace décadas que las remuneraciones no se establecen según la lógica económica sino según la lógica política o institucional. Hoy en día, ese argumento se puede demostrar fácilmente haciendo una comparación muy sencilla. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el salario manufacturero promedio por hora en 2004 fue de \$23,17, mas en México fue de sólo \$2,50. Sin embargo, el costo de vida en México según el Banco Mundial es de 70% en base a paridades de poder de compra. Entonces el salario equivalente en México debería de ser de \$16,32. Hay una brecha de \$13,83 porque los trabajadores manufactureros en promedio apenas reciben el 15% de lo que deberían percibir.<sup>58</sup> Así, mientras que los trabajadores de la industria automotriz en México ganaban en 2003 entre \$2,10 y 2,60/hora, en Estados Unidos recibían \$21 dólares, por hacer el mismo trabajo, pero el costo de vida no era 10 a 15% sino 70%. Si las multinacionales pueden devengar utilidades en el Norte con salarios mucho más altos, perfectamente lo podrían hacer con salarios dignos en el Sur, que de todos modos son inferiores porque los costos de vida son generalmente mucho menores. En cuanto a productividad, las multinacionales obtienen productividades muy similares e incluso superiores sin incluir el mucho menor costo laboral. En efecto, en 2003 las plantas de Ford, GM y Chrysler en México gozaban de la más alta calificación de eficiencia de todas las plantas de estas empresas en el mundo.<sup>59</sup>

Además, ¿qué tiene que ver la supuesta escasez de recursos de un país pobre si quien paga el salario no es

el gobierno sino las empresas? Es de suyo conocido que las empresas en el Sur gozan de márgenes de utilidad mucho mayores –incluso si, en el caso de las transnacionales, sus matrices cobran altas cuotas por servicios e insumos a sus subsidiarias, para evadir impuestos– porque el costo laboral es ínfimo a costa del derecho de los trabajadores a una vida digna. En el caso de las plantas automotrices en México y Brasil el ahorro en costo de producción por vehículo en 2003 oscilaba entre \$300 y \$1.500 dólares. Como resultado de la actual división internacional del trabajo injustamente institucionalizada, las empresas se apropian del ingreso que pertenece a los trabajadores en primera instancia. Entonces las empresas sí son violadoras sistemáticas y consuetudinarias del derecho humano a una vida digna a pesar de los mitos y falacias que argumenta Leisinger. Como veremos más adelante, la discusión no es sobre la transferencia de responsabilidades de los estados a las empresas, sino sobre la exigencia de que las empresas se hagan responsables por las violaciones a los DDHH que éstas cometen, promueven, participan o instigan. Se trata de que dejen de violar los DDHH en su esfera de influencia y nada más.

En una economía mundial globalizada a la fuerza, lo que se tiene son mercados globales con bienes comerciados globalmente a precios globales y con acceso global a mano de obra. Entonces la verdadera razón por la que se bloquea el derecho a una vida digna en el Sur es por la perversa alianza oligárquica centro-periferia. Alianza tan perversa que los trabajadores del Sur subsidian el buen nivel de vida de los trabajadores del Norte con su miseria. Son los términos injustos de comercio y de intercambio desigual exigidos por las empresas lo que está en el trasfondo. Es lo que Hoogvelt llama el segundo periodo neo-colonial.<sup>60</sup> La verdadera razón por la que hay pobreza en el Sur es porque se bloquea la justa distribución de riqueza en beneficio de la oligarquía global. La “pobreza” es síntoma de ese bloqueo y no la causa de una vida miserable. Entonces los inversionistas institucionales de las empresas, con sólo tener la voluntad moral, podrían honrar el derecho de todos sus trabajadores en el planeta a gozar de una vida digna, porque son ellos quienes están en el asiento del conductor de esta economía y no por las falacias argüidas por Leisinger para justificar el no goce de este derecho en el Sur. Así las cosas, el argumento de que se trata de países pobres es, en el mejor de los casos, un mito.

*“los intereses del mercado reinan en el desarrollo de un marco de DDHH y los negocios dentro de la ONU”*

♦ **Defensa del neoliberalismo a ultranza.** No es de sorprender que Leisinger, en sintonía con el tenor de la

ONU, no haga alusión alguna a la necesidad de situar a la democracia por encima del mercado. En contraste, sí hace una clara defensa del neoliberalismo a ultranza al defender la apertura de mercados cuando defiende la convicción del Pacto Mundial de que *entrelazar los valores universales en el tejido de los mercados globales ayudará a avanzar metas sociales amplias al mismo tiempo que se asegura la apertura de mercados.*<sup>61</sup> Sin duda a toda costa.

A pesar de esta visión absolutamente empresarial, la Comisión considera al Pacto como *un foro de conocimientos que gira en torno a los diez principios*, a pesar de sus dos características principales, que la Comisión reconoce: su ambigüedad y su adhesión voluntaria. El precedente de hacer decenas de referencias a un instrumento totalmente sesgado –y aún así predominantemente ignorado– inevitablemente refuerza la imagen de que los intereses del mercado reinan en el desarrollo de un marco de DDHH y los negocios dentro de la ONU.

### III.(d) La posición de la Unión Europea

Por último examinaremos las posturas de la Unión Europea respecto a los DDHH en la empresa. Para ese fin examinaremos los dos documentos principales que la UE publicó al respecto. El primero fue la “Comunicación Implementando Asociaciones para el Crecimiento y el Empleo: Hacer de Europa un Polo de Excelencia Sobre la Responsabilidad Social Corporativa.”<sup>62</sup>

En ese primer reporte, los gobiernos de la UE se alinean con las empresas a toda luz, proponiendo una alianza. Sus principales posiciones se destacan:

- Las empresas deben practicar la auto-limitación.
- Llama a las empresas europeas a demostrar sus compromisos con el desarrollo sostenible, crecimiento económico, mejores empleos y RSE/ RSC.
- La RSC es fundamentalmente voluntaria.
- La Comisión propone una respuesta empresarial que rebase los requerimientos mínimos legales.
- Un enfoque que requiere obligatoriedad aumentaría el riesgo de los negocios y sería contrario a los principios de auto-regulación.
- La alianza es una sombrilla política para las iniciativas de RSC nuevas o existentes.
- No es un instrumento legal y no deben firmarlo las empresas.
- La UE debe de hacer el marco regulador de su mercado más amistoso con las empresas al tiempo que las empresas desarrollan un sentido de responsabilidad social.
- La Comisión invita a las empresas Europeas a aumentar la velocidad en su compromiso con la RSC.

- Las prácticas de RSC no son una panacea y no se puede esperar que sustituyan a las políticas públicas, mas sí pueden contribuir a varios de sus objetivos:
  - Inclusión social,
  - Mejor abordaje de los problemas sociales,
  - Mejor uso racional de los recursos naturales,
  - Mayor respeto de los DDHH, protección ambiental y derechos laborales, sobre todo en el mundo en desarrollo.

El reporte además hace varias recomendaciones para avanzar en el desarrollo de la práctica de RSC. Se destacan:

- Intercambio de mejores prácticas
- Apoyo de iniciativas multi-sectores
- Uso de incentivos comerciales para motivar el respeto de los principales DDHH y laborales, así como la protección ambiental y la buena gobernanza ya que la RSC es un espejo de los valores medulares de la UE

El reporte generó tal grado de molestia en la sociedad civil que reconocidas organizaciones defensoras de DDHH expresaron claramente su malestar. Amnistía Internacional y la Federación Internacional de DDHH (FIDH) expresaron su desilusión considerando que la posición de la UE era una verdadera oportunidad perdida en la defensa de los DDHH. El comunicado de prensa enfatiza varios puntos:<sup>63</sup>

- Se fracasa en la agenda para complementar con leyes las herramientas de RSC.
- Enfatiza el amplio reconocimiento de la necesidad de un marco regulador poniendo como ejemplo a las Normas.
- Acusa a la UE de ignorar las opiniones de la sociedad civil en el foro multi-sectores de 2004.
- Acusa a la UE de parcialidad ya que su posición sólo refleja la visión empresarial, la cual apunta al más bajo común denominador, y por rehusarse a asumir plenamente su papel en el tema.
- Considera demagógica la llamada a rendir mayor respeto a los DDHH, laborales, ya que tienen que ser respetados en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

La Unión Europea parece haberse sensibilizado un poco sin cambiar su posición de fondo. En un nuevo reporte, al finalizar 2006, el Parlamento Europeo replantea la posición de la UE. Entre los setenta y tres párrafos del reporte lo más destacables es:<sup>64</sup>

- Reconoce las inquietudes en relación con la falta de transparencia y de imparcialidad.
- Reconoce que sigue en deuda el debate abierto entre diferentes partes interesadas respecto a una definición apropiada de la RSC.
- Llama a suspender la polarización del debate sobre la RSC al no apoyar enfoques voluntarios ni obligatorios de forma exclusiva.
- Reitera el enfoque esencialmente voluntario pero habilitando –sin compromiso alguno– la investigación sobre objetivos sociales y ambientales claros sin excluir mayor dialogo e investigación sobre compromisos obligatorios.
- Considera que la credibilidad de la RSC depende de incorporar normas y principios acordados internacionalmente bajo enfoques multi-sectoriales.
- Considera que la RSC debe ser parte integral de la rendición de cuentas corporativa y no una cuestión aparte.
- Hace notar la decisión de la Comisión de establecer una Alianza Europea para la RSC en sociedad con varias redes empresariales.
- Respalda el principio de la competencia responsable.
- Hace notar la contradicción entre estrategias de abasto competentes que buscan la mejoría continua en costos y flexibilidad y los compromisos de RSC voluntarios que buscan evitar prácticas de empleo explotadoras, y acepta el mayor dialogo sobre el tema.
- Sugiere que las auditorías a empresas Europeas se extienda para cubrir sus actividades y las de sus subcontratados a países fuera de la UE, especialmente en países en desarrollo de acuerdo con los convenios de la OIT, en particular los que son medulares.
- Cree que los consumidores, inversionistas y empleados tienen que tener la oportunidad de elegir y rechazar a las empresas según sus percepciones sobre su comportamiento social y ambiental.
- Recomendamos mayor investigación de la RSC sobre el vínculo entre prácticas competitivas y desarrollo sostenible.
- Llama a los Estados Miembros a apoyar el fortalecimiento de las Directrices de la OCDE, sobre todo respecto a los puntos nacionales de contacto europeos.
- Llama a respaldar a la Iniciativa del Reporteo Global (GRI)

♦ **Reacciones de la Sociedad Civil.** La reacción de la sociedad civil al reporte del Parlamento Europeo fue mucho más constructiva en contraste con la reacción provocada por el reporte de la Comisión Europea.



La FIDH agradeció en especial el respaldo del Parlamento a la mayor transparencia, a que no se separe a la RSC de la rendición de cuentas corporativa, así como la sugerencia de que las compras públicas den preferencia a las empresas socialmente responsables. Por todo ello, la FIDH, cautelosamente, consideró al reporte como un intento de regresar a su cauce el debate sobre la RSC.<sup>65</sup>

*“los gobiernos, en lugar de cumplir con su mandato, se alían con el gran capital actuando como sus agentes preservadores del actual sistema en el que el mercado es el rey”*

La Coalición Europea por la Justicia Corporativa (ECCJ por sus siglas en inglés) considera al nuevo informe del Parlamento Europeo como un paso adelante pragmático que busca eliminar la polarización del debate entre lo obligatorio y lo voluntario. Aplauda también el considerar a la RSC como parte integral de la rendición de cuentas empresarial. No obstante, en su conjunto, la ECCJ lamentó severamente el reporte de la Comisión Europea, ya que el mismo considera a la RSC como un instrumento puramente voluntario y la acusa de haber excluido de su preparación a la sociedad civil mientras que la Comisión sí involucró al sector empresarial. La ECCJ considera que el reporte del Parlamento no aborda muchos temas medulares externados por la sociedad civil y que pone demasiado énfasis en proteger la capacidad competitiva de las empresas. La ECCJ también lamenta que no se proponga ninguna legislación para obligar a las empresas a que se adhieran a sus códigos voluntarios, pues de otra forma dichos códigos tienen muy poco valor. En consecuencia, la ECCJ otorga su respaldo calificado al reporte del Parlamento para que sea aprobado en la siguiente plenaria, declarando que seguirá presionando en pro de una política fuerte, directa y efectiva de RSC obligatoria.<sup>66</sup>

#### ❖ **Valoración de la posición de la UE respecto a la RSC.**

Evidentemente, como lo han externado las principales organizaciones civiles de DDHH, la conducta de la UE es altamente criticable por su crasa parcialidad a favor de los intereses privados corporativos respecto a sus responsabilidades sociales y ambientales. Dicha posición constituye una nueva confirmación del actual entorno de mercado depredador en el que los gobiernos, en lugar de cumplir con su mandato, se alían con el gran capital actuando como sus agentes preservadores del actual sistema en el que el mercado es el rey. Es de llamar la atención además que la UE no haya emitido un reporte específico sobre el estado de los DDHH en el ámbito de actividad de las empresas. Desde la perspectiva LISDINYS es menester expresar las siguientes valoraciones que sustentan nuestro juicio:<sup>67</sup>

- La fuerte parcialidad en favor de las empresas se caracteriza por sus tres rasgos principales:
  1. **Entorno voluntario.** Se insiste en el entorno voluntario aunque retóricamente se exprese disposición a investigar la obligatoriedad; adoptando *ex ante* la posición empresarial.
  2. **Capacidad competitiva.** Excesiva preocupación por la protección de la capacidad competitiva de las empresas, lo que automáticamente sitúa al mercado por encima de la democracia y por ende de la gente y el planeta. La UE reconoce la contradicción entre las cadenas de abastos competitivos y el compromiso de la RSC de evitar la explotación humana y reconoce la responsabilidad de las empresas por las cadenas de abastos fuera de la UE. Sin embargo, en lugar de tomar una posición clara en contra de situar a la competencia por encima de la justicia, la UE sólo pide mayor diálogo.
  3. **Mínimo común denominador.** Se enfoca exclusivamente en los ocho convenios fundamentales de la OIT (párrafos del reporte 23, 53 y 65) y excluye a los demás, varios de los cuales son críticos, e ignora derechos fundamentales enarbolados en la Declaración Universal de DDHH, como es el artículo 23 sobre el derecho a una remuneración en concordancia con la dignidad humana, que además es fundamental para afrontar la explotación sistemática.
- Fundamenta su marco de referencia en las llamadas “leyes no vinculantes” como las de la OCDE y las iniciativas multi-sectoriales como la GRI.
- Al enfocarse sólo en los convenios fundamentales de la OIT, que no abordan la desigualdad Norte-Sur, la UE nuevamente ignora premeditadamente la explotación Norte-Sur, piedra angular del actual sistema, a pesar de que reconoce que el mayor potencial del impacto positivo de la RSC para combatir la pobreza es en las cadenas de abasto en el Sur. Así, la UE exhibe sus enormes contradicciones al privilegiar lo voluntario, la capacidad competitiva y el contexto de mercado.
- La UE reconoce que la RSC no es sustituto de un marco legislativo adecuado, mas en lugar de proponer el desarrollo de leyes europeas reitera la esencia voluntaria natural de la RSC. Así, define a las “mejores prácticas empresariales” como el punto de partida para el éxito de la RSC. Otra enorme incongruencia.
- A pesar de la presión social por un marco legal, confía en que la credibilidad se obtendrá a través de los principios y normas de las “leyes no vinculantes” (OCDE, Pacto Mundial...)
- Aprueba las alianzas entre el gobierno Europeo y las empresas.

- Tímida y ambiguamente (párrafos 24 y 25) comenta sobre la importancia de las remuneraciones justas sin exigir las.
- Reconoce el derecho de los consumidores a elegir y anima al desarrollo de una norma de etiquetado europea. Mas ¿quién va a creer en normas desarrolladas por un parlamento a todas luces empresarial? Las organizaciones de consumidores tienen que desarrollar sus propias normas.
- Pone de ejemplo a la práctica de comercio justo mas no reconoce que hasta hoy éste sólo mitiga la pobreza.\*
- Tiene la esperanza de que la RSC sirva de guía para desarrollar legislación mas no muestra intención alguna de desarrollar “leyes duras”.

En suma, desde la perspectiva LISDINYS, tanto el reporte de la Comisión Europea como el reporte del Parlamento son un descarado ejercicio retórico en favor del interés privado corporativo que está plagado de contradicciones e hipocresía y que exhibe el papel de los gobiernos europeos como agentes empresariales. Es necesario aclarar que sólo hemos valorado la posición de la UE porque es el actor gubernamental a escala mundial que más ha externado su posición respecto a la responsabilidad social de las empresas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde las empresas muestran mucho mayor reticencia para ser socialmente responsables –como puede constatar en su bajísima adhesión al muy amistoso Pacto Mundial– el tema de DDHH en la empresa ha sido básicamente ignorado por las instancias de gobierno.

<sup>36</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. E/CN.4/2005/91. 15 de febrero de 2005.

<sup>37</sup> Amnesty International. The UN Human Rights Norms For Business: Towards Legal Accountability. London, UK, 2004.

<sup>38</sup> Business Leaders Initiative on Human Rights Report 2: Work in Progress. London, UK, December 2004.

<sup>39</sup> Los argumentos a favor y en contra pueden consultarse en detalle en el reporte a propósito de la Comisión de DHH en: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. E/CN.4/2005/91. 15 de febrero de 2005.

<sup>40</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 55º período de sesiones. Tema 4 del programa. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Comentario relativo a las normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.1. 4 de agosto de 2003

<sup>41</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos\* E/CN.4/2005/91. 15 de febrero de 2005.

<sup>42</sup> Klaus M. Leisinger. On Corporate Responsibility for Human Rights. Basel, Switzerland, April 2006, p. 3.

<sup>43</sup> Comisión de Derechos Humanos. Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y otras empresas comerciales. Resolución 2005/69, 20 de abril de 2005.

<sup>44</sup> Asamblea General de la ONU. Resolución aprobada por la Asamblea General. 60/251. Consejo de Derechos Humanos. 3 de abril de 2006.

<sup>45</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 62º período de sesiones. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Informe provisional del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. E/CN.4/2006/97. 22 de febrero de 2006

<sup>46</sup> International Labour Organization. Facts on Decent Work. June 2006

<sup>47</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. Páginas: 13-14. E/CN.4/2005/91. 15 de febrero de 2005.

<sup>48</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Informe sobre las inversiones en el mundo 2005. Nueva York y Ginebra, 2005

<sup>49</sup> Ver: <http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/index.html>

<sup>50</sup> The Economist. Bluewashed and boilerplated. Jun 17th 2004

<sup>51</sup> Klaus M. Leisinger. On Corporate Responsibility for Human Rights. Basel, Switzerland, April 2006,

<sup>52</sup> ídem, páginas 6, 9 y 13.

<sup>53</sup> ídem, página 8

<sup>54</sup> ídem, páginas 4 y 5.

<sup>55</sup> ídem, página 10.

<sup>56</sup> ídem, página 10.

<sup>57</sup> EMMANUEL A. (1969) : L'échange inégal. François Maspero. París

<sup>58</sup> La Alianza Global Jus Semper. TABLA T4\*: BRECHAS DE SALARIOS REALES 1975 - 2004 PARA DOCE ECONOMÍAS, EN TÉRMINOS DE PARIDADES DE PODER DE COMPRA (PPC), PARA TRABAJADORES MANUFACTUREROS: <http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Recursos%20Laborales/Resources/T4rcslbrlca.pdf>

<sup>59</sup> Álvaro J. de Regil. The Neo-Capitalist Assault. The Case of Mexico III: A New Neo-Colonisation: <http://www.jussemper.org/Resources/Economic%20Data/The%20Neo-Capitalist%20Assault/Resources/TheCaseofMexicoIII.pdf>

<sup>60</sup> Ankie Hoogvelt, *Globalization and the Postcolonial World* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1997)

<sup>61</sup> Klaus M. Leisinger. *On Corporate Responsibility for Human Rights*. Basel, Switzerland, April 2006, pg. 7.

<sup>62</sup> COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE. IMPLEMENTING THE PARTNERSHIP FOR GROWTH AND JOBS: MAKING EUROPE A POLE OF EXCELLENCE ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Brussels, 22.3.2006 COM(2006) 136 final

<sup>63</sup> Amnesty International and International Federation of Human Rights. New EU Communication on Corporate Social Responsibility: a Missed Opportunity. Paris/Brussels, 24 March 2006

<sup>64</sup> European Parliament. REPORT on corporate social responsibility: a new partnership. FINAL A6-9999/2006 20.12.2006

<sup>65</sup> FIDH. The International Federation for Human Rights (FIDH) welcomes the report of the Committee on Employment and Social Affairs of the European Parliament on Corporate social responsibility: a new partnership (A6-999/2006). 06/03/2007

<sup>66</sup> ECCJ. European Coalition for Corporate Justice Position on the European Parliament Report on CSR . 20 March 2007.

<sup>67</sup> Álvaro de Regil Castilla. ¿Qué tan Sostenible es Nuestro Latte? Una Evaluación de Tendencias y Normas en el Comercio Justo Desde la Perspectiva de un Nuevo Paradigma Realmente Sostenible Centrado en la Gente y el Planeta. Ensayo Temático LISDINYS. Mayo de 2007.





#### IV. El Trabajo del Representante Especial sobre los DDHH – El Primer Informe

Fue sin duda la abierta polarización, que hasta hoy persiste, la razón por la que la Secretaría General de la ONU nombró al señor John Ruggie Representante Especial del Secretario General para el tema de DDHH (RESG-DDHH). El señor Ruggie, profesor de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, se aplicó de inmediato a cumplir con su mandato, el cual, como él mismo lo describe, versa sobre el esfuerzo de aclarar los temas de DDHH en la empresa, identificando, clarificando, investigando y elaborando con el fin de compilar un compendio y desarrollar materiales sobre el tema. Así mismo, se le pide que haga recomendaciones con el fin de fortalecer la promoción y protección de los DDHH en el campo empresarial. Además se le pide que, yendo más allá de la esfera legal, valore las políticas y mejores prácticas de los estados y empresas e incluso

idee metodologías para la valoración del impacto de la actividad empresarial en los DDHH.<sup>68</sup>

*“el señor Ruggie no ha podido deshacerse del contexto de mercado como poder omnipresente y regidor de la vida de las sociedades del planeta”*

Como parte de su mandato, el RESG-DDHH llevó a cabo una encuesta dirigida a las 500 empresas más grandes del planeta, según el listado de la revista Fortune, y un estudio de patrones globales y de variaciones regionales y sectoriales en las prácticas empresariales respecto a los DDHH, un estudio sobre las percepciones sobre el tema en el mundo empresarial. Así mismo, hasta ahora ha entregado, conforme a lo solicitado, un informe provisional, en febrero de 2006, y el informe final, en febrero de 2007, de su trabajo de dos años, incluyendo una serie de apéndices que puntualizan sobre diversos temas y otras encuestas menores.



#### IV.(a) Valoración del Primer Informe (provisional) 2006 del RESG-DDHH

El señor Ruggie no ha podido deshacerse del contexto de mercado como poder omnipresente y regidor de la vida de las sociedades del planeta. Por ello, su tono a menudo disculpa, ante la evidencia fehaciente, la realidad de la actividad empresarial. Así, por ejemplo, Ruggie comenta sobre las dificultades en las cadenas de valor, donde las empresas pierden el control (párrafo 22), control que transnacionales como Wal-Mart no pierden para imponer sus condiciones depredadoras; comenta también sobre la simbiosis entre los mayores abusos a los DDHH en las empresas y países receptores con ingresos relativamente bajos y gobiernos corruptos (párrafo 30), corrupción en la que las empresas a menudo son parte instigadora directa *sine qua non*; y comenta sobre la proliferación de diferentes códigos de conducta que las empresas imponen a un proveedor (párrafo 44), como si las empresas no fueran las causantes de esa dificultad al oponerse a un marco universal obligatorio.<sup>69</sup>

Al momento de preparar su reporte provisional, la encuesta que el Representante Especial encargó, dirigida a las 500 empresas mundiales más grandes en la lista Fortune, estaba en proceso. La encuesta buscaba respuestas sobre si las empresas tienen políticas y prácticas establecidas en materia de DDHH y, si las tienen, por qué normas se guían, si realizan evaluaciones sobre las repercusiones en los derechos humanos y qué responsabilidades creen tener en materia de derechos humanos para con los distintos interesados (párrafo 4). Ruggie explica que al momento de redactar su informe sólo había recibido 80 respuestas y que era muy posible que las primeras en responder hayan sido las más entusiastas y comprometidas. Por lo que los resultados que adelantó eran provisionales (párrafo 32). Desafortunadamente, a juzgar por los resultados finales, el interés, entre las 500 empresas globales, dejó mucho que desear, ya que en total sólo se obtuvieron 102 respuestas. Además su impresión de que las primeras 80 en responder eran las más entusiastas y comprometidas puede extenderse con alto grado de confianza a la mayoría de las 102 participantes. El RESG nos informa que la mayoría de las participantes dijeron tener principios de gestión de DDHH que no incorporaron debido a violaciones, lo que indica que lo hicieron porque lo consideraron importante. Así, la quinta parte que sí respondió fue aquella que tenía cosas positivas que compartir. El restante 80 por ciento que no respondió, ignoró el llamado aún después de que sus directores generales recibieran una carta especial convocando a sus empresas a participar. Consistente con otros indicadores, como es el caso del Pacto Mundial, Ruggie hace notar la baja participación de empresas estadounidenses en comparación con las europeas, así como de empresas con matrices ubicadas en los supuestos “mercados emergentes”.<sup>70</sup> Ruggie también analiza las respuestas por

sector y por región, las cuales carecen de validez cuantitativa, dado lo pequeño de la muestra total.

El sentir del RESG-DDHH, sobre que las 102 empresas globales que respondieron son las más comprometidas, se ve ampliamente fortalecido en otra encuesta que Ruggie acaba de terminar en China. Aunque esta encuesta tiene una muestra de sólo 25 empresas, todas Chinas, y por tanto no tiene valor estadístico, el estudio halló que aquellas empresas chinas que pertenecen al grupo de las 500 tienen mayor probabilidad de haber publicado políticas de DDHH que aquellas que no, aún si éstas últimas pertenecen al Pacto Mundial.<sup>71</sup> Es decir, es muy consistente la tendencia que muestra: que a mejores cosas que decir, mayor es el grado en que las empresas se involucran en los llamados de la ONU a participar en sus actividades de DDHH. Quienes no tienen cosas positivas que decir, la enorme mayoría, no lo hacen.

*“los diseñadores de los códigos eligen sus propias definiciones y normas de DDHH, y en su desarrollo tiene mucho que ver lo que es políticamente aceptable entre las partes interesadas”*

Del primer informe del RESG-DDHH hay varios aspectos positivos y negativos a destacarse y valorarse. Mis comentarios se presentan en cursivas.

##### ♦ Evidentes debilidades de los códigos de conducta.

Ruggie reconoce que no hay duda que los códigos de conducta comparten una serie de debilidades. Entre ellas el RESG destaca una debilidad, en mi opinión fundamental: los diseñadores de los códigos eligen sus propias definiciones y normas de DDHH, y en su desarrollo tiene mucho que ver lo que es políticamente aceptable entre las partes interesadas. Así mismo, aún si se consideran a todos los códigos disponibles en conjunto, éstos pecan de importantes lagunas en materia de DDHH. Por ello, concluye Ruggie, el reto es hacer de la promoción y protección de los DDHH una práctica con normas más uniformes (párrafo 53).

- *Es menester insistir que la presión de la sociedad civil va en pos de normas universales obligatorias, con penas concretas y no un abanico de instrumentos voluntarios menos heterogéneos.*

- ♦ *La jurisprudencia al respecto no es efectiva.* La escasa jurisprudencia de DDHH aplicable a las empresas en lugar de a los estados se refiere a los casos más terribles de crímenes a la humanidad, incluyendo a la tortura, y proviene principalmente de los casos de la Acta Alien Tort Claims de Estados Unidos. Mas su influencia ha sido básicamente existencial ya que ninguno de los casos se ha fallado en favor de los demandantes (párrafo 62).



- *Comentario que evidencia lo lejos que se encuentran los gobiernos de promover y proteger los DDHH violados por las empresas a través de los instrumentos legales. Como el comentario de Ruggie hace notorio, hay un vacío absoluto de jurisprudencia que haga responsables a las empresas por las violaciones sistemáticas a los DDHH dentro de sus operaciones cotidianas, en derechos laborales, en las condiciones que imponen a sus cadenas de abasto, etcétera. No existe jurisprudencia alguna que pueda hacer responsables a las empresas, no de los deberes de los estados en materia de DDHH, sino de sus propios actos violatorios.*

♦ **Las normas sociales y morales también cuentan.**

Además de que las leyes limitan las conductas de las empresas, las normas sociales y morales también lo hacen. Por ello, temas como lo “esencial, esperado y deseable”, en la conducta de las empresas en materia de DDHH, tienen bases muy diferentes en el tejido social que las usadas en las empresas y responden a diferentes *modus operandi* y mecanismos de aliento y desaliento (párrafo 70). Identificar esas diferencias sería muy útil para las empresas, gobiernos y sociedades civiles, argumenta Ruggie.

- *En efecto, uno de los rasgos más notorios en los últimos años es la creciente adopción de la sociedad civil de hábitos de consumo con consciencia social y ambiental que incorporan de manera preponderante a la defensa de los DDHH. Ante la ausencia de leyes pertinentes a la actividad empresarial, la ciudadanía está utilizando cada vez más su poder de consumo como mecanismo alentador o desalentador de prácticas específicas de empresas claramente identificadas.*

*“si los gobiernos aplicaran las leyes que hoy existen y aprovecharan los instrumentos disponibles de desarrollo de políticas, no estaría tan polarizado el debate en materia del respeto a los DDHH en la empresa”*

♦ **El papel del Estado es fundamental.** Ruggie remarca lo evidente: que si los gobiernos aplicaran las leyes que hoy existen y aprovecharan los instrumentos disponibles de desarrollo de políticas, no estaría tan polarizado el debate en materia del respeto a los DDHH en la empresa (párrafo 79).

- *Por supuesto, Ruggie no va a evidenciar la simbiosis inmoral que existe entre el mercado y los gobiernos y la parodia democrática que vive el mundo.*

*“la exigencia de la sociedad civil mundial no trata de adjudicar a las empresas responsabilidades del Estado, trata, simple y llanamente, de que las empresas se hagan responsables de sus propios actos, de que se acabe el cinismo y la hipocresía ante lo de suyo evidente”*

♦ **Visión estrecha del diferendo sobre las Normas.** En su análisis, Ruggie no logra salir del enfoque extremadamente limitado del orden establecido al evaluar el borrador de las Normas. Así, Ruggie hace una defensa de las obligaciones de los estados y de las empresas en función de las leyes nacionales e internacionales. Argumenta que las Normas tomaron los instrumentos de DDHH que adjudican responsabilidad legal a los estados y simplemente afirmaron que ahora tenían peso legal sobre las empresas (párrafo 60), a pesar de que las empresas no son un microcosmos de todo el cuerpo social, por lo que, por naturaleza, no tienen un papel general a jugar en materia de DDHH, como sí los estados, sino especializado (párrafo 66). Argumenta también que las Normas fueron muy imprecisas en adjudicar las obligaciones que corresponden a los estados y las que corresponden a las Empresas. Sugiere además que si las Normas se hubieran limitado a compilar un inventario de los DDHH afectados por las empresas y a establecer parámetros, entonces la discusión podría haber procedido a enfocarse en definir qué es obligatorio, esperado y deseable, y cómo se podrían traducir los principios amplios de DDHH en mejores prácticas operacionales; y desdeña la idea de un mecanismo de vigilancia/monitoreo al que considera muy contencioso y meramente simbólico (párrafo 58). Afirma, ateniéndose a los marcos legales actuales, que las empresas sólo pueden ser legalmente responsables por participar en crímenes de guerra y contra la humanidad (párrafos 60, 61 y 63). Finaliza afirmando que su argumentación no debe entenderse que implica que las soluciones innovadoras sobre el tema de los DDHH en la empresa no son necesarias o que la evolución en las leyes no sean parte de la solución pues las considera esenciales. Sin embargo, el RESG expresa que las fallas de las Normas son en realidad una distracción a su mandato en lugar de un apoyo hacia adelante (párrafo 69).

- *Si bien, sin conceder, Ruggie podría tener razón en algunos de los argumentos desde el punto de vista legal, es evidente su fracaso en ser objetivo en su valoración de las Normas. Para empezar, su mandato fue generado precisamente por el diferendo provocado entre sociedad civil y el frente empresarial, por lo que de no existir las Normas difícilmente tendría mandato. Lo importante, no obstante, es que al auto-limitarse a lo legal, al orden actual establecido no democráticamente, se niega a reconocer que las empresas son autoras consuetudinarias y sistemáticas de la violación cotidiana de innumerables DDHH. Como he expresado antes, la exigencia de la sociedad civil mundial no trata de adjudicar a las empresas responsabilidades del Estado, trata, simple y llanamente, de que las empresas se hagan responsables de sus propios actos, de que se acabe el cinismo y la hipocresía ante lo de suyo evidente. A las empresas les fascina el término de “buen ciudadano corporativo”. Así las cosas, si las*

*empresas son ciudadanos, entonces, como todos los demás, no pueden andar robando ni esquilmando ni matando. En suma, no pueden andar violando los DDHH, aunque el robar, el esquilmar y el matar sea lentamente, veladamente, en dosis, indirectamente, aunque estos actos no estén tipificados en los marcos legales. Las empresas son órganos sociales compuestos de individuos y no pueden exigir, como lo hacen, que la sociedad acepte que esos individuos dejen afuera sus valores morales cada vez que cruzan el umbral del lugar de trabajo. Lo que hicieron las Normas no fue adjudicar responsabilidades de los estados a las empresas sino compilar, de los instrumentos relevantes, las normas que abordan las violaciones a los DDHH regularmente perpetradas, directa o indirectamente, por las empresas, para que se adoptaran con el fin de obligarlas a hacerse responsables de sus propios actos, y no de las responsabilidades de los gobiernos, como se intenta argumentar.*

Un rasgo importante que permea a lo largo de todo el primer informe del RESG es su fuerte inclinación por la visión empresarial. Siendo que sus valoraciones deberían de ser neutrales, el sesgo en favor del contexto de mercado, como veremos, provoca una clara falta de equilibrio.

- **Enfoque excesivo en el ángulo empresarial.** El informe del RESG, no obstante sus buenos propósitos, se caracteriza inevitablemente por estar impregnado del contexto de mercado, el cual se constata al observar que sus opiniones frecuentemente parten desde la perspectiva empresarial y otorgan mucho mayor importancia a las necesidades de las empresas que a las de la sociedad. Así, Ruggie expresa la importancia de indagar, visitando las operaciones físicas de las empresas y convocando a consultas regionales con empresas, cuáles son sus necesidades específicas en diferentes entornos, con el fin de poder obtener una mejor apreciación (párrafo 54). No se observa, sin embargo, el mismo énfasis por entablar un diálogo equivalente con la sociedad civil ni hay encuestas en ese universo. De la misma manera, mientras hace referencias específicas a las opiniones de organizaciones empresariales como la Cámara Internacional de Comercio, la IEO y el BLIHR no hay referencias específicas a, por ejemplo, sindicatos ni a organizaciones o coaliciones de la sociedad civil. Sin duda no se observa una valoración equilibrada. Se observa en cambio un mimetismo extraordinario con los argumentos empresariales vertidos en el Informe de la extinta Comisión con respecto a las reacciones a favor y en contra de las Normas, que he resumido en el capítulo III, pero que pueden revisarse en detalle en el Informe de la Comisión E/CN.4/2005/91. Finalmente, no es de sorprender que, en sintonía con el mercado, el señor Ruggie haga una abierta defensa de la

globalización neoliberal darwinista, al declarar que aunque sus beneficios estén desigualmente repartidos, la mundialización ha generado muchos efectos positivos en términos de aumento de la calidad de vida y, en algunas partes del mundo en desarrollo, ha ofrecido oportunidades para reducir la pobreza en proporciones inéditas (párrafo 13). Como ya he documentado al inicio, la realidad es el ensanchamiento de la desigualdad entre ricos y pobres incluso en las mayores economías del mundo. Ruggie también arguye que la sociedad civil y los responsables de las políticas cada vez son más conscientes de que la participación de las empresas es un ingrediente esencial del éxito. ¿De éxito para quién? Un sistema generador neto de enorme desigualdad no puede ser un ingrediente de éxito en un entorno de real democracia. También previene, paradójicamente, sobre nacionalismos y fundamentalismos y propone anclar la mundialización en valores comunes. ¿En donde están los valores comunes cuando la sociedad civil exige real democracia y sostenimiento? Porque, es necesario insistir, lo que se ha impuesto es el imperio del mercado, del gran capital, darwinista, de economía de oferta, depredador y perverso. La mayoría de los agentes de la sociedad civil luchan por un nuevo paradigma, por otro mundo y no por el que se ha impuesto.

- **Ausencia de equilibrio en sus fuentes de auscultación.** El RESG reporta en su informe el uso de apoyo para su mandato en los conocimientos de expertos, especialmente en el área legal. Para ello, nos explica, hace uso de la Escuela de Derecho de Harvard, y de la asesoría de practicantes y catedráticos en leyes en Estados Unidos, Reino Unido y Australia (párrafo 5). Llama la atención que todos sus asesores sean de países con tradición en el Derecho Común anglosajón y que esto no sea equilibrado por un grupo de asesores legales con tradición en el Derecho romano-germánico utilizado por muchos países, e incluso por expertos en códigos de tradición no occidental, como el Derecho japonés. El punto es importante, ya que parte del debate reside en la actual precedencia en los hechos del mercado sobre las personas, que desde el ángulo de real democracia es inaceptable. Ha de reconocerse, no obstante, que el RESG hace uso de trabajos realizados por la Comisión Internacional de Juristas (párrafo 70), en Ginebra, la cual sí goza de una membresía de juristas bastante diversa y representativa del Norte y del Sur. No obstante, aunque Ruggie expresa interés en recibir asesoría de expertos legales del mundo en desarrollo, es notoria su ausencia, como lo podría ser la Asociación Americana de Juristas, con fuerte representación iberoamericana y con status consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; asociación que además tiene miembros que han externado sus opiniones sobre el tema de DDHH y la

empresa, como es el caso del jurista Alejandro Teitelbaum, su representante permanente ante los organismos de la ONU ubicados en Ginebra,<sup>72</sup> quien expresa su percepción del intento en el seno de la ONU y de algunos estados por dismantelar y neutralizar los mecanismos de DDHH e incluso rebajar su contenido.<sup>73</sup>

#### IV.(b) La Reacción de la Sociedad Civil

El Informe provisional del RESG-DDHH generó reacciones inmediatas del sector social. En ellas se insiste en muchas de las posiciones expresadas anteriormente, dada la evidente percepción del predominio en el Informe de la visión empresarial. Así, una coalición de más de cien organizaciones sociales escribió una carta al señor Ruggie en la que expresa los siguientes puntos en relación a los DDHH en la empresa:<sup>74</sup>

- Se requieren Normas universales.
- Se requiere que sean claras y que contengan mecanismos efectivos para hacerlas cumplir.
- Las Normas de RSE/RSC deben derivarse de las leyes y principios de DDHH.
- Deben ser aplicables a todas las empresas sin importar su naturaleza, giro o ubicación.
- Apuntar al más bajo común denominador sería vergonzoso.
- Debe tomarse en cuenta que otros actores, además de los estados, cada vez más son responsables ante la ley.
- Es importante que recomiende a los estados cómo regular las prácticas empresariales.
- Se solicita que aproveche los esfuerzos ya hechos y que rebase los marcos actuales y el status quo.
- Un marco universal tiene que clarificar las obligaciones de los estados para regular a las empresas así como sus obligaciones directas en relación con los DDHH para aplicarse a todas las empresas en todos los países.
- Se solicita que visite a las comunidades afectadas por la actividad de las TNLs y que consulte con la sociedad civil organizada en todos los niveles (local, nacional e internacional).

La carta no requiere mayor comentario y sólo es pertinente realzar el contexto en el que es evidente la esperanza de que las supuestas democracias del mundo ratifiquen en sus leyes a las Normas Universales, una vez sancionadas como derecho internacional. La respuesta de Ruggie es constructiva e intenta enfatizar las coincidencias entre su mandato y las demandas de la carta en todos los puntos, enfatizando la importancia de desarrollar formas de regulación, e intenta ofrecer seguridades de que tomará en cuenta las posiciones de todos los sectores a través de consultas. No obstante, el RESG-DDHH afirma ir en la dirección correcta de su mandato.<sup>75</sup>

Otro documento relevante de la sociedad es la Posición de la Federación Internacional de DDHH que representa a 141 organizaciones de DDHH en más de cien países. Los puntos relevantes de la valoración de la FIDH son:<sup>76</sup>

- El mandato de Ruggie es sólo un escalón en el proceso.
- Debe de partir de los esfuerzos ya existentes, incluyendo a las Normas, para desarrollar los instrumentos que mejoren la rendición de cuentas.
- El reto es clarificar conceptos como “esfera de influencia” y “complicidad” y examinar los diferentes vehículos que podrían explorarse para asegurar que la re-exposición de las obligaciones internacionales de las TNLs bajo las Normas puedan ser equipadas con un mecanismo de vigilancia.
- La implementación de las Normas puede asegurarse en base a los mecanismos de vigilancia existentes, incluyendo los basados en tratados, para vigilar las obligaciones de los estados respecto a los DDHH, al aseverar la obligación de los estados, tanto matrices como anfitriones de las empresas, para garantizar que protejan a las poblaciones, asegurando que las empresas no violen los DDHH en sus actividades fuera de su matriz.
- La FIDH acepta la propuesta del RESG para explorar, mediante sesiones de lluvia de ideas entre expertos legales, la posible extensión extra-territorial de la jurisdicción de los países matrices sobre sus empresas cuando cometan abusos en materia de DDHH.
- Esto también puede asegurarse desarrollando un nuevo mecanismo de vigilancia que aborde directamente a las TNLs sin apoyarse en las responsabilidades internacionales de los estados en DDHH.

*“un sistema regulador coherente requiere de un marco institucional internacional, para asegurar un mínimo de procedimientos democráticos, transparentes y participativos.”*

La FIDH claramente argumenta a favor de avanzar partiendo de las Normas hacia nuevas leyes internacionales, y luego nacionales, que definan, regulen y penalicen las responsabilidades de las empresas, especialmente cuando éstas actúan fuera de su entorno doméstico. Sin duda, a pesar de que hoy en día es ingenuo esperar que los supuestos estados democráticos se hagan cargo y apoyen un nuevo paradigma legal de obligaciones directas de las empresas en materia de DDHH, es imprescindible no quitar la presión sobre ellos y recordarles sus obligaciones reales. Sin embargo, lo más destacable de la posición de la FIDH es el que apunta hacia otra vía para desarrollar un nuevo mecanismo de vigilancia que no dependa de los estados y que aborde directamente a las empresas. Por supuesto, si se trata de leyes, tendrá que depender de las ramas legislativas de los

estados. Mas caben también otras opciones, como pueden ser los mecanismos de mercado basados en el poder del consumidor. Finalmente, el documento de la FIDH está fechado el mismo día de publicación del Informe Provisional de Ruggie, lo que implica que la FIDH se propuso anticiparse a la posiciones que podrían esperarse del Representante Especial.

*“todas las estructuras económicas y procesos deben de ser gobernados por una toma de decisiones democrática en lugar de por procedimientos autocráticos”*

♦ **Un enfoque anclado en la democracia.** Un estudio de Theodor Rathgeber, uno de los observadores en el Consejo de DDHH, en su valoración del borrador de las Normas y del debate que ha provocado, argumenta que “un sistema regulador coherente requiere de un marco institucional internacional, para asegurar un mínimo de procedimientos democráticos, transparentes y participativos.” Rathgeber, considera que “no hay nada nuevo en la noción de responsabilidad como una categoría normativa fundamental de los negocios dentro de la sociedad.” Explica que “se han desarrollado ideas alrededor del postulado fundamental de una práctica empresarial democrática y humanitaria.” Así, “todas las estructuras económicas y procesos deben de ser gobernados por una toma de decisiones democrática en lugar de por procedimientos autocráticos. Tanto los empleados como el Estado, quien se legitima por medios democráticos, deben de tener participación en la estructura y orientación básica de una empresa.” Los dueños no pueden decidir unilateralmente. Por analogía, nos dice Rathgeber, “las partes interesadas más afectadas deben de recibir poderes compensatorios”, con oportunidades de participar presentando querellas. La transparencia tiene que permitir la participación de todas las partes interesadas y víctimas.<sup>77</sup> Su análisis llama la atención por ser el único, en mi investigación, que hace explícito y enfatiza el contexto democrático como elemento *sine qua non* en el que debe existir la responsabilidad social empresarial.

#### IV.(c) Valoración final del primer informe del RESG-DDHH

El corolario del Informe provisional es que, a pesar del énfasis de Ruggie en abarcar lo más posible en el cumplimiento de su mandato, consultando extensamente con todos los sectores (párrafo 3), lo cierto es que su

mejor esfuerzo se dirigió, hasta ese Informe, a escuchar, investigar y valorar la perspectiva empresarial sobre sus responsabilidades en los DDHH. Ruggie expresa e incluye algún contacto con la sociedad civil y con la gente afectada por la globalización corporativa, mas su Informe está dominado por visiones empresariales, especialmente de países anglosajones. Así, por ejemplo, mientras realiza encuestas a transnacionales no explora de igual manera las visiones de la sociedad civil. Mientras que su actitud ante las empresas es proactiva, su actitud ante la sociedad civil, especialmente ante las comunidades más afligidas por las prácticas corporativas depredadoras, es reactiva. Esta falta de balance no puede ofrecer enfoques objetivos que realmente aborden la raíz del problema, que por más que los dueños del mercado se nieguen a reconocer, la sociedad civil tiene claramente identificada.

Deben destacarse también los rasgos consistentes compartidos con quienes se inclinan por el status quo. Además de insistir en el contexto actual de mercado, Ruggie se inclina por lo voluntario; por la clasificación de los DDHH en la empresa en “obligado, esperado y deseables”, según lo consideren ellas; por no referirse a la necesidad de remuneraciones dignas para acabar con la consuetudinaria explotación laboral; por la ausencia de toda mención a la importancia de situar a la gente y el planeta sobre el mercado, suponiendo que los contextos de democracia y de paradigma sostenible están implícitos en su mandato. Respecto a la aplicación de las responsabilidades de las empresas en toda su esfera de influencia geográfica, sólo se inclina por aplicar las leyes existentes mas no un marco normativo. Finalmente, respecto al desarrollo de un mecanismo de vigilancia, lo rechaza abiertamente.

El señor Ruggie inicia su defensa de la globalización neoliberal aclarando que sus comentarios son sólo descriptivos, pero él mismo termina por admitir, en su último párrafo, que inevitablemente su informe hace juicios normativos, que evidentemente expresan una clara posición. Desde un principio lo apropiado hubiese sido que el entonces Secretario General Annan hubiese creado un equipo equilibrado de expertos en todas las áreas y que representara a todas las partes interesadas tanto en el Norte como en el Sur. Mas ya se sabe que hay una gran brecha entre lo apropiado, lo equilibrado, y la *real politique*.

<sup>68</sup> John G. Ruggie. Re: Joint NGO Response to Interim Report. 22 May 2006.

<sup>69</sup> COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Informe provisional del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. E/CN.4/2006/97 22 de febrero de 2006

<sup>70</sup> HUMAN RIGHTS POLICIES AND MANAGEMENT PRACTICES OF FORTUNE GLOBAL 500 FIRMS: RESULTS OF A SURVEY. Conducted by John Ruggie, 1 September 2006.



<sup>71</sup> HUMAN RIGHTS POLICIES OF CHINESE COMPANIES: RESULTS OF A SURVEY. Conducted by John Ruggie, September 2007.

<sup>72</sup> Alejandro, Teitelbaum. EL TEMA DE LAS SOCIEDADES TRANSNACIONALES EN LA ONU. Agosto de 2006.

<sup>73</sup> Alejandro, Teitelbaum. LOS INTENTOS DE REFORMAR LAS NACIONES UNIDAS - EL NUEVO CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Agosto de 2006, pag. 9..

<sup>74</sup> Joint NGO Response to Interim Report., 18 May 2006.

<sup>75</sup> John G. Ruggie. Re: Joint NGO Response to Interim Report. 22 May 2006.

<sup>76</sup> FIDH. POSITION PAPER. COMMENTS TO THE INTERIM REPORT OF THE SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY-GENERAL ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, 22 FEBRUARY 2006

<sup>77</sup> Theodor Rathgeber. UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations. Dialogue Globalization. OCCASIONAL PAPERS. N° 22. Friedrich-Ebert-Stiftung. Geneva April 2006. Geneva.







## V. Valoración del Informe Final de 2007 del RESG-DDHH

Es de reconocerse que el Informe final<sup>78</sup> del primer mandato del RESG Ruggie, antes de haberse extendido hasta 2011, hace una investigación mucho más profunda, más acorde con la realidad actual y menos cargada de juicios personales que, no obstante, no desaparecen del todo.

*“el RESG insiste de nuevo en el mitológico éxito del actual paradigma económico en reducir la pobreza”*

### V.(a) Principales juicios de valor

El RESG hace varios juicios de valor que él considera que su trabajo arroja, los cuales valoro a su vez en cursivas:

♦**Instituciones adecuadas.** Sin cimientos institucionales adecuados los mercados fracasarán en generar todos sus beneficios y pueden incluso volverse socialmente insostenibles porque los mercados frecuentemente no reparan en el daño social e individual que generan (párrafo 1).

- *Ruggie reconoce lo evidente: que los mercados necesitan funcionar bajo reglas claras y estrictas e instituciones que las hagan valer, que impidan que el bien privado se obtenga a costa del bien común.*

♦**Mitológico éxito globalizador de los mercados.** Ruggie arguye que la neoliberalización, como consecuencia de los tratados comerciales, de inversión y de la privatización, han contribuido a impresionantes reducciones de la pobreza en los mercados emergentes y en todo el mundo industrializado, aunque esto ha impuesto costos a los individuos y comunidades. Luego nos dice que el *laissez faire* victoriano y de la primera mitad del siglo XX fracasaron porque los gobiernos no controlaron sus impactos negativos en los valores

medulares de la comunidad social; mas hay pocos indicios de que esas situaciones tomarán raíz, aunque esa es la miseria humana que estados y empresas necesitan evitar al valorar a dónde puede llevarnos la situación actual (párrafos 2 y 83).

- *El RESC insiste de nuevo en el mitológico éxito del actual paradigma económico en reducir la pobreza. No hace falta volver a demostrar las falacias y mitos de los defensores del neoliberalismo. No obstante, debe resaltarse que Ruggie al parecer no repara que dicha defensa es una contradicción directa con su primer argumento de la necesidad de instituciones adecuadas. El actual paradigma neoliberal exige que los gobiernos saquen las manos del mercado, que haya total desregulación. Además, en un entorno de real democracia, el mercado es sólo un vehículo y no un fin en sí mismo. El único fin es el bienestar de todos los rangos de la sociedad, especialmente de los desposeídos. Entonces las instituciones adecuadas tienen que ser las estructuras que desarrollen y establezcan con claridad las responsabilidades obligatorias directas de las empresas en su impacto en todo tipo de DDHH y las leyes estrictas que protejan a los ciudadanos cuando ese impacto violente sus derechos, a través de las debidas penas. ¿Cómo pueden haber instituciones adecuadas para la defensa de los DDHH respecto a las empresas, frente a un sistema de mercado desregulado que además es el emblema de la depredación, del darwinismo social y de la perversidad humana y no de los mitos que sus defensores osan atribuirle?*

*“reconocer que no hay control de las empresas implica que las instituciones democráticas no cumplen con su función básica de procurar el bien común, mientras que sí permiten y protegen el bien del actor privado más poderoso: el ciudadano corporativo”*

#### ♦ **Ambiente de negocios permisivo de la violación de DDHH por desequilibrio entre mercado y bien común.**

Hay un ambiente permisivo de la violación de DDHH por las empresas debido a un claro desajuste institucional de fondo entre el alcance e impacto de los actores y fuerzas económicas y la capacidad de las sociedades de gobernar sus consecuencias adversas. Mientras los estados no corrijan el desequilibrio seguirá habiendo un costo en el que las capas más vulnerables pagan el precio más alto (párrafos 3 y 82).

- *Ruggie hace aquí evidente la parodia democrática que padecemos. Reconocer que no hay control de las empresas implica que las instituciones democráticas no cumplen con su función básica de procurar el bien común, mientras que sí permiten y protegen el bien del actor privado más poderoso: el ciudadano corporativo. La corrupción que la mezcla de intereses políticos con*

*intereses corporativos, todos privados, produce, especialmente mediante el financiamiento de las campañas electorales, crea un entorno en el que los funcionarios públicos en posiciones de poder son meros agentes representantes del interés corporativo. Esta es la razón de fondo del ambiente no sólo permisivo sino alentador y protector de los intereses de los dueños del mercado dentro de los supuestos gobiernos democráticos del mundo. Ese es el desajuste del que habla Ruggie. Se trata del conflicto entre el mandato democrático y los intereses privados de quienes detentan el poder político. Se trata de un conflicto enraizado en la corrupción. Un gobierno realmente democrático se dedica únicamente a procurar el bienestar de sus ciudadanos y no de las corporaciones. Las empresas domésticas y extranjeras son sólo vehículos para generar riqueza y es la obligación de los gobiernos garantizar que ésta sea distribuida justamente.*

*“a final de cuentas, el ciudadano corporativo no contará en las decisiones ciudadanas, que deberán de ser tomadas mediante consultas en las que sólo participamos los seres humanos”*

#### ♦ **Participación de otros actores y mecanismos de mercado.**

A pesar de que los gobiernos deben tener un papel clave en representar el interés público, necesitan de la participación de otros actores sociales y utilizar a otras instituciones sociales para lograrlo, incluyendo a mecanismos de mercado en sí mismos (párrafos 4, 53-55 y 85).

- *En un ambiente de real democracia, directa, de abajo hacia arriba, la participación ciudadana es imprescindible para vigilar la gestión pública en todos los ámbitos de la cosa pública. Esto puede incluir la participación de instituciones sociales que incluyan a las empresas, siempre y cuando antes se honre al bienestar social y al bien común/público, y de manera sostenible, como el único fin de las sociedades democráticas, y que se haya establecido explícitamente que el mercado es sólo uno de varios vehículos para procurar el bien común y no el fin omnímodo propiedad de sus dueños, que pretende regir sobre la vida humana y del planeta. De esta forma, las opiniones de los dueños del mercado no deben versar sobre la defensa de su interés privado, sino sobre cómo el mercado puede ser más eficiente en generar riqueza y distribuirla justamente para generar el bienestar debido, de tal forma que el mercado deje de ser un bien privado, especialmente dominado por las TNLs. A final de cuentas, el ciudadano corporativo no contará en las decisiones ciudadanas, que deberán de ser tomadas mediante consultas en las que sólo participamos los seres humanos. Este escenario probablemente está lejos de representar la visión que*



Ruggie visualiza, donde los actores y mecanismos del mercado participan coadyuvando a la responsabilidad social, materializándose en sistemas normativos de autorregulación. En un entorno de Estado de derecho y de real democracia, lo que rige son leyes creadas para proteger los DDHH. Así las cosas, la participación de otros actores e instituciones puede ser bienvenida como complemento en forma de normas adicionales que rebasen plenamente la cabal defensa de todos los DDHH en la esfera de la empresa. Éstos pueden ser mecanismos de mercado que alienten la competencia al cualificar los desempeños de las empresas en el respeto pleno de los DDHH y del sostenimiento a largo plazo de toda su actividad en las dimensiones económica, social y ambiental, incluyendo a los mecanismos de los consumidores, cuando alineamos nuestro poder de consumo con nuestras percepciones sobre el desempeño socio-ambiental de las empresas.

*“si tuviésemos gobiernos realmente democráticos no habría una polarización social tan creciente, no sólo en la esfera de los DDHH sino en el cuestionamiento al paradigma actual que rige la vida de gran parte de la humanidad”*

## **V.(b) Valoración del RSSG de normas y prácticas que regulen la responsabilidad de las empresas**

Ruggie organiza su informe en cinco grupos de normas y prácticas que regulen a las empresas en función de las obligaciones jurídicas, sociales o morales impuestas a éstas con los siguientes puntos de vista:

**1. El deber de protección del Estado.** El derecho internacional firmemente establece que los estados tienen el deber de proteger contra los abusos a los DDHH de actores que no son parte del Estado dentro de su jurisdicción, y que éste deber se extiende a los abusos de entidades de negocios. Esto lo establecen tanto los tratados de DDHH de la ONU como el derecho internacional consuetudinario (párrafo 10). Esto implica que el deber de los estados, como en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sólo se harán valer plenamente si los individuos están protegidos por el Estado, no sólo contra las violaciones cometidas por éste mismo sino también contra los actos cometidos por personas o entidades privadas. No hacerlo representa infringir sus obligaciones (párrafo 13). Ruggie reconoce que los estados dejan mucho que desear al respecto al desdeñar estas obligaciones, como lo confirmó el cuestionario que él les envió, a pesar de que la obligación del Estado en este tema es uno de los cimientos fundamentales del régimen internacional de DDHH (párrafos 16-18).

- *Los argumentos del Representante en este aspecto no son discutibles y es muy positivo que reconozca la*

*crasa realidad. Si tuviésemos gobiernos realmente democráticos no habría una polarización social tan creciente, no sólo en la esfera de los DDHH sino en el cuestionamiento al paradigma actual que rige la vida de gran parte de la humanidad. La necesidad de crear leyes explícitas y concretas sobre la conducta de las empresas en el área de DDHH sería menor a la necesidad actual, y probablemente complementaria, para llenar las lagunas existentes, porque los gobiernos se encargarían de proteger el respeto cabal de todos los DDHH y de castigar estrictamente a sus violadores, y estarían más que dispuestos a llenar las lagunas. Mas ya que los gobiernos son en realidad agentes y socios del mercado, los mecanismos ciudadanos son muy necesarios, especialmente el poder de los consumidores pues éste sigue la lógica del mercado. El poder del consumidor, que a menudo ha probado su efectividad en cambiar la toma de decisiones empresariales, debe de ser instrumental para presionar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones, mejorando el marco legal de DDHH, al definir las responsabilidades directas de las empresas, como el pago de salarios dignos, y hacer obligatorio al nuevo marco.*

*“el uso de la CIJ es de suma importancia y debemos esforzarnos porque su jurisdicción se extienda a todo el ámbito de DDHH y no sólo a los peores crímenes de lesa humanidad, incorporando plenamente la responsabilidad de las empresas”*

**2. La responsabilidad de las empresas en los crímenes internacionales.** Desde hace mucho tiempo, además de los estados, los individuos son responsables directos de los crímenes internacionales de piratería y esclavitud. A partir de la entrada en vigor de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2002, los individuos pueden ser responsables directos de los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, si los estados no actúan (párrafo 19). Cada vez más se reconoce a las empresas como “participantes” en la esfera internacional con derechos y deberes; lo que hace cada vez más difícil sustentar que las empresas deben estar exentas de responsabilidad en áreas del derecho internacional como los DDHH (párrafo 20). Por ello, así como la ausencia de mecanismos internacionales de rendición de cuentas no impidió la responsabilidad individual por crímenes internacionales, tampoco impide que hoy en día emerja la responsabilidad empresarial. Además, hay creciente efervescencia en dos procesos creadores de jurisprudencia, uno a nivel internacional y otro a nivel doméstico, cuya interacción está generando una red en constante expansión que está dando forma a la responsabilidad corporativa, por lo que la probabilidad sugiere que las empresas serán sometidas a cada vez mayores responsabilidades por estos crímenes en el futuro, sobre todo en el área de complicidad, según la experiencia acumulada. (párrafos 19-31).

- *Es muy positivo que se esté avanzando en este tema en las responsabilidades de las empresas en casos de lesa humanidad, como en el asesinato de campesinos o indígenas, en complicidad con gobiernos y oligarquías locales, para apoderarse de sus tierras. Los casos de los indios Mapuche en Chile o el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra en Brasil son emblemas de esta clase de depredación empresarial. El problema aquí es precisamente la ausencia de instituciones democráticas y de Estado de derecho, en la que los gobiernos son facilitadores, jueces y partes. Por ello, el uso de la CIJ es de suma importancia y debemos esforzarnos porque su jurisdicción se extienda a todo el ámbito de DDHH y no sólo a los peores crímenes de lesa humanidad, incorporando plenamente la responsabilidad de las empresas.*

*“no hay nada que prevenga a los estados de imponer responsabilidades a las empresas...cuando la entidad directamente responsable de proteger a las personas de la violación de sus DDHH es un perpetrador principal de dichas violaciones, poco puede esperarse para que haga cumplir la ley y mucho menos para promover y ejercer nuevas leyes que hagan a las empresas directamente responsables de sus actos en contra de la humanidad.”*

**3. La responsabilidad empresarial en otras violaciones de DDHH bajo el derecho internacional.** En contraste con la creciente aceptación de la responsabilidad de las empresas en crímenes internacionales, su responsabilidad en la violación de otros DDHH dista mucho de gozar de consenso (párrafo 33). Mas nada previene a los estados de imponer responsabilidades directamente en las empresas; la cuestión es si no lo han hecho ya (párrafo 36). La Declaración Universal de los DDHH ocupa un sitio único en el orden normativo internacional, mas no tiene efectos legales vinculantes. Muchas de sus provisiones se han integrado al derecho internacional consuetudinario, pero generalmente se acepta que sólo obligan a los estados y sus párrafos operacionales no indican explícitamente que sean vinculantes con las empresas. Las responsabilidades de las empresas bajo los convenios de la OIT continúan siendo indirectos (párrafos 37-42).

- *La valoración de Ruggie sobre la amplia gama de DDHH no contemplados como responsabilidad directa de las empresas es precisa a pesar de que es esta área en donde más violaciones suceden, como es el caso de muchos derechos laborales, comenzando por los salarios dignos, que ni siquiera están contemplados como responsabilidad del Estado en ninguna ley. Sus conclusiones sobre esta gran laguna son muy evidentes. Es aún más evidente la ausencia de voluntad política de los supuestos gobiernos democráticos para cambiar esta*

*situación, especialmente a la luz del comentario del RESC de que “no hay nada que prevenga a los estados de imponer responsabilidades a las empresas”; situación que es una prueba dura de la falta de voluntad no sólo por el contubernio entre estados y empresas sino porque muchos gobiernos son violadores de toda clase de DDHH en su jurisdicción e incluso afuera de ella. En el terreno laboral, muchos gobiernos son violadores sistemáticos de derechos enarbolados en los convenios de la OIT, que sus estados han ratificado. Esto nos lleva a la siguiente conclusión: cuando la entidad directamente responsable de proteger a las personas de la violación de sus DDHH es un perpetrador principal de dichas violaciones, poco puede esperarse para que haga cumplir la ley y mucho menos para promover y ejercer nuevas leyes que hagan a las empresas directamente responsables de sus actos en contra de la humanidad. En efecto, es este sistema de explotación sistemática, profundamente enraizado en el entorno actual de darwinismo social, el que tiene en vilo a las instituciones supuestamente democráticas.*

**4. Los mecanismos de derecho no vinculante.** Su fuerza reside en el reconocimiento de los estados y otros actores claves de las expectativas sociales. Agrupa a estos mecanismos en tres categorías: los de función normativa tradicional, como la Declaración Tripartita de la OIT y las Directrices de la OCDE; los normativos mejorados, como los puntos nacionales de contacto (PNCs) de la OCDE; y los multi-sectores, como los Principios Voluntarios sobre Seguridad y DDHH en el sector extractivo (párrafos 45-48, 50 y 52). Todos ellos pueden verse todavía como experimentales. Su valor depende de su efectividad y la estructura de su gobierno, el cual a su vez depende de su grado de transparencia, participación y mejoras constantes (párrafo 56 y 57). Su papel es importante para materializar las normas que surjan en la comunidad internacional. El hecho de que haya mayor interés en algunos acuerdos intergubernamentales aunado a las innovaciones en el derecho no vinculante que involucra directamente a las empresas en la creación de regulaciones sugiere que estados y empresas están reconociendo las expectativas sociales y la necesidad de compartir las responsabilidades (párrafo 62).

- *En efecto, muchos de ellos pueden servir de base para materializar algunas normas, siempre y cuando el fin sea imponer responsabilidades legales directas sobre las empresas en materia de DDHH y de muchos otros derechos afectados por su actividad. No obstante, estos mecanismos no vinculantes, eufemísticamente llamados en inglés “derecho suave”, no deben ser un fin sino sólo un paso hacia un marco legal obligatorio y estricto que dé cordura a la relación entre la retórica y la realidad. Por ello, el interpretar a estos mecanismos*

como señal de reconocimiento de las expectativas sociales es erróneo pues dichos mecanismos más bien parecen una táctica para evadir la demanda mayoritaria de imponer un marco legal obligatorio a las empresas. Los derechos humanos jamás podrán ser respetados ni protegidos con instrumentos voluntarios. OECD Watch acaba de publicar los resultados de un estudio en el que encuentra que los gobiernos hacen caso omiso de los PNCs.<sup>79</sup> El RESG también habla de “compartir responsabilidades” ¿Desde cuando los estados comparten las responsabilidades cuando un individuo roba, o viola a una mujer, o mata a un semejante? ¿Por qué debemos compartir las responsabilidades de las empresas cuando cometen actos violatorios de un derecho humano? La exigencia social es definir con claridad todas las responsabilidades directas de las empresas por las violaciones que éstas cometan en su esfera de influencia, para que los estados definan y ejerzan las penas correspondientes en cada caso. Las responsabilidades de los estados ya han sido definidas parcialmente y ciertamente deben de ser mejoradas para incluir a muchos derechos humanos que carecen de normas legales. Mas no hay razón para que se compartan las responsabilidades imputables exclusivamente a las empresas por sus prácticas. Este argumento refuerza la percepción del afán del RESG de promover un entorno no vinculante que intrínsecamente otorgue trato especial a las empresas.

*“estos mecanismos son una opción para la empresa, que ciertamente puede fortalecer el respeto a los DDHH pero nunca sustituir a los marcos legales”*

**5. Los mecanismos de autorregulación.** Se trata de una considerable variedad de mecanismos voluntarios en los que los líderes empresariales reconocen los derechos humanos y adoptan medidas para asegurar un rendimiento de cuentas básico. No obstante sus debilidades son evidentes, destacando la ambigüedad de los criterios, la heterogeneidad en su interpretación y uso y el hecho de que las empresas a menudo no reconozcan los derechos en los que mayor impacto tienen (párrafo 74). Como ejemplo, el GRI es usado por menos de 200 empresas de acuerdo a sus normas, 700 lo hacen parcialmente, mientras que otras dicen hacerlo de manera informal (párrafo 78). Finalmente, tanto en las iniciativas voluntarias como en las reglamentarias, quienes se lo proponen hallan la forma de evadir el escrutinio (párrafo 81).

- *Todo mecanismo voluntario se contrapone a las demandas sociales por un marco obligatorio en tanto sea presentado como su alternativa. Además, al igual que los llamados mecanismos de derecho no vinculantes, ninguno aborda temas que son piedra angular de la explotación humana, como el no pago de remuneraciones acordes con la dignidad humana. La*

*única contribución que estos mecanismos pueden hacer es desarrollando prácticas de negocios sostenibles que superen las leyes que establezcan las responsabilidades directas de las empresas en materia de DDHH, con el fin de ofrecer a las empresas instrumentos de negocios que aumenten su capacidad de competencia. A mayor competencia mayor posibilidad de ganar mercado vía mayor buena voluntad (activos intangibles) de sus mercados directos al mejorar su imagen percibida. Estos mecanismos son una opción para la empresa, que ciertamente puede fortalecer el respeto a los DDHH pero nunca sustituir a los marcos legales. No obstante, su característica laxitud ha redundado en una ínfima credibilidad entre la sociedad civil y, como dice Ruggie, evidencia sus debilidades.*

### V.(c) Los Documentos Adjuntos del Informe

El informe de Ruggie incluye cinco documentos agregados que puntualizan su valoración sobre diferentes aspectos relevantes de su informe.

#### V.(c1) Responsabilidades de los estados en materia de regulación y arbitraje de las actividades empresariales <sup>80</sup>

Los puntos relevantes de su evaluación son:

- Los tratados requieren que los estados jueguen un papel clave regulando y arbitrando de manera efectiva las actividades empresariales respecto a los DDHH.
- Este papel es considerado parte de los deberes del Estado de proteger contra el abuso de terceras partes.
- Los comentarios en los contenidos de estos tratados muestran una tendencia a incrementar la presión sobre los estados para que cumplan con su deber en este tema.
- Esto es señal del surgimiento de amplias y claras obligaciones de los estados para prevenir y castigar todo tipo de abuso de todo tipo de empresas.
- Hay menor orientación sobre si el Estado puede cumplir con su deber de proteger al enfocarse en los actos de personas naturales dentro de la empresa infractora o si está obligado a regular y arbitrar a la empresa como entidad.
- Los mecanismos de DDHH anclados en tratados han estado prestando cada vez más atención a la regulación y arbitraje por parte de los estados de la actividad empresarial y ya desempeñan un papel importante en la elaboración de los deberes de los estados.
- Mayor orientación sobre el enfoque y contenido de las obligaciones del Estado en este campo podría apoyar aún más a los estados en el cumplimiento de su deber y aclarar aun más el tema a derecho-habientes y empresas.



- Sería deseable que los órganos de DDHH pidieran regularmente a los estados que informaran en sus reportes sobre las medidas tomadas para regular y arbitrar el abuso empresarial.

*“paradójicamente, el talón de Aquiles del imperialismo comercial es el poder del consumidor. Ni empresas ni gobiernos pueden controlar nuestra “libertad de elegir”*

❖ **Valoración del agregado uno.** Difícilmente habrá desacuerdo en la sociedad civil sobre el papel fundamental del Estado en la protección de los DDHH de las personas contra cualquier entidad agresora. Es muy positivo que la presión esté aumentado sobre el Estado para controlar las violaciones a los DDHH por parte de las empresas, así como que haya una tendencia hacia mayor claridad y menor ambigüedad y flexibilidad en la interpretación de los conceptos. El problema es cómo hacer que esta tendencia no avance a paso de tortuga y, sobretodo, que los gobiernos cumplan con su deber de hacer cumplir las leyes que ya existen, cuando se vive en un entorno de corrupción institucional global y donde los dueños del mercado son quienes mandan. Indudablemente, la presión tiene que seguir y aún aumentar en los organismos multilaterales, a pesar de la oposición de la mayoría de los gobiernos. Así mismo, la presión debe aumentar mediante todo tipo de acciones civiles, incluyendo la presión sobre las empresas para que integren en su cultura prácticas cada vez más claras y delimitadas sobre sus responsabilidades en no violar los DDHH. No obstante, a la par de estos esfuerzos, es imprescindible presionar a empresas y gobiernos mediante la lógica del mercado usando nuestro poder de consumo. Paradójicamente, el talón de Aquiles del imperialismo comercial es el poder del consumidor. Ni empresas ni gobiernos pueden controlar nuestra “libertad de elegir” –como solía decir el darwinista Friedman– para alinear nuestros hábitos de consumo con nuestra ética democrática. Nuestras decisiones de consumo inciden directa e inmediatamente en las economías y sostenimiento de las empresas, por lo que las hace reaccionar mucho más rápido que una ley que pueden evadir corrompiendo a quienes deben hacerla cumplir.

#### V.(c2) Cuestiones relacionadas con la responsabilidad empresarial con arreglo al derecho internacional y con la regulación extraterritorial <sup>81</sup>

Este agregado al informe del RESG cubre las conclusiones de dos seminarios sobre la responsabilidad empresarial con arreglo al derecho internacional y la regulación extraterritorial, llevados a cabo en Nueva York y Bruselas, respectivamente. Se intentó en la medida de lo posible, según el Informe, que los participantes: expertos de universidades, profesionales del derecho y representantes de ONGs representaran la más amplia diversidad regional.

♦ **Responsabilidad de las empresas en función del derecho internacional.** Las conclusiones más destacables son:

- Hubo amplio consenso de que se requiere de una sustancial labor para definir adecuadamente el alcance y contenido de la responsabilidad empresarial en la violación de DDHH bajo el derecho internacional.
- Se advirtió sobre simplificar el estado actual del derecho internacional ya que es un área en la que la jurisprudencia parece ir a la zaga de la práctica.
- Se emitió una propuesta para desarrollar una declaración internacional de política pública que definiría un deber empresarial mínimo de respetar (y posiblemente proteger) a los DDHH, con la Declaración Universal de DDHH como punto de partida para identificar las normas apropiadas.
- Hubo amplio acuerdo en que la obligación empresarial de cumplir con los derechos sólo sería apropiada en circunstancias muy limitadas, como en las situaciones donde las empresas tienen control efectivo de una área o asumen funciones de gobierno.

♦ **Responsabilidad de las empresas en función de la regulación extraterritorial.** Las conclusiones más destacables son:

- Aunque es necesario evitar el imperialismo moderno por parte de los países matrices debe reconocerse que la acción de estos estados a menudo puede ser necesaria para asegurarse de que las violaciones son enfrentadas. Una opción sería controlar a las TNLs mediante varios “puntos de control” en el país matriz.
- Aparte del principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, no hay impedimentos legales internacionales importantes para que los estados ejerzan su jurisdicción extraterritorial, mas todavía no se determina si están o no obligados a hacerlo.
- Se identificaron dos dificultades concretas en la regulación de las TNLs:
  - Determinar la nacionalidad de la empresa a fin de establecer la jurisdicción del Estado,
  - Trascender la separación formal de entidades jurídicas de un grupo de empresas para responsabilizar a la empresa matriz por actos cometidos por sus filiales o responsabilizar directamente a la matriz por sus propios actos y omisiones en relación con sus filiales;
- Hubo mucho interés en que los estados matrices requieran reportes y evaluaciones de impacto de sus empresas.
- Aunque los sistemas legales de los países anfitriones deben generalmente ser respetados y fortalecidos, se estuvo de acuerdo en que el fin superior tiene siempre que ser hacer justicia a las víctimas.



❖ **Valoración del agregado dos.** La luz que las conclusiones anteriores arrojan sobre la visión dominante entre los participantes de los seminarios hace pertinentes las siguientes valoraciones:

☑ **Los estados son el principal obstáculo.** Por encima de todas las consideraciones legales, hay una obligación moral de las empresas de inmediato dejar de violar los DDHH, que pesa cada minuto y que no pueden evadir. A pesar del amplio consenso sobre la necesidad de que los gobiernos aclaren las áreas de responsabilidad legal, del estado de avance del derecho nacional e internacional sobre el tema, para que la jurisprudencia sea congruente con la actual necesidad de impedir que las empresas violen los DDHH, el mayor obstáculo son los gobiernos de los estados en sí mismos. Aunque los participantes de los seminarios declaran que el fin superior tiene siempre que ser hacer justicia a las víctimas, parece que todos se conforman con sólo utilizar la ruta legal a pesar de que la mayor razón del paso de tortuga en su progreso se debe a que la gran mayoría de los gobiernos se oponen al control cabal de las prácticas empresariales que redundan en la violación de DDHH. Además, muchos gobiernos son violadores directos de los DDHH. Entonces, si bien la ruta legal es imprescindible, no es realista fincar todas nuestras esperanzas exclusivamente en la ruta legal a través de los estados. Considerar el uso de la CIJ, como ya apunta el RESG en su último informe, es una alternativa de suma importancia a desarrollar con el fin de que los individuos puedan recurrir a ella y no sólo los estados. Ésta emerge como la única ruta legal alternativa, cuando no haya voluntad política. Así mismo, los mecanismos de mercado deben utilizarse paralelamente mientras las rutas legales no protejan efectiva y cabalmente los DDHH de las prácticas de las empresas.

*“es realmente una ilusión y un autoengaño suponer que los estados matrices de las TNLs son “zonas de gobernanza fuerte” que tendrán la voluntad política para controlar a sus empresas por sus operaciones foráneas”*

☑ **No hay zonas de gobernanza fuerte que devengan en autoridad moral.** En relación con la extraterritorialidad, la susceptibilidades a actitudes que se puedan considerar imperialistas pasan a muy segundo plano cuando la cuestión preponderante es la ausencia de autoridad moral en la enorme mayoría de gobiernos porque poco cumplen con su obligación más elemental del contrato social democrático, de procurar el bienestar social, que forzosamente incluye la protección irrestricta de los DDHH ante cualquier parte que los violente. Es realmente una ilusión y un autoengaño suponer que los estados matrices de la mayoría de las TNLs son “zonas de gobernanza fuerte” que van a tener la voluntad política para controlar a sus empresas por sus operaciones foráneas. En la *real geopolitique* los gobiernos matrices avanzan y protegen los intereses económicos en el

extranjero de sus TNLs, empezando con la promoción y apoyo de gobiernos anfitriones dispuestos a cooperar con sus intereses nacionales, lo que forzosamente redundará en la violación de una amplia gama de DDHH. Este es el verdadero imperialismo, el imperialismo comercial que se ejerce todos los días mediante la simbiosis centro-periferia en la que los gobiernos de ambas partes actúan sistemáticamente en contubernio asociados con el gran capital. Así es que ¿qué gobierno va a ejercer autoridad sobre una subsidiaria de una TNL cuando todos son entusiastas promotores y protectores del actual paradigma darwinista controlado por el capital global? La violación de DDHH no es nada rara en las llamadas “zonas de gobernanza fuerte”, aunque menos sistemáticamente. Así es que en realidad no hay zonas de gobernanza fuerte debido a la ausencia de democracia real.

☑ **Reconocer el sistema de explotación que padece el mundo es el primer paso hacia un marco legal de DDHH en las empresas.** Da la impresión de que todas las conclusiones de los seminarios parten del contexto de que estamos lidiando con un problema que no es raro pero que sucede ocasionalmente aquí o allá, cuando en realidad es sistemático y ubicuo. Por ello, es imprescindible que la primera cosa que se reconozca mediante una declaración es que padecemos un sistema muy manifiesto de explotación practicado a diario tanto por empresas domésticas como por globales, siendo aún más evidente en las últimas.

*“las TNLs consciente y premeditadamente han construido un sistema de explotación, especialmente Norte-Sur, en el que construyen cadenas de abastos –en las que imponen condiciones que las empresas saben muy bien que obligan a los proveedores a prácticas inhumanas] y de las que tienen total y absoluto control”*

☑ **El sistema de explotación lo diseñan, imponen y controlan las empresas directamente.** Es por ello inaceptable declarar que la responsabilidad empresarial en los DDHH deba limitarse a sólo áreas donde se tiene control directo. Las TNLs consciente y premeditadamente han construido un sistema de explotación, especialmente Norte-Sur, en el que construyen cadenas de abastos –en las que imponen condiciones que las empresas saben muy bien que obligan a los proveedores a prácticas inhumanas] y de las que tienen total y absoluto control. Puede ser que no las consideren violaciones de DDHH, mas están plenamente conscientes de que maximizan utilidades a costa de una vida miserable para los trabajadores afectados. Esta es la razón primigenia por la que van al extranjero, pues no pueden extraer condiciones tan ventajosas en sus países matrices, y lo hacen con el total respaldo de sus gobiernos y de los gobiernos anfitriones. Es una práctica de explotación que gestionan directa o indirectamente de manera muy consciente y perversa. Son autores materiales o

intelectuales de la violación de DDHH, mediante su complicidad en esquemas estratégicos que ellas directamente tramaron.

✓ **Las empresas son responsables de cada relación que establecen.** Una persona natural es moralmente responsable de apoyar, como consumidor, a un productor de tomates o a un reparador de calzado, si está consciente de que en su trabajo explotan y maltratan a sus hijos y empleados. El individuo no tiene control de la situación, mas sí tiene control directo de su relación de compraventa. La misma lógica es perfectamente aplicable a las empresas. Actualmente no hay leyes que formulen dicha responsabilidad, pero las empresas tienen la obligación moral, lo acepten o no, de controlar sus relaciones de compraventa. La enorme diferencia con la persona natural, es que las empresas son las autoras de los esquemas de explotación que imponen a sus cadenas de proveedores.

### V.(c3) Políticas de DDHH y prácticas de gestión: resultados de las encuestas realizadas a gobiernos<sup>82</sup>

Aquí se incluyen los puntos más destacables del agregado 3 respecto a la encuesta a los estados. No se incluye la encuesta a las 500 empresas en la lista Fortune que el documento también recoge pues los resultados se hicieron públicos en 2006 y ya fueron incluidos en la valoración del Informe Provisional. La respuesta a la encuesta fue tan baja que no tiene peso estadístico. Sólo 29 de los 192 miembros de la ONU respondieron. No obstante, se destaca lo más relevante recogido por el RESG entre los estados que decidieron participar en la encuesta:

- La mayoría de los estados dieron prioridad a la RSE en lugar de enfocarse específicamente en los DDHH en la esfera de la empresa.
- Los estados se apoyan en un limitado número de instrumentos para regular el impacto en los DDHH en la actividad empresarial como son los voluntarios, los PNCs de la OCDE y en mecanismos del mercado en los que tienen especial injerencia, como políticas de compras públicas, créditos a la exportación, etcétera.
- Exceptuando a la UE, la mayoría de los estados rara vez incluyen el tema de DDHH en los acuerdos comerciales y de inversión ni existe coordinación interministerial al respecto.
- Consideran a la ausencia de normas internacionales sobre el tema de DDHH y empresa como el mayor reto;
- Menos de una tercera parte de los estados en la muestra tienen sistemas legales que permitan el enjuiciamiento de personas acusadas de violar los DDHH interna o foráneamente.
- Varios estados consideran que no puede responsabilizarse de forma alguna por violaciones a los DDHH a los actores externos al gobierno ya que compete sólo al Estado la promoción y protección de los DDHH.

- La baja respuesta puede indicar que a pesar de que los estados presumen otorgar gran importancia a la protección de los DDHH pocos son congruentes con sus compromisos políticos.
- Los estados realizan alguna regulación de las violaciones de DDHH más flagrantes y poco más que eso.

*“se trata de que las empresas dejen de cometer violaciones a los DDHH y que se hagan responsables de aquellos que cometan. Nadie más que el Estado, como único servidor público, puede ser responsable de promover y proteger los DDHH, mas todos somos responsables de nuestros propios actos violatorios de ellos”*

❖ **Valoración del agregado tres.** Los resultados, por poco representativos que sean, evidencian lo esperado. Los estados, consciente y a menudo perversamente, han abdicado de sus responsabilidades democráticas más elementales –devengando en meros agentes del mercado– en las que la promoción y protección de los DDHH son la piedra angular para su cabal cumplimiento. Por otro lado, vuelve a aparecer aquí una discusión equivocada, pues se debate sobre la racionalidad de hacer a las empresas promotoras y protectoras de los DDHH, cuando el argumento total es hacer a las empresas responsables de sus actos violatorios, como a cualquier órgano de la sociedad. Se trata de que las empresas dejen de cometer violaciones a los DDHH y que se hagan responsables de aquellos que cometan. Nadie más que el Estado, como único servidor público, puede ser responsable de promover y proteger los DDHH, mas todos somos responsables de nuestros propios actos violatorios de ellos.

Si los estados no actúan es otro problema pues no perdemos la responsabilidad. Por ello, dadas las circunstancias, es de suma importancia cabildar ante todas las instancias para lograr que cualquier individuo pueda recurrir a la CIJ con el fin de denunciar las violaciones de las empresas a los DDHH, en tanto haya un vacío de Estado de derecho en este tema. Ya existe un precedente en los PNCs de la OCDE, que inicialmente sólo podían ser recurridos por los estados miembros y desde 2000 todos los ciudadanos del mundo nos podemos acoger a ellos.

### V.(c4) Estudio sobre variaciones regionales y sectoriales en las políticas empresariales de DDHH<sup>83</sup>

El RESG comisionó un estudio dirigido a identificar las políticas de DDHH de 300 empresas en una muestra que comprende a todas las regiones del mundo y a una segmento importante de empresas en los supuestos países emergentes y en desarrollo. Se trata sólo de empresas que tienen políticas de DDHH integradas a sus políticas

de operación. Así mismo se estudiaron ocho iniciativas multi-sectores y cinco índices de inversión socialmente responsables desde el ángulo de los DDHH. El estudio no es una encuesta, sino una documentación de lo que hay en estas tres áreas.

❖ **Valoración del agregado cuatro.** No hay mucho que comentar al respecto ya que el estudio tienen como fin identificar lo que hay en el tema de DDHH en una muestra de empresas, en los principales marcos de responsabilidad social para empresas y en los índices para la inversión ética. Los principales hallazgos no son de sorprender en absoluto. Los derechos que más se consideran son los laborales, sobre todo los convenios fundamentales de la OIT, el resto escasamente se reconocen. Hay mayor sensibilidad hacia los DDHH en empresas europeas y norteamericanas que las empresas asiáticas y aún más que las iberoamericanas, las cuales los reconocen poco. Como es de esperarse, el reconocimiento del derecho a un salario digno brilla por su ausencia, lo cual confirma el desprecio generalizado, propio de la actual cultura de negocios mundial, por remunerar a sus trabajadores, incluyendo a los que operan en sus cadenas de abastos en el Sur, a un nivel que disfruten su derecho a una calidad de vida acorde con la dignidad humana. Así mismo, el uso de verificación externa es extremadamente baja. Finalmente, dado que todo es voluntario y que cada quien elige lo que juzgue conveniente, hay una enorme variación y ambigüedad en la forma en que se aborda el tema de DDHH.

#### V.(c5) Evaluaciones de impacto y cuestiones metodológicas <sup>84</sup>

El RESG-DDHH considera que la cultura de realizar evaluaciones de impacto social y ambiental están relativamente bien establecidas y son ya rutinarias en proyectos que tienen una huella considerable, sobretudo en el sector extractivo. Considera también que las evaluaciones de impacto deben de ser siempre ex ante y no ex post. Ya que el tema es prácticamente virgen en el área de DDHH, el RESG desarrolla el siguiente razonamiento:

- Las evaluaciones deben de abarcar el ciclo entero de negocios.
- Deben de establecer las condiciones de DDHH que prevalecen en el área física donde se establecerá la empresa y definir sus límites de influencia.
- Deben involucrar de manera crítica a expertos en DDHH, expertos en la industria, partes interesadas locales y al personal interno y externo.
- Deben considerar las percepciones de la comunidad sobre lo que es probable que se vea afectado.
- Es crítico que dicha participación se realice en un ambiente en el que se entable un verdadero diálogo.

- Las evaluaciones deben de enmarcarse en el contexto de la Carta Internacional de Derechos Humanos, formada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- A diferencia de las evaluaciones sociales y ambientales las evaluaciones de impacto en los DDHH deben puntualizar sobre cómo el proyecto puede influir en todos y cada uno de los derechos humanos.

❖ **Valoración del agregado sobre evaluaciones de impacto.** Los estudios de impacto son primordiales y deben de ser considerados como parte de los requisitos legales para cualquier proyecto, sea nuevo, sea de adquisición. Se presentan las siguientes consideraciones sobre estos estudios:

☑ **Ex ante.** Es muy positivo que Ruggie los considere siempre como ex ante ya que deben ser requisito para aprobar un proyecto o la misma constitución de una nueva empresa.

☑ **Tres posibles dictámenes:** 1) aprobar un proyecto tal cual fue presentado, 2) modificarlo para hacerlo acorde con el marco legal vigente de DDHH en la empresa y 3) rechazarlo por ser de suyo nocivo para los DDHH.


☑ **Norma universal.** El RESG no parece contemplar que estos estudios sean una herramienta de control de un marco legal común y universal de DDHH y que la motivación principal de los estados sea precisamente la promoción y protección de los DDHH y no la competencia por inversión extranjera directa.

☑ **Plena participación.** Es muy positivo que el RESG dé primordial importancia a la incorporación plena de las partes interesadas, especialmente las comunidades afectadas, en un ambiente de diálogo y cooperación.

☑ **Marco universal.** Muy positivo que apunte a la Carta Internacional de DDHH como el marco de referencia (del cual deberán partir las futuras leyes).

☑ **Juicio a priori.** Por desgracia, el RESG sigue sin reconocer la sistemática explotación humana al considerar que sería razonable esperar que se emprendan evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos cuando se prevean importantes inversiones en zonas de conflicto o esferas en las que han imperado los abusos de los derechos humanos (párrafo 39). Parece que su percepción es que las violaciones a los DDHH en las empresas son la excepción y no la norma. Esto es incongruente con su llamado a utilizar a la Carta Internacional de DDHH como marco de referencia, pues

ésta va mucho mas allá de los peores crímenes, comenzando por el derecho humano mas violado: las remuneraciones acordes con la dignidad humana. Aunque siempre ha reconocido que falta por aclararse con precisión los DDHH y las responsabilidades de las empresas, estos comentarios son un juicio a priori que considera que no hay violación sistemática y consuetudinaria a los DDHH en las empresas.

 **Evaluación independiente.** Un aspecto importante que no queda claro (párrafo 18) es que las empresas no pueden evaluar el impacto de sus propios proyectos. Los costes de estos estudios deben de ser pagados por ellas, mas su ejecución y control deben de ser realizados en principio por los gobiernos y con amplia participación de órganos civiles independientes en el país en cuestión. No pueden realizarlo órganos con ánimo de lucro porque, como el RESG mismo comenta, su credibilidad ha sido muy cuestionada.

#### V.(d) La posición empresarial

Con excepción de la BLIHR, cuya labor revisaremos en detalle en la siguiente sección, y la cual se embarcó en el proyecto de probar el borrador de las Normas, la actitud de la mayoría de las empresas y de sus organizaciones es insistir en el status quo. Su posición con respecto a los DDHH en su ámbito de acción es socialmente irresponsable y mercantilista. Se insiste en recurrir a argucias legales y a la unilateralidad en la definición de los conceptos. El documento preparado por el señor Leisinger, que revisamos al valorar las posiciones del Pacto Mundial, ilustran con claridad sus argumentos, los cuales están anclados profundamente en una interpretación tergiversada del *laissez faire* Smithoniano, en donde las empresas deben de estar en total libertad para deambular por el mundo en busca de las mejores condiciones para maximizar el valor del accionista sin ninguna cortapisa ni consideración alguna que contravenga a su único fin que es la reproducción y acumulación de capital. Por ello, en lo que respeta a los DDHH, su reacción es mantener un entorno estrictamente voluntario en el que la RSE/RSC y los DDHH pueden ser integrados a elección de la empresa como un instrumento más de competencia para ganar cuota de mercado mediante la construcción de una imagen de buen ciudadano corporativo. Esto lo hemos constatado claramente en la sección III, tanto el reporte de la Comisión de DDHH –que reporta la posición de los principales gremios empresariales– sobre las responsabilidades de las empresas, a propósito del borrador de las Normas (E/CN. 4/2005/91), como en el documento del señor Leisinger.

Es de destacarse que todo el contexto de la discusión y de la argumentación empresarial en contra de la regulación se centra en la cuestión de si las empresas deben hacerse responsables de promover y proteger los DDHH, lo cual rechazan porque, con suficiente razón, esa responsabilidad es del Estado. Bajo esa argucia, la cual ha trascendido a las instancias de la ONU involucradas con el tema, incluyendo al RESG, se intenta evadir la verdadera controversia a dirimirse: que las empresas se hagan responsables de sus propios actos violatorios de los DDHH. Controversia que, aunque ya he argumentado a menudo desde la primera sección, es preciso enfatizar. Así las cosas, para el sector empresarial, además de insistir en el voluntarismo, las empresas son quienes deben de definir todo: límites de su responsabilidad, esfera de influencia, quiénes deben de ser sus partes interesadas, cuándo hay complicidad, qué deben reportar y qué es opcional, si se aplica en todos los países o si sólo en donde tienen operaciones directas, si debe haber vigilancia y auditorías externas, etcétera.

#### ♦ La Declaración de Ginebra en el marco del Pacto Mundial

En el verano de 2007 los “líderes empresariales” emitieron una declaración que ilustra nítidamente esta visión en un magno concierto retórico. Reunidos en Ginebra en el marco del Pacto Mundial, cientos de empresarios se comprometieron a cumplir con las normas laborales, de DDHH, ambientales y de corrupción con el fin de hacer que la globalización sea más benéfica para la gente. La denominada “Declaración de Ginebra” convoca a la “acción urgente” ya que “la pobreza, la desigualdad en el ingreso, el proteccionismo y la ausencia de oportunidades de empleo decente suponen una seria amenaza a la paz mundial y a los mercados”. Así mismo, los líderes expresan que “las empresas, como agentes claves de la globalización, pueden ser una enorme fuerza de bien...La globalización puede por tanto actuar como acelerador para esparcir principios universales, creando una competencia orientada en valores, para así correr a la cima.”<sup>85</sup> Es bueno que se reconozcan como los agentes de la globalización, mas la universalidad de los “principios universales” que implícitamente asumen es un asunto en plena controversia. Por principio de cuentas, evidentemente, no se dan por aludidos como principal fuente de la pobreza y desigualdad en el ingreso a la que aluden cuando convocan a la “acción urgente”.

La Declaración consta de 21 puntos que refuerzan su posición adornada de franca exageración y cinismo. Enseguida resumo los puntos y comento en cursivas:<sup>86</sup>



### ● El papel de la empresa en la sociedad.

- ✓ La globalización está definiendo el papel de las empresas en la sociedad. *La globalización es obra de las empresas y está siendo impuesta de manera totalmente antidemocrática, como ya argumenté.*
- ✓ Las empresas que son proactivas e implementan prácticas de ciudadanía corporativa son más sostenibles. *El contexto voluntario en el que las empresas toman todas las decisiones es evidente.*
- ✓ Las prácticas de negocios responsables pueden contribuir a las metas fundamentales de la ONU. *Nuevamente, poder es una opción voluntaria.*
- ✓ La comunicación sobre el progreso en la integración del Pacto Mundial es importante para las empresas. *Nuevamente, el contexto voluntario en un entorno en el que muchos participantes se han blindado legalmente contra cualquier posible demanda por no cumplir con los principios del Pacto, como he señalado antes.*
- ✓ La asociación y colaboración con las partes interesadas es esencial. *No se trata de asociarse sino de la obligación de no violar los DDHH. Asociarse sigue siendo un acto voluntario.*
- ✓ El uso de métodos e indicadores homogéneos es esencial para permitir que los inversionistas puedan analizar con datos comparables. *Sigue el contexto voluntario.*
- ✓ En los casos de gobiernos débiles inversionistas y empresas, en lugar de irse, pueden involucrarse más siempre y cuando lo hagan de forma acorde con los principios del Pacto. *La misma línea opcional y cuidadosa de no aludir a nada que presuponga una obligación.*
- ✓ Los inversionistas pueden animar a las empresas a la transparencia al tiempo que urgen a los gobiernos en los estados débiles a actuar responsablemente. *Además del contexto voluntario se insiste en las responsabilidades de los gobiernos mas no en las propias para no violar los DDHH.*
- ✓ Los prestamistas pueden asegurarse que los préstamos se aplican con normas internacionales. *El mismo contexto.*

### ● Acciones para los participantes en el Pacto Mundial

- ✓ Los participantes nos comprometemos a avanzar los diez principios del Pacto y a darles un significado concreto. *Además de que los principios son sólo una expectativa moral optativa se arrogan el derecho de definir su significado a su mayor conveniencia.*
- ✓ Nos involucraremos en abogar responsablemente sobre los retos globales y colaboraremos con otras partes interesadas para arribar a soluciones prácticas a problemas comunes. *Más buenos deseos.*
- ✓ Nos aseguraremos de que nuestros compromisos y políticas corporativas tomen raíz en todas nuestras organizaciones. *Más retórica siempre en control de definir sus compromisos sin ninguna obligación.*
- ✓ Buscaremos movilizar a nuestras subsidiarias para que los principios del Pacto queden enraizados en todas partes. *Otra manera de decir lo mismo que en el punto anterior.*
- ✓ Animaremos a nuestras cadenas de abastos a lo mismo. *Si hubiera real compromiso, las empresas tienen todo el control y poder de exigir la adhesión de sus cadenas al simbólico Pacto, o a cualquier norma, con sólo condicionar la vigencia de los contratos a su cumplimiento.*
- ✓ Nos comprometemos a construir las mejores prácticas en alianza con diferentes sectores industriales. *Ellos definen sus prácticas.*
- ✓ Buscaremos inculcar los principios de la ciudadanía corporativa en los líderes futuros. *Los empresarios definen a la ciudadanía corporativa.*

### ● Acciones para los gobiernos

- ✓ Nuestros compromisos para hacer de la economía global más robusta e incluyente sólo serán benéficos si los gobiernos proveen estabilidad y promueven la transparencia y el sentido emprendedor. *Un llamado a fortalecer el status quo del mercado como Dios y dador de vida. ¿Qué pasa con el Estado de derecho y el entorno democrático?*
- ✓ Llamamos a los gobiernos a ratificar e implementar efectivamente los convenios y declaraciones relevantes incluyendo los convenios fundamentales de la OIT. *Aunque el llamado es apropiado pues muchos convenios no han sido ratificados, y los que sí a menudo se violan, la hipocresía es supina, porque las empresas son cómplices instigadores en muchos casos, como en el derecho de huelga. Por otro lado, el llamado devela la intención de no agregar nuevas normas y leyes, sino de mantener el status quo del derecho internacional.*
- ✓ Llamamos a los gobiernos a respaldar a las empresas responsables a nivel nacional e internacional abogando públicamente y educando. *Habiéndose erigido como empresas responsables unilateralmente piden más respaldo al entorno que insisten en imponer, develando su inquietud por la cada vez mayor crítica social prevaleciente.*
- ✓ Llamamos a los gobiernos a que respalden un sistema de comercio internacional abierto y a que desalienten el proteccionismo y la orientación doméstica. *Un claro llamado sin ambages a preservar el mantra neoliberal.*
- ✓ Llamamos a los estados miembros a que continúen respaldando la iniciativa del Pacto Mundial y mantener su posición dentro de la ONU. *Un llamado consistente a mantener el status quo.*

❖ **Valoración de la visión empresarial.** Por fortuna, aunque mayoritaria, esta posición no representa a un bloque monolítico, sobre todo debido a la actitud receptiva del grupo de TNLs del BLIHR al borrador de las Normas y a su disposición a probarlo. Sin duda se puede decir que la excepción hace a la regla. Mas ante el inmenso poder que tiene el capital mundial sobre los gobiernos y sus sociedades, esta excepción es especialmente valiosa. Como expondré en la siguiente sección, la posición de la BLIHR es una posición intermedia en el ancho océano que separa a la posición dominante en la sociedad civil y la posición de la Declaración de Ginebra. Mientras que ésta es reactiva, la postura del BLIHR es proactiva y proponente de alternativas. Así, la actitud al trabajo de RESG-DDHH es mayoritariamente reactiva en el sector empresarial con excepción de la BLIHR, quien se embarcó en el proyecto y además estableció un rapport cercano con Ruggie. En efecto, es notoria en la Declaración de Ginebra la ausencia de toda alusión al mandato del RESG –que constituye actualmente el núcleo de la labor exploradora e investigadora más seria sobre el tema de las responsabilidades de las empresas en el seno de la ONU. Finalmente, además del voluntarismo como hilo conductor a lo largo de cada uno de los 21 puntos, es de llamar la atención la arenga a reforzar a la globalización del neoliberalismo al tiempo que brilla por su ausencia toda mención a la democracia.

### V.(e) Posiciones de la Sociedad Civil

Ese ancho océano entre la visión de las sociedades y la de las TNLs se observa nítidamente al revisar las declaraciones y valoraciones sociales que hacen, tanto desde el ángulo académico y de grandes organizaciones civiles, como Amnistía Internacional, como en las organizaciones de base.

♦ **Organizaciones de base.** Sin duda, donde más diáfananamente se observa la consternación por el imperialismo del mercado, es en las declaraciones de las organizaciones de base del Sur. Así se observa en un comunicado de una red de organizaciones iberoamericanas, región con países que ostentan algunas de las mayores desigualdades de la riqueza –como los son Brasil, Chile y México– y en donde hay mayor movilización en contra del neoliberalismo. El comunicado forma parte de las consultas que el RESG está realizando con diferentes partes interesadas.

Las organizaciones consideran que hay una extrema desigualdad entre las prerrogativas legales de las empresas y el respeto real a los DDHH, el cual es pisoteado. El hecho de contar sólo con instrumentos voluntarios y con la buena voluntad de la empresa exhibe la fragilidad del sistema. Por ello consideran que el reto de la humanidad es implementar políticas de desarrollo socialmente justas, sostenibles y ancladas en los DDHH.

Para responder a este reto, el papel de la ONU debe de ser ayudar a promover la adopción de un marco obligatorio que garantice el respeto de los DDHH de todas las personas. En consecuencia las organizaciones hacen un llamado a adoptar las siguientes medidas:<sup>87</sup>

- Crear y adoptar un marco normativo de DDHH que sea vinculante para empresas.
- Promover un sistema adecuado de justicia.
- Exhortar a los estados para que establezcan medidas de prevención y sanción.
- Establecer mecanismos de vigilancia de cumplimiento de la normativa internacional.
- Medir el impacto de la actividad de las empresas y actores financieros.
- Dar prioridad a la participación de la sociedad, especialmente de las comunidades directamente afectadas.
- Reconocer, respetar y hacer respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

♦ **Organizaciones y redes de DDHH.** En una intervención oral con el RESG-DDHH por parte de Amnistía Internacional, Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Human Rights Watch, Comisión Internacional de Juristas y la Federación Internacional de DDHH este sector centró su posición en tres puntos:<sup>88</sup>

- Es esencial que las discusiones del Consejo incorporen la perspectiva de los afectados por los abusos de las empresas a los DDHH y que se informen de la naturaleza y el grado de esos abusos.
- Los estados no entienden plenamente su obligación de proteger en contra de los abusos empresariales a los DDHH o no son capaces o no están dispuestos a cumplir con su deber.
- Las iniciativas voluntarias o multi-sectoriales tienen un papel que jugar en el tema de DDHH en la empresa pero no tienen credibilidad porque fracasan en asegurar que los principios por los que abogan sean practicados. Apoyarse demasiado en ellas es tan inapropiado como inadecuado.

Además le preguntan al RESG ¿cómo piensa analizar el patrón de los abusos de las corporaciones y su impacto en los individuos y comunidades? Y le solicitan integrar la perspectiva de las víctimas en su programa de trabajo, como una base desde la cual desarrollar recomendaciones al Consejo de DDHH que aborden estas inquietudes.

♦ **Grupos de inversión ética.** Un sector que va adquiriendo cada vez mayor influencia son las organizaciones de inversionistas con sentido ético que manejan portafolios de inversionistas institucionales e individuales. Una de las organizaciones más antiguas y activas es el *Interfaith Centre on Corporate Responsibility*

(ICCR) en Nueva York, organización que ha entablado rapport con el Representante Ruggie y se ha reunido con él para abordar cuestiones específicas de su mandato. En un documento que expresa su posición sobre algunos puntos buscando influir en las recomendaciones de Ruggie, el ICCR plantea las siguientes cuestiones interesantes que ilustran algunas de las inquietudes de un sector que trata de invertir éticamente en las empresas:<sup>89</sup>

- Las evaluaciones de impacto son de suma importancia y deben ser una norma para toda empresa en función de los DDHH internacionalmente reconocidos.
- Consideran que tiene que haber alguna forma de reporte obligatorio lo más transparente posible.
- Les parece aceptable que exista un marco para reportar que combine lo obligatorio con lo voluntario.
- Las soluciones tienen que lograrse mediante el diálogo con las partes interesadas apropiadas.
- Los reportes transparentes de las dimensiones social y ambiental deben considerarse elemento necesario del buen funcionamiento de cualquier mercado de capitales.
- Consideran crítico incluir a los grupos independientes de base comunitaria para la vigilancia y la verificación.

- Los indicadores de desempeño deben de ser consistentes para todas las empresas e industrias y deben desarrollarse mediante un proceso multi-partes interesadas, ya sea por los gobiernos o, en algunos casos, por las empresas y partes interesadas relevantes.
- Expresan especial preocupación por las condiciones de vida dignas (salario digno). Consideran que una empresa no es responsable de elevar la calidad de vida de un país, mas sí de su impacto en los esfuerzos de ese país para mejorar las condiciones de vida para con sus ciudadanos. Por ello, no debemos permitir que las complejidades del desarrollo económico y de otros factores sociales se usen como excusa para impedir el progreso de los reportes corporativos.

♦ **Coalición Europea para la Justicia Corporativa** (ECCJ por sus siglas en inglés). Una contribución al debate la aporta esta organización social europea la cual encarga un estudio valorativo, a propósito de la creación del Consejo de DDHH de la ONU y del nombramiento del RESG, con recomendaciones y opciones concretas a aplicarse en la ONU, la Unión Europea y los estados, con el fin de poner bajo control a las empresas en el campo de los DDHH y los derechos ambientales. Enseguida los argumentos y recomendaciones más destacables:<sup>90</sup>

- Deben de establecerse derechos legales, compensaciones para las víctimas y que a los responsables se les haga rendir cuenta de sus acciones u omisiones –incluyendo el no monitorear a sus cadenas de abastos– que directamente causan, alientan o simplemente toleran esas violaciones.
- Se requiere de una iniciativa en la UE e internacionalmente para asegurar que las TNLs sean hechas responsables de las violaciones a los DDHH y ambientales que cometan o de las que sean cómplices.
- La situación actual es insatisfactoria, donde los estados anfitriones no están dispuestos a proteger a sus poblaciones y los estados matrices se resisten a proveer remedios a las víctimas o imponer obligaciones a las empresas matrices.
- Será improbable que los estados actúen a menos que se logre una movilización de organizaciones sociales significativa.
- Opciones bajo el derecho internacional y europeo:
  - Aclarar la obligación de los estados de proteger los DDHH. Esta opción sería fútil pues sólo confirmaría el estado actual del derecho internacional.
  - Establecer un mecanismo de mercado que imponga obligaciones directas a las TNLs bajo el derecho internacional, de forma similar a las directrices de la OCDE y sus PNCs pero con mucho mayor alcance.
  - Ampliar la obligación de los estados de controlar a las empresas más allá de su territorio, clarificando y extendiendo la obligación de los estados de proteger los DDHH contra cualquier violación por parte de las TNLs. Utilizando como ejemplo el Convenio de 1982 de la Bahía de Montego, sobre la Ley Marítima, que define el deber del Estado bandera de ejercer su jurisdicción y control administrativo, técnico y social sobre los barcos que ondeen su bandera y que detalla las implicaciones de sus responsabilidades, un nuevo Convenio Internacional para combatir las violaciones de las TNLs a los DDHH puede requerir de los estados que adopten legislación, aplicable a todas las actividades de cualquier empresa que se considere que tenga su nacionalidad, doquiera que opere (página 6).
  - Bajo el Derecho Europeo, en la Regulación Bruselas I, nº 44/2001, las jurisdicciones nacionales de los estados miembros de la UE son en principio competentes para aceptar procedimientos civiles contra personas, incluyendo a empresas, con domicilio en la UE, que son civilmente responsables de ciertos actos doquiera que ocurran, incluyendo fuera de la UE.
  - Otra opción a largo plazo es acercar el derecho criminal de los estados miembros para criminalizar extra-territorialmente a las empresas por sus abusos e imponer sanciones efectivas a las personas legales. Un primer paso puede ser controlando a las personas privadas o legales adoptando un instrumento que se enfoque en el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) donde los crímenes internacionales pueden ser cometidos por personas legales y, en principio tanto a empresas como a personas naturales (páginas 9-11).



*“el uso del Convenio de la Bahía de Montego en el Derecho Marítimo muestra cómo es perfectamente posible aplicar la misma lógica que se aplica en la jurisdicción de los estados sobre los barcos con sus banderas a las empresas con su nacionalidad”*

❖ **Valoración de las posiciones de la sociedad civil.** Las posiciones muestran un afinidad muy fuerte en todos los diferentes sectores sociales con presencia en el debate sobre el tema de DDHH y las empresas. La afinidad más fuerte radica en la demanda de instrumentos legales obligatorios y coercitivos, con todas sus implicaciones, la cual se contraponen 180 grados con la posición empresarial y de los estados que insiste en un entorno de buenas acciones voluntarias. Las demandas sociales más sistemáticas son las siguientes:

- Marco legal obligatorio y coercitivo mediante penas para los culpables y remedios para las víctimas y con derecho de las víctimas a presentar querellas.
- Participación amplia y directa de la sociedad civil en el desarrollo del marco regulador, especialmente de las víctimas más afectadas por los abusos de las empresas.
- Mecanismos de vigilancia y certificación gestionados por la sociedad civil.
- Evaluaciones de impacto como norma obligatoria antes de aprobarse cualquier actividad empresarial.
- Normas e indicadores uniformes aplicables a todas las empresas, doquiera que ejerzan su actividad.
- Rendición de cuentas transparente obligatoria vía reportes de desempeño en el respeto a los DDHH en esfera de influencia.
- La denuncia de que los estados no están dispuestos a cumplir con su obligación de proteger los DDHH del abuso de las empresas.

*“la apreciación de Schutter considerando que el status quo difícilmente cambiará a menos que haya una amplia movilización de organizaciones civiles, exhibe a los gobiernos como agentes del bienestar corporativo y a la parodia democrática a la que nos enfrentamos”*

Digno de enfatizar por ser argumentos de importancia que rebasan las demandas sistemáticas anteriores son las dos ilustraciones que Schutter hace de leyes existentes que pueden servir de referencia para construir un marco legal al que se someta la práctica empresarial. El uso del Convenio de la Bahía de Montego en el Derecho Marítimo muestra cómo es perfectamente posible aplicar la misma lógica que se aplica en la jurisdicción de los estados sobre los barcos con sus banderas a las empresas con su nacionalidad. Todo es cuestión de voluntad política, que la sociedad civil denuncia que no existe. La otra ilustración claramente apunta al largo plazo a un marco jurídico extraterritorial partiendo de la lógica legal

que se aplica en la Corte Penal Internacional para castigar a las personas legales, empresas o personas naturales. También debe destacarse la importancia que otorgan los inversionistas del ICCR al tema de salarios dignos, que raramente se aborda con precisión, pero que es el factor de mayor importancia en la calidad de vida y el más relevante en el sistema de explotación.

Finalmente, la apreciación de Schutter considerando que el status quo difícilmente cambiará a menos que haya una amplia movilización de organizaciones civiles, exhibe a los gobiernos como agentes del bienestar corporativo y a la parodia democrática a la que nos enfrentamos. Los gobiernos no sólo se oponen mayormente a cumplir con sus obligaciones sometiendo a las empresas a la voluntad democrática sino que además cada vez reprimen más el activismo y movilización de las organizaciones civiles, mediante subterfugios legislativos, a los que sí están muy dispuestos, y mediante la burda represión. Esta situación no es un problema exclusivo de los estados del Sur con gobiernos más débiles sino también sucede cada vez más a menudo en los estados del Norte conforme crece la movilización social.

Los organismos multilaterales y mucho menos los gobiernos pueden evadir la demanda central de la sociedad civil global: tenemos que tener un marco legal obligatorio que someta a los dueños del mercado a la voluntad de la sociedad para asegurar que respeten plenamente nuestros DDHH. Este marco tiene que construirse con la plena participación social e incluir penas y reparaciones en concordancia con el daño causado. Además, los ciudadanos tenemos que tener el derecho no sólo de quejarnos sino de demandar a las empresas con penas para las personas naturales que las controlan, sea como administradores o como inversionistas.

## V.(f) Valoración final de la labor del RESG-DDHH

La labor del Representante Ruggie es benéfica por el sólo hecho de mantener la cuestión del abuso y crasa violación de los DDHH por parte de las empresas como tema prioritario en la agenda internacional. La labor del RESG además es un buen ejercicio, bien intencionado, de evaluación y clarificación de conceptos concretos sobre el tema –como esfera de influencia y complicidad– y de la diversidad de posiciones desde los ángulos del derecho, operativos y ciudadano. Es además en sí misma una excelente oportunidad para que la sociedad haga valer su derecho a influir participando directamente en el debate y en el futuro desarrollo de un marco legal que rijan la práctica empresarial respecto a los DDHH. De esta forma, su labor, gracias a la participación ciudadana, deberá servir para aclarar de una vez por todas que se trata de delimitar las responsabilidades de las empresas en materia de DDHH, con el fin de hacer que se sometan



a ellas y no de transferirles deberes de los estados, como erróneamente se ha argüido, incluyendo al mismo RESG. Por otro lado, el RESG peca de ingenuidad al insistir en mecanismos de mercado no vinculantes, probablemente por su incapacidad para romper con el contexto de mercado y situar a la real democracia como el único entorno en donde puede aspirarse a un contrato social justo. No es positivo que Ruggie desdeñe al borrador de las Normas, sobre el cual sólo el sector empresarial, con excepción del BLIHR, se ha opuesto, e inclinarse por lo no vinculante. Obstinar en confiar en el entorno darwinista donde los dados están totalmente cargados de acuerdo a la ley del más fuerte, es rehusarse a ver la realidad. No es verdad que la globalización ha tenido gran éxito en abatir la pobreza. Eso es una falacia fácilmente demostrable. Es verdad, por otro lado, que no hay una solución ideal, o una única “bala de plata” como eufemísticamente la llama el RESG, que pueda resolver el reto de los DDHH y la empresa. No obstante, es muy equivocado, inapropiado y estéril ir en pos de posibles soluciones sin trastocar el actual entorno de mercado. Las empresas, bajo la actual cultura de negocios no son organizaciones de bien, porque su fin es simplemente reproducir y acumular el mayor capital posible sin importar las consecuencias. En la cultura actual las empresas no tienen moral, son autoritarias y antidemocráticas por naturaleza.

Así las cosas, la naturaleza depredadora del capitalismo yace en conflicto directo con los derechos humanos y con la democracia. El mismo RESG ha reconocido lo insostenible del actual sistema. En consecuencia, es de suma importancia tomar consciencia de que las empresas harán todo cuanto esté en sus manos para imponer sus intereses por encima de la gente y el planeta; por eso muchas empresas se protegieron legalmente antes de adherirse al Pacto Mundial. La mayoría no tienen interés en los DDHH ni desean enterarse de los efectos negativos de sus actividades en los DDHH, actividades que, además, a menudo se perpetran con pleno conocimiento de sus consecuencias negativas; por eso muchas veces las llevan a cabo a través de terceras partes, para evadir o al

menos diluir su responsabilidad. Es por ello que es completamente ingenuo considerar que cualquier otra opción –que no sea la coerción directa mediante un marco legal obligatorio de DDHH y la empresa, con poder de imponer penas y compensaciones fuertes, conmensurables con el agravio– puedan lograr el respeto de los DDHH en el entorno del mercado.

En última instancia, si optamos por suponer que vivimos en un entorno democrático, no deben importar los bemoles del derecho internacional o los tecnicismos operativos para que las empresas controlen plenamente su huella en los DDHH. En todo caso, esas son cuestiones que pueden resolverse con facilidad con sólo existir voluntad política en los gobiernos de los estados. Es preciso aquí volver a insistir en la ausencia de toda alusión al contexto democrático en todos los documentos del RESG y recordar que lo que debe gozar de precedencia sobre cualquier otro factor, a final de cuentas, es la opinión ciudadana dominante. Por ello, si la enorme mayoría de los ciudadanos del mundo globalizado exigimos un marco legal fuerte y efectivo para controlar a las empresas, los gobiernos no tienen otra opción mas que obedecer el mandato popular. Y si duda cabe, no hay más que convocar a consultas ciudadanas en todo el mundo, controladas por la sociedad civil, para corroborarlo. Es por esto que, considerando que el mandato del Representante Ruggie ha sido extendido a un total de seis años (2011), e independientemente de la *real politique*, es su deber abogar por un marco legal como única forma de dirimir el interés empresarial con los DDHH. Es también lo único adecuado desde el punto de vista racional, porque los instrumentos no vinculantes sólo lograrán prolongar un poco más el status quo, permitiendo que las empresas aparenten que hay cambios para que todo siga igual; y, así, el conflicto aumentará.

<sup>78</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie. A/HRC/4/35. 19 de febrero de 2007

<sup>79</sup> OECD Watch. Press Release. New survey finds governments failing to curb corporate abuse. Without improvements OECD Guidelines will be meaningless. 4 October 2007.

<sup>80</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Adición 1. Responsabilidades de los estados en materia de regulación y arbitraje de las actividades empresariales con arreglo a los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas: panorama general de los comentarios de los órganos creados en virtud de tratados. A/HRC/4/35/Add.1. 13 de febrero de 2007

<sup>81</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Adición 2. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL CON ARREGLO AL DERECHO INTERNACIONAL Y CUESTIONES RELACIONADAS CON LA REGULACIÓN EXTRATERRITORIAL: RESUMEN DE LOS SEMINARIOS JURÍDICOS. A/HRC/4/35/Add.2. 15 de febrero de 2007

<sup>82</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Adición 3. Políticas de derechos humanos y prácticas de gestión: resultados de las encuestas realizadas a gobiernos y a las empresas de la lista Fortune Global 500 A/HRC/4/35/Add.3. 28 de febrero de 2007

<sup>83</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Adición 4. Reconocimiento de los derechos humanos por las empresas: tendencias mundiales, variaciones regionales y sectoriales. A/HRC/4/35/Add.4. 8 de febrero de 2007

<sup>84</sup> CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos: Resolución de cuestiones metodológicas esenciales A/HRC/4/74. 5 de febrero de 2007

<sup>85</sup> UN Global Compact. Business Leaders Adopt Declaration on Responsible Business Practices. 6 July 2007.

<sup>86</sup> United Nations Global Compact Leaders Summit. GENEVA DECLARATION. Geneva, Switzerland. 5-6 July 2007

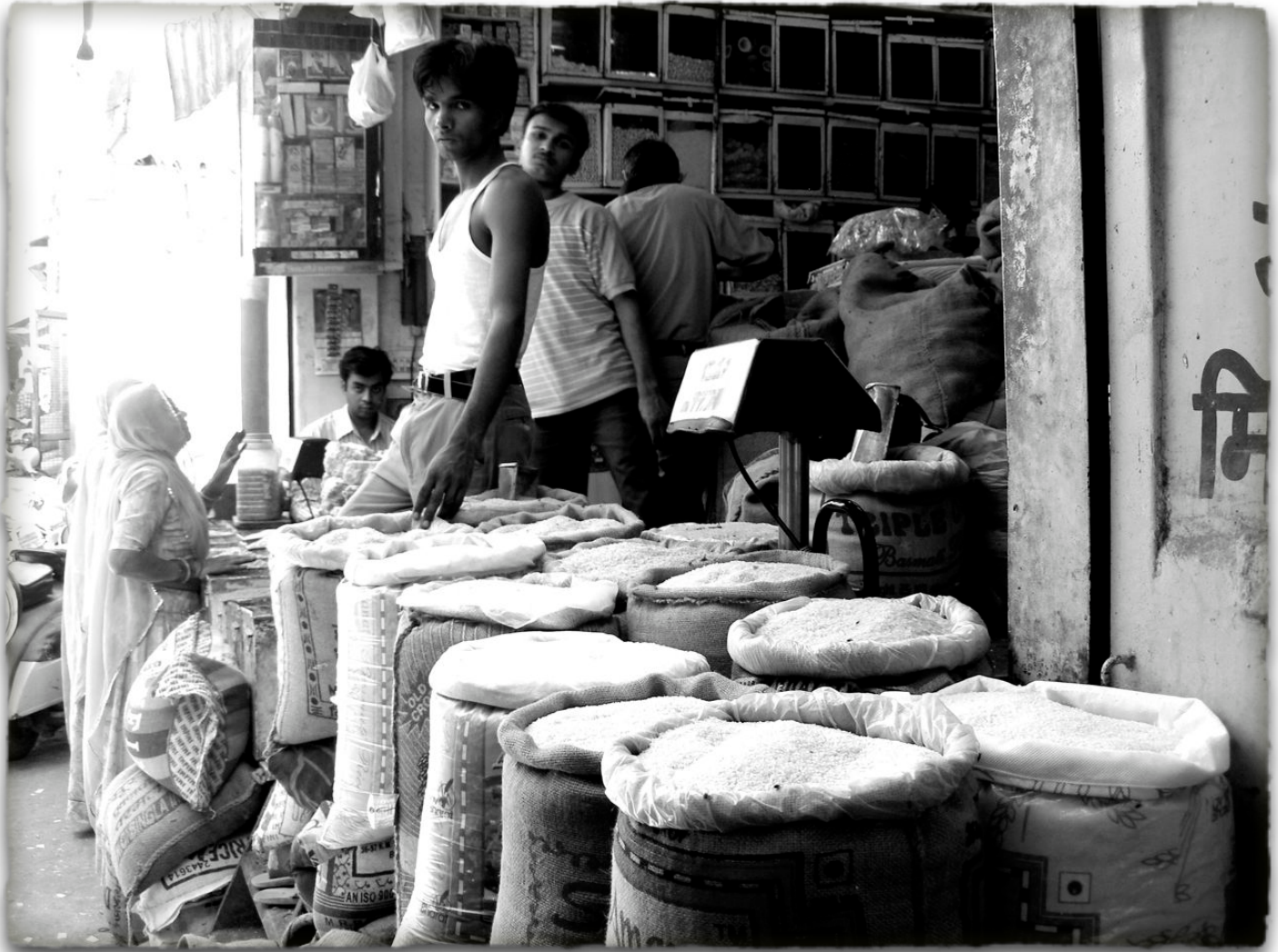
<sup>87</sup> Declaración de las Organizaciones Sociales, Sindicales, No Gubernamentales, Representantes de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afectadas Convocada a La Consulta Regional del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Otras Empresas Bogotá, Colombia, 18-19 de enero de 2007.

<sup>88</sup> Oral Intervention. Amnesty International, ESCR-Net, Human Rights Watch, International, Commission of Jurists, International Federation for Human Rights. Human Rights Council. Report of the Special Representative to the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises Interactive Dialogue. 4th session, 12 to 30 March 2007

<sup>89</sup> Interfaith Centre on Corporate Responsibility. Letter to John Ruggie of 10 October 2006.

<sup>90</sup> Olivier de Schutter. The European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). Towards Corporate Accountability for Human Rights and Environmental Rights Abuses. Brussels, April 2007.





## VI. La Iniciativa de DDHH de los líderes empresariales (BLIHR) y su prueba de las Normas

La BLIHR, con la señora Mary Robinson como Presidenta Honoraria –ex Primera Ministra de Irlanda y ex Alta Comisionada de DDHH de la ONU– se formó en 2003 como un grupo de empresas para evaluar la posibilidad de un marco común de DDHH en las empresas. Las empresas que la componen a la fecha son: ABB, Alcan, AREVA, Barclays, Coca-Cola, Ericsson, Gap, General Electric, Hewlett-Packard, MTV Networks Europe, National Grid, Novartis, Novo Nordisk, Statoil y The Body Shop International. La lista de empresas, originalmente sólo siete, ha ido gradualmente creciendo, integrándose cinco empresas al grupo desde su último reporte (#3). Su posición sui géneris dentro del mundo empresarial y su enfoque constructivo y proactivo requieren de una valoración aparte de la posición

empresarial, por el esfuerzo que hace por encontrar soluciones a la controversia permanente en el tema de los DDHH en la empresa. No debe interpretarse que las empresas del grupo son empresas socialmente responsables pues algunas tienen un abundante expediente de denuncias sociales. Sencillamente, estas son las empresas que decidieron integrarse a esta iniciativa.

### VI.(a) El propósito del proyecto

Los miembros de la BLIHR parten de la convicción de que las prácticas irresponsables de negocios pueden tener impactos negativos muy serios sobre los DDHH. El propósito inicial de la BLIHR fue explorar cómo podrían usarse los principios y normas de DDHH, en base a la Declaración Universal de DDHH, esperando informar e inspirar a otras empresas a aplicarlas en sus prácticas de negocios. Así mismo, se fijó como otro objetivo demostrar cómo el liderazgo empresarial podía apoyar a los esfuerzos globales para hacer realidad a los derechos fundamentales de todas las personas. Su fin último es



identificar a las mejores prácticas empresariales sobre DDHH que se puedan desarrollar, como un marco común, reconociendo que para lograrlo se requiere la participación plena de todas las partes interesadas. Como parte de ese propósito, a diferencia de la actitud negativa y de rechazo al borrador de las Normas de la vasta mayoría de las empresas y órganos empresariales, la BLIHR se ha dedicado desde 2004 a evaluar a las Normas, probándolas en la actividad real de las empresas que la componen.

La labor exploratoria es el resultado de un amplio diálogo con expertos en el tema, ONGs, gobiernos y empresas. La conclusión dominante de su experiencia hasta ahora, entre las empresas participantes, es que las empresas, sobre todo las que actúan en muchos países, se beneficiarían del desarrollo de un marco común conformado de principios y normas que claramente articulen la naturaleza y alcance de las responsabilidades de las empresas en materia de DDHH. Consideran así mismo que la mera disposición a probar las Normas envió un importante mensaje positivo acerca de afrontar los temas de DDHH a escala internacional.

#### VI.(b) Premisas principales del tercer reporte<sup>91</sup>

El reporte número tres de la BLIHR arroja las siguientes premisas generadas hasta ahora por su labor exploratoria:

- Las Normas han sido muy útiles como parámetro de referencia para que las empresas verifiquen y desarrollen sus propias prácticas de DDHH.
- Debe continuar siendo claro que la primacía del deber de encargarse de la satisfacción de los DDHH es de los gobiernos. Éstos tienen que estudiar con detenimiento la mejor forma de enfocar a las leyes de DDHH existentes con el fin de que se aclare su responsabilidad. No obstante, aunque hay amplio acuerdo en este punto, cada vez hay más toma de consciencia de que las empresas también tienen un papel importante que jugar, mas no hay claridad ni acuerdo sobre las delimitaciones de lo requerido y esperado de ellas.
- Continúa habiendo gran necesidad de claridad sobre la naturaleza y alcance de las responsabilidades de las empresas en los DDHH.
- Se propone el desarrollo de un marco común de DDHH en la empresa. Dicho planteamiento, desde la perspectiva empresarial, es fuerte y algunos conceptos son cada vez más claros mientras otros requieren mayor labor. Un marco común necesitaría ser universal en su aplicación y suficientemente específico para guiar a cada empresa. Debe aplicarse en todos los sectores de negocios y en todos los países, con diferentes retos en los DDHH. Así mismo, el marco común necesita ser claro al establecer lo “mínimamente legal” (*campo parejo de juego*) en la conducta empresarial. Finalmente, el marco común idealmente se compondrá de tres elementos:

1. Conceptos para clarificar el papel de los negocios en los DDHH.
  2. Ámbito de normas relevantes recogidas del derecho internacional de DDHH.
  3. Procesos para aplicar los conceptos y las normas en un contexto de mercado.
- Consideran que los enfoques obligatorios y voluntarios no son mutuamente excluyentes sino complementarios ya que los obligatorios comenzarían en lo mínimamente legal y los voluntarios elevarían el nivel de los DDHH.
  - No debe permitirse a ninguna empresa que explote en ningún lugar y todos deben de cumplir con los requisitos mínimos del derecho internacional de DDHH sin importar en dónde operen.

#### VI.(c) Contexto de la Iniciativa

La BLIHR está firmemente anclada en el entorno de mercado actual. La competencia de mercado está implícita en el énfasis que la BLIHR da al concepto de *campo parejo de juego*, de tal forma que se espera que los países actúen de manera uniforme en la aplicación de las leyes que protegen a los DDHH. La idea es que las empresas no sufran desventajas competitivas dependiendo de la variación en la aplicación en diferentes países de los instrumentos que protegen a los DDHH. De ahí que el reporte comente que “la experiencia de las empresas de la BLIHR es que el compromiso de cada vez más empresas hacia los DDHH continuará ampliándose y profundizándose, siempre y cuando las empresas progresistas no sufran desventajas competitivas como resultado de su compromiso” (página 5). Por ello, para ellas es inquietante el caso de los países que no son capaces o no están dispuestos a hacer valer las obligaciones actuales, pues dichas inconsistencias desalientan el enfoque progresista en los negocios. Así mismo, la necesidad de hacer que el marco común logre mayor claridad en los conceptos es también para que aclare cómo pueden las empresas cumplir con las expectativas sociales más allá de lo mínimo legal y cómo pueden ver a los DDHH no sólo como obligación sino también como oportunidad (de mercado).

#### VI.(d) Conceptos para clarificar el papel de los negocios en los DDHH

La BLIHR aborda una serie de conceptos que considera necesarios para delimitar las responsabilidades de gobiernos y empresas, para lograr un “campo de juego parejo” y, finalmente, para establecer un marco común de DDHH en las empresas. Al abordarlos espera contribuir a clarificar el papel de la empresa en el respeto a los DDHH conceptualizando aspectos que considera esenciales:



## VI.(d1) Conceptos para trasladar a los DDHH a un contexto de negocios

La BLIHR establece tres conceptos que deben ayudar a aclarar el respeto de los DDHH en las empresas:

- **Esfera de influencia.** Debe incluir a los individuos con quienes la empresa tiene proximidad política, contractual, económica o geográfica; a mayor tamaño de empresa mayor esfera de influencia. Cada empresa tienen una esfera de influencia diferente. Debe tomarse en cuenta que las partes interesadas a menudo perciben más amplia y más profunda a la esfera de influencia de una empresa que lo que la empresa misma juzga.
- **Complicidad.** Una empresa es cómplice del abuso de DDHH si autoriza, tolera, o conscientemente ignora los abusos a los DDHH cometidos por una entidad con la que está asociada, o si una empresa conscientemente provee asistencia práctica o aliento que tiene un efecto sustancial en la perpetración de abusos a los DDHH. La participación de la empresa no tiene que causar un abuso a los DDHH. Es suficiente con que la asistencia o aliento sea a un nivel que sin la actuación de la empresa los abusos muy probablemente no hubiesen ocurrido al mismo grado o de la misma forma. Se carece de una definición clara al respecto.
- **Enfoque basado en el reconocimiento a los DDHH.** El concepto significa que una empresa está dispuesta a aceptar que sus partes interesadas tienen derechos universales y que cualquier decisión tomada por la empresa debe esforzarse por respetarlos. En la práctica una empresa: 1) identificaría los derechos en cuestión, 2) identificaría sus responsabilidades en términos de las normas internacionales de DDHH y 3) determinaría las acciones apropiadas.

## VI.(d2) Prácticas mínimas y adicionales

La BLIHR considera conceptos de gestión empresarial a las prácticas o normas mínimas y adicionales de responsabilidad empresarial sobre DDHH y las agrupa en tres categorías. De acuerdo a la visión anclada en el contexto de mercado éstas son las esenciales, las esperadas y las deseables; categorías que han sido positivamente recibidas, como hemos visto, por el RESG-DDHH Ruggie y por el ex-Asesor del Pacto Mundial, Klaus Leisinger, Presidente de la Fundación Novartis, la rama filantrópica de una de las empresas del BLIHR. La BLIHR aboga aquí por la importancia de las prácticas voluntarias, argumentando que algunas de las contribuciones más efectivas y proactivas que puedan hacer las empresas no deben de estar limitadas o hacerse respetar mediante leyes. No obstante, la BLIHR imagina que en los años venideros las expectativas sociales aumentarán por lo que se incrementará la vara. Así, las conductas esperadas hoy en día podrían convertirse en

esenciales mañana. Considera también que a mayor uso de prácticas que superen lo esencial las empresas deberán esperar obtener mayores ventajas de competencia.

- **Esenciales.** Las normas mínimas de comportamiento empresarial a las que toda empresa tiene que sujetarse para garantizar el cumplimiento con las leyes de DDHH. La BLIHR no se refiere a leyes hechas para su cumplimiento por las empresas sino a las que actualmente obligan a los estados, bajo el derecho internacional, a prevenir y responder a los abusos empresariales de los DDHH (página 11). El BLIHR sugiere que se requiere mayor claridad y mecanismos para hacer a las empresas responsables cuando los gobiernos no actúan, pues toda empresa que no cumpla con los derechos esenciales tiene que ser hecha responsable de sus actos. La BLIHR considera que con el fin de desarrollar el “campo parejo de juego” y ofrecer certeza, es necesario clarificar cuáles son las normas mínimas universales de DDHH a lo largo del campo completo de derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Finalmente sugiere que las empresas deben de trabajar con los gobiernos sobre este aspecto y no incluye a las organizaciones civiles.
- **Esperado.** Representan a las expectativas adicionales, más allá de lo que se considerara lo legalmente requerido, generadas por las partes interesadas “claves”, tales como inversionistas, empleados, clientes, y proveedores, así como por las comunidades y las ONGs en la comunidad ampliada. Éstas algunos las definen como expectativas morales o de reputación.
- **Deseables.** Por definición representa a todas las acciones voluntarias.

## VI.(d3) Delimitación de las responsabilidades de estados y empresas

Partiendo de la premisa de que los estados tienen la responsabilidad primaria en la satisfacción de los DDHH de sus ciudadanos, la BLIHR atribuye tres conceptos a esta responsabilidad:

- **Respetar:** los gobiernos tienen que abstenerse de interferir directa o indirectamente con estos derechos;
- **Proteger:** los gobiernos tienen que evitar que terceras partes interfieran o violen a estos derechos;
- **Satisfacer:** los gobiernos tienen que adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales, promocionales apropiadas, y aún otras encaminadas a la plena satisfacción de estos derechos.

La BLIHR considera que para que los DDHH se hagan efectivos, está implícito que aquellos involucrados en violaciones necesitan ser llamados a rendir cuentas por sus acciones. El principio superior es que los estados son

los principales responsables ante las víctimas de los abusos a los DDHH y que las empresas son responsables ante los estados. Sin embargo, hay acciones que las empresas pueden tomar independientemente, destacándose las de monitoreo, auditorías e informes.

La BLIHR, al plantear la necesidad de un marco común, considera tres escenarios en los que la división de responsabilidades entre gobiernos y empresas puede ser no adecuada:

- No todos los gobiernos imponen las mismas leyes sobre las empresas por lo que hay variaciones en sus responsabilidades en los DDHH.
- Hay países donde los gobiernos son claramente incapaces o no están dispuestos a cumplir con sus obligaciones de DDHH.

- Dentro de cualquier empresa, los principales ejecutivos necesitan rendir cuentas a sus accionistas y a otros grupos de partes interesadas como los empleados. Estos mecanismos internos de rendición de cuentas necesitan reflejar los compromisos y obligaciones más amplios que una empresa puede tener con los derechos humanos.

De esta forma, la BLIHR considera que un marco común basado en la premisa de DDHH universales necesita ser capaz de asistir a las empresas en la navegación de los escenarios anteriores.

## VI.(e) **Ámbito de normas relevantes recogidas del derecho internacional de DDHH**

La BLIHR considera que un marco común deberá cubrir todo el espectro de normas de DDHH internacionales.

- **Derechos civiles y políticos.** Los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 –recogidos de la Declaración Universal de DDHH de 1948– destacándose el derecho a la vida, igualdad, libertad, juicio justo, privacidad, propiedad, participación en los asuntos públicos, libertad de pensamiento y expresión, religión, reunión, asociación y libertad contra la tortura y el trato inhumano y degradante.
- **Derechos económicos, sociales y culturales.** Los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (derechos ECOSOC) –partiendo de la Declaración Universal de DDHH– destacándose los derechos laborales –tratados abajo– el derecho a la vida familiar, a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, al nivel de salud más alto posible, a la educación, al vestido, alimentación techo y distribución justa de los alimentos. Para la BLIHR está claro que las empresas influyen en el derecho al trabajo por el sólo hecho de existir, por lo que todas las empresas tienen que observar los derechos subsecuentemente desarrollados por la OIT. La BLIHR considera esenciales a los derechos ECOSOC.
- **Derechos laborales.** La BLIHR considera a estos derechos como los más desarrollados en su aplicación a través de los Convenios y Recomendaciones tripartitas de la OIT y de una relevancia indisputable en el ámbito de la empresa. Hace notar que la OIT eligió promover a cuatro derechos laborales como los absolutamente medulares: eliminación del trabajo infantil, eliminación del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato y libertad de asociación. La BLIHR también considera que los parámetros para las conductas esenciales se encuentran en la marcos multi-sectoriales como la Iniciativa del Comercio Ético.
- **Salarios dignos.** Es de destacarse la especial mención de la BLIHR del tema de salarios dignos. En su opinión este es un tema de interés en el que no todos los códigos especializados en un sector específico lo abordan en comparación con el salario mínimo. El concepto de salario digno continúa pobremente definido y no hay consenso internacional acerca del método de cálculo. Por ello, la BLIHR considera que este tema tiene que investigarse más y arrojar claridad en sus conceptos y metodologías para su aplicación.
- **Otros derechos.** La BLIHR menciona a los derechos de grupos especiales, como son los pueblos indígenas, minorías étnicas, refugiados, inmigrantes, niños y mujeres. Incluye también los crímenes específicamente tipificados de lesa humanidad y los del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, especialmente en los casos de empresas en el sector de seguridad en países incapaces o no dispuestos a satisfacer el goce de los DDHH.

La BLIHR considera que el borrador de las Normas hace un buen trabajo de cubrir todos los derechos arriba incluidos aunque sin duda falta clarificar muchos conceptos y realizar un mejor enfoque en algunos de ellos. La BLIHR considera tal vez innecesarias las referencias de las Normas a derechos ambientales y de consumidores. Considera que su relevancia respecto a los DDHH es menos clara, y aunque sin duda ambos son relevantes en el ámbito empresarial, deberían de estar integrados en el marco común universal de manera puntual en los casos de derechos humanos en los que sí tengan relevancia concreta.

### VI.(f) Procesos para aplicar los conceptos y las normas en un contexto de mercado

La BLIHR considera que, sopesando la variedad de herramientas existentes provenientes de diversas iniciativas, hay mucho trabajo por hacerse antes de poder crear el inicio de lo que podría ser un conjunto de herramientas para integrar a los DDHH en la empresa globalmente. En referencia al borrador de las Normas, la BLIHR considera que aquí es donde éstas menos profundizaron ya que carecen de explicaciones claras sobre la metodología para aplicar mejores prácticas de DDHH en la empresa. Esta valoración es válida tanto para las herramientas de negocios específicas a utilizar así como para los mecanismos por medio de los cuales los gobiernos podrían hacer responsables a las empresas. No obstante, la BLIHR considera que no es posible prescribir un modelo específico a seguir. Respecto al tema de rendición de cuentas, la BLIHR se declara inicialmente en contra de la posibilidad de utilizar a organismos de la ONU para monitorear a empresas concretas, no obstante la importancia que la BLIHR otorga al tema de la rendición de cuentas.

La BLIHR ha optado por el momento, con el fin de cerrar la brecha existente en la integración entre los DDHH y los sistemas administrativos, en desarrollar una guía para integrar a los DDHH en los negocios. A este fin, la BLIHR eligió aplicar el modelo de desempeño del Pacto Mundial a todo el espectro de DDHH incorporados en un sólo marco común, como ellos lo proponen. El resultado fue la Guía para Integrar a los DDHH en la Empresa<sup>92</sup>, desarrollada en colaboración con la Oficina del Pacto Mundial y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.

### VI.(g) Conclusiones y expectativas de la BLIHR:

- Las Normas fueron un buen primer paso para establecer normas mínimas de los DDHH en la empresa mas no son aptas para implementarse operativamente en las empresas ni son suficientemente claras en muchos aspectos necesarios para delimitar la responsabilidad de las empresas en los DDHH.
- Los DDHH no sólo son una herramienta esencial para las empresas sino también para el sostenimiento de la sociedad en las cuales los gobiernos deben continuar jugando el papel principal de respetar, proteger, satisfacer y promover a los DDHH.
- Esperan que en los siguientes tres años de su labor los DDHH alcancen el nivel primordial de la consciencia empresarial y sean componente natural de la práctica empresarial.
- Expresan sumo interés en ampliar el alcance de su guía para cubrir tres áreas:
  - Cómo mejor integrar a los DDHH en los procedimientos de estimación general de riesgos e identificar lo que mejor funcione para la empresa en ésta área.

- Cómo mejor integrar todos los indicadores y herramientas bajo desarrollo en sistemas de monitoreo y reporte.
- Cómo desarrollar normas de capacitación de negocios en el campo de DDHH para compartir las mejores prácticas a través de los sectores y de otras ramas de educación y promoción de DDHH.

### VI.(h) Valoración de la Iniciativa de la BLIHR

La labor del grupo de empresas de la BLIHR es de encomiarse al haber sido capaces de reconocer algunos principios del sentido común más elemental, e imaginar escenarios que realmente reducen la brecha de forma significativa entre lo exigido por la sociedad civil y la reticencia predominante entre las empresas a reconocer cualquier grado de responsabilidad en el campo de DDHH.

Abordaré enseguida los principales temas cubiertos por el tercer informe de la BLIHR siguiendo a grandes rasgos el orden del informe.

### VI.(h1) Contexto de mercado

No por ser irremediable que la visión de la BLIHR sea de mercado, dado su origen, disminuye su inherente incompatibilidad con el respeto cabal a los derechos humanos. Las posiciones de esta iniciativa están explícitamente planteadas desde un ángulo en el que el mercado es situado por encima de la gente y el planeta. Así, se expresa gran insistencia en la necesidad de que el marco que regule en el futuro el impacto de la actividad empresarial sobre los DDHH mantenga un “campo parejo de juego.” Esta demanda tiene como fin asegurar que las empresas no se encuentren en desventaja competitiva ante la evidente diversidad de criterios y voluntades políticas con las que los gobiernos abordan el tema. De ahí que el reporte #3 explícitamente mencione “la percepción de que el compromiso de cada vez más empresas hacia los DDHH continuará ampliándose y profundizándose, siempre y cuando las empresas progresistas no sufran desventajas competitivas como resultado de su compromiso.” Sin duda, no deja de tener mucho mérito que la BLIHR plantee un entorno en el que el marco que regule a los DDHH en la empresa sea común y universal. Es correcto que un mismo conjunto de reglas sea aplicable a todas las empresas en todos los sectores y en todos los países sin importar la disposición del gobierno en turno. Mas la motivación no debe de ser asegurar certeza a las empresas más comprometidas de que no perderán ventajas competitivas por cumplir con las regulaciones frente a posibles competidores que no lo hagan.

Dicha posición somete la cooperación de las “empresas más comprometidas” a que se garantice un campo uniforme de competencia. Desde un inicio, esta es una



forma equivocada de abordar el tema de DDHH en la empresa. La razón por la que las empresas deben comprometerse con los derechos humanos tiene que ser única y exclusivamente porque esa es la expectativa moral de la sociedad civil a la que pertenecen, en la que actúan y de la que sacan provecho, independientemente de que actualmente no haya leyes que hagan a las empresas directamente responsables y les exijan el respeto irrestricto de los DDHH. El derecho a la reproducción y acumulación de capital no puede estar por encima del respeto irrestricto a los DDHH bajo ninguna circunstancia, especialmente cuando una porción muy importante de las utilidades se logran violando los DDHH premeditadamente. Los DDHH no pueden ser un factor de competencia, un valor agregado a la oferta mercantil de productos o servicios. Insistir en garantías de mercado es un grave error de apreciación y enunciación del tema. En consecuencia, el marco común universal de respeto a los DDHH en la empresa tiene que tener como única razón de ser el respeto de los mismos.

#### VI.(h2) Legal o voluntario

Tres de las posiciones a destacar y valorar positivamente de la BLIHR son su disposición en favor de un marco común universal, que incluya tanto normas obligatorias como voluntarias así como el hecho de, mirando hacia el futuro no muy lejano, avizorar un entorno en el que muchas de las normas que las empresas pudiesen considerar no esenciales lo sean, y que, por tanto, sean legalmente obligatorias. A pesar de que se hace una defensa de lo voluntario a lo largo de todo el informe, argumentando que las mejores contribuciones de las empresas se darían por esta ruta, lo cual es muy discutible, se deja abierto el tema, emergiendo así dicha posición como *sui generis* entre las empresas. A pesar de ello, la sociedad tiene que dejar claro desde un principio que la meta final tiene que ser siempre un marco común universal legal, complementado por prácticas voluntarias que lo fortalezcan. La buena práctica empresarial concerniente a los DDHH, en su más amplio espectro, y los derechos ambientales del planeta, tienen que ser reemplazados por leyes incorporadas en el derecho internacional y en el derecho mercantil y civil de los estados. Si un derecho no está respaldado por una ley a obedecerse estrictamente por todos los actores, incluyendo de manera preponderante al Estado mismo y a las empresas, no es un derecho sino una opción altruista relegada a la filantropía. Así, lo voluntario sólo puede referirse a acciones que coadyuven a fortalecer aún más a los DDHH ya enmarcados en los códigos legales.

*“un derecho no es una cuestión en la que las empresas tengan la opción de estar dispuestas o no a tomar consciencia y a reconocer...O son derechos respaldados por leyes concretas, que incluyan penas por su violación, conmensurables con el daño incurrido, o no son derechos”*

#### VI.(h3) Marco valorativo de los DDHH.

La BLIHR contribuye a la clarificación de las responsabilidades de la empresa avanzando definiciones de los conceptos “esfera de influencia, complicidad y el reconocimiento empresarial de los DDHH”, los cuales considera importantes para coadyuvar a trasladar a los DDHH a un contexto de negocios. Si bien la articulación de dichos conceptos requerirá de mayor profundidad y definiciones explícitas de elementos como proximidad política, contractual, económica o geográfica, en el caso de la esfera de influencia, o de asistencia práctica o efecto sustancial, en el caso de complicidad, la articulación avanzada por la BLIHR de estos dos conceptos comunica una intención holística que abarque todas las circunstancias en lugar de limitarlas, lo cual es muy positivo.

El tercer concepto concerniente con “estar consciente y dispuesto a reconocer” que las partes interesadas tienen derechos universales y que cualquier decisión empresarial debe esforzarse por respetarlos conlleva implícitamente un enfoque voluntario. Por ello, la definición explica que en la práctica este concepto significaría que las empresas tienen que identificar los derechos en cuestión, identificar sus responsabilidades en términos de las normas de DDHH internacionales y determinar la acción apropiada (página 11 del reporte #3). Aunque la BLIHR explica que este enfoque lo adoptan cada vez más organismos públicos, sobre todo en la ONU, como en el caso del derecho al desarrollo, es evidente que la tendencia en estos organismos se inclina con el voluntarismo. Un derecho no es una cuestión en la que las empresas tengan la opción de estar dispuestas o no a tomar consciencia y a reconocer. Frente a un derecho, todos los actores tenemos la obligación de tomar consciencia y respetarlo. Nuevamente, los derechos nunca pueden ser opciones.

*“suponiendo que aspiramos a construir un entorno de real democracia en el que, por definición, la voluntad mayoritaria tiene precedencia sobre cualquier otra, la visión predominante en la sociedad civil global es que los DDHH tienen que estar respaldados por leyes; y estas leyes tienen que hacer responsables a las empresas de sus propios actos que violen dichas leyes”*

Por otro lado, en sintonía con la visión dominante en la ONU, expresada por personas como RESG-DDHH, Ruggie, al igual que el ex-Asesor del Pacto Mundial, Leisinger, la BLIHR se propone la clasificación de los DDHH en esencial, esperado y deseable. Dicha clasificación, descrita anteriormente, es equivocada porque, nuevamente, no pueden haber derechos opcionales. O son derechos respaldados por leyes concretas, que incluyan penas por su violación, conmensurables con el daño incurrido, o no son derechos. Dado el actual entorno de capitalismo salvaje



y de violación consuetudinaria y cotidiana de derechos, como es el salario digno, es razonable que el cumplimiento cabal de algunos de ellos se enmarque en un proceso gradual hasta su culminación cabal, mas no pueden haber derechos esenciales y esperados. Exceptuando a los DDHH que protegen los crímenes de lesa humanidad, casi todos los demás, que sufren un impacto negativo en el ámbito de la empresa, no gozan de una protección mediante leyes a observarse por las empresas, sino sólo por los estados. Otros DDHH – nuevamente el salario acorde con la dignidad humana – ni siquiera están contenidos en ninguna ley o convenio del derecho internacional. No obstante, la expectativa social actual es que todos ellos sean derechos a respetarse cabalmente ahora, por leyes que hagan responsables a las empresas y no por prácticas voluntarias. Sin duda, hay amplia discrepancia entre lo esencial y lo deseado, mas es muy positivo que la BLIHR considere que todos los derechos sociales, económicos y culturales son esenciales (página 13).

No obstante, suponiendo que aspiramos a construir un entorno de real democracia en el que, por definición, la voluntad mayoritaria tiene precedencia sobre cualquier otra, la visión predominante en la sociedad civil global es que los DDHH tienen que estar respaldados por leyes; y estas leyes tienen que hacer responsables a las empresas de sus propios actos que violen dichas leyes. Esta visión predominante es que todos los DDHH enmarcados en la Declaración Universal de DDHH tienen que ser derechos a respetarse obligatoriamente por las empresas.

En cuanto a la clasificación de deseable, no puede haber derechos en este grupo, sino sólo acciones voluntarias, como correctamente las denomina la BLIHR, que contribuyan al goce de los DDHH ya incorporados en el marco legal. Esta categoría es la única que puede ser susceptible de utilizarse como factor de competencia que agregue valor a la empresa.

*“así como los gobiernos reciben su mandato de la sociedad y por tanto son responsables ante ésta, individuos y empresas son también responsables ante la autónoma, siempre evolutiva, auto-institución de la sociedad. Así, no porque los gobiernos evadan sus propias responsabilidades como guardianes de la ley, las empresas e individuos quedan liberados de una violación a un derecho, especialmente tratándose de un derecho humano, anclado en el sentido común más elemental de la convivencia pacífica de los seres humanos”*

#### **VI.(h4) Delimitación de las responsabilidades de estados y empresas**

Sin duda hay un amplio consenso en que el Estado es la entidad responsable de proteger, hacer valer y promover los DDHH. La BLIHR adjudica acertadamente esta responsabilidad. Sin embargo, la iniciativa incurre en el

mismo error destacado antes con la ONU y los organismos empresariales, enfocándose en las responsabilidades de los estados e incurriendo en el gran olvido de hacer responsables a las empresas de sus propios actos.

La iniciativa argumenta que el principio primordial continúa siendo que los estados son responsables ante las víctimas de abusos a los DDHH y que las empresas son responsables ante los estados. Independientemente de que tal planteamiento cae como anillo al dedo a las empresas en un entorno en que los gobiernos actúan predominantemente como sus agentes, la responsabilidad de respetar los DDHH tiene que yacer en primera instancia en la persona legal, moral o física que los viola y posteriormente en los estados para respetarlos y hacerlos respetar. No porque un gobierno incumpla con sus obligaciones se libera a los violadores de su responsabilidad. Así como los gobiernos reciben su mandato de la sociedad y por tanto son responsables ante ésta, individuos y empresas son también responsables ante la institución de la sociedad; ergo: la autónoma, siempre evolutiva, imaginaria, auto-institución de la sociedad, como describía Castoriadis. Así, no porque los gobiernos evadan sus propias responsabilidades como guardianes de la ley, las empresas e individuos quedan liberados de una violación a un derecho, especialmente tratándose de un derecho humano, anclado en el sentido común más elemental de la convivencia pacífica de los seres humanos. Como los gobiernos han abjurado de sus obligaciones las empresas actúan con toda impunidad, protegidas por la franca omisión o por reglas que privilegian al mercado sobre las personas. Esto tiene que cambiar radicalmente ya que hablar de DDHH sin responsabilizar a las empresas de sus propios actos es regodearse en la retórica para que todo siga igual.

Es por ello positivo que a pesar de que la BLIHR no propone hacer responsables a las empresas de sus propios actos, sí se pregunta cómo deben actuar las empresas cuando no hay leyes que implementen responsabilidades y mecanismos básicos para hacer valer los DDHH. Así, una de sus consideraciones es que los mecanismos internos de rendición de cuentas de las empresas necesitan reflejar sus compromisos y obligaciones más amplias con los derechos humanos; por lo que los altos ejecutivos tienen que ser responsables ante sus accionistas y otras partes interesadas claves (página 17). El concepto evidencia la expectativa social de que las empresas tienen que ser responsables de sus propios actos, independientemente del entorno legal y político en el que actúen. Y los ejecutivos responsables ciertamente tendrán que pagar las consecuencias de sus actos cuando se trate de DDHH.

### VI.(h5) Normas de Derechos Humanos

La BLIHR hace una clasificación correcta de los DDHH partiendo de los instrumentos contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, conformada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cabe destacarse el apartado especial que la BLIHR hace de los derechos laborales debido a la fuerte relación que tienen con la esfera de influencia de las empresas. Es de encomiarse aún más la mención del tema de salarios dignos aunque cabe corregir que dicho derecho, enmarcado en la Declaración Universal de DDHH y en el Pacto de Derechos ECOSOC, está ausente de prácticamente todos los códigos voluntarios y no sólo de algunos, como lo estima la BLIHR. Con excepción de su inclusión de manera muy ambigua en los códigos de la Iniciativa del Comercio Ético, este derecho brilla por su ausencia, o es apenas insinuado oblicuamente sin abordarse de frente. La misma valoración de la BLIHR comenta la pobre definición del concepto y la ausencia de consenso sobre la metodología para calcularlo. Es por ello muy positivo que la BLIHR solicite mayor claridad sobre el tema y proponga explorar más este derecho.

Sin duda la misma BLIHR requiere claridad en algunos de sus propios enunciados. Así, mientras que en la matriz de DDHH incluida en su Guía se designa a la remuneración adecuada como el derecho #8<sup>93</sup>, al cual considera como un derecho “esperado” que se “pague como mínimo salarios dignos en todos los países en donde se opere”, llama la atención que la misma Guía describa al Derecho #7 del Pacto ECOSOC como el derecho a “salario mínimo e igual paga” (página 39) cuando en realidad el Derecho #7 se refiere a un “salario equitativo e igual por trabajo de igual valor”, y en el siguiente párrafo del mismo Derecho se refiera al derecho a “Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias”.<sup>94</sup>

### VI.(h6) Visión de las Normas

La puesta en práctica por las empresas de la iniciativa del borrador de las Normas es un buen esfuerzo de objetividad. Es evidente que las Normas carecen de suficiente profundidad, claridad y detalle, así como de procesos para su implementación, mas poco más podría esperarse de un primer esfuerzo por enmarcar las responsabilidades de las empresas respecto a los derechos humanos. El equipo que desarrolló al borrador pretendía su adopción como documento inicial para su desarrollo posterior en la Comisión, con la participación de todos los actores, y no pretendía articular todos los conceptos, elementos y variables en un primer ejercicio. No obstante, el mero hecho de poner en práctica las Normas dentro de la BLIHR envió un mensaje de objetividad y de credibilidad sobre la validez de las Normas como un primer marco de referencia, aunque sea de manera opcional.

### VI.(h7) Visión de los procesos

Nos encontramos en una etapa inicial en el debate por un marco normativo de los DDHH en las empresas y lejos del arribo a un consenso, por lo que, evidentemente, como lo expresa la iniciativa, estamos muy lejos de llegar a consensos sobre los procesos para su implementación. Es primero necesario establecer la precedencia de cualquier derecho humano sobre el mercado y después, dentro de ese contexto, delimitar claramente las responsabilidades de las empresas y los gobiernos antes de formular procesos de aplicación, vigilancia, reportaje y auditoría.

Aunque dado el sesgo evidente de los organismos de la ONU a favor del mercado, la oposición de la BLIHR al monitoreo de empresa por parte de organismos de la ONU se antoja por demás prematura. La iniciativa sí favorece en cambio el desarrollo de sistemas internos. De este modo, se propone la inclusión de procesos de medición de riesgo, impacto, y ejecución de monitoreos, auditorías y reportes dentro de las mejores prácticas de las empresas; mas no hay mención de la necesidad de que se hagan estudios de impacto, monitoreos, verificaciones y certificaciones gestionadas de forma absolutamente independientes. Todas sus referencias al respecto son en relación a sistemas desarrollados por las empresas o sesgados a favor de las empresas, como el caso del Modelo de Desempeño del Pacto Mundial. De hecho, uno de los fines de la “Guía para integrar los DDHH a la gestión empresarial” es abordar estos procesos como parte de los componentes de la gestión empresarial de los DDHH (página 11). Dicha posición que excluye a la participación directa de las partes interesadas en la evaluación del desempeño de las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de respetar cabalmente a los DDHH en su ámbito de competencia es un craso error que vuelve a evidenciar la visión centrada en la preeminencia del mercado sobre la sociedad.

### VI.(h8) Democracia, sostenimiento y preeminencia en la determinación de criterios

Consistente con la vasta mayoría de los documentos revisados para este estudio, con la sola excepción de la evaluación del borrador de las Normas de Theodor Rathgeber, cubierta anteriormente, la mención de la democracia, como criterio fundamental en la valoración del tema de DDHH en las empresas, brilla por su ausencia en los documentos de la BLIHR. Con toda certeza no se menciona porque se toma por un hecho y se asume implícita. Sin embargo, es un grave error relegar a la democracia al olvido. Al hacerlo así, la BLIHR otorga automáticamente preeminencia al mercado en el desarrollo de sus postulados.

*“no se considera que el diálogo deba darse de manera preponderante con los diferentes sectores de la sociedad*

*civil que se consideren partes interesadas, especialmente cuando la misma BLIHR reconoce que muchos gobiernos no son capaces o no están dispuestos a cumplir con sus responsabilidades”*

Es así como a lo largo del reporte #3 puede observarse cómo se presume que son las empresas quienes deben tener preeminencia sobre cómo abordar a los DDHH en el ámbito de los negocios. Es precisamente así como unilateralmente se opta por clasificar a los DDHH en las categorías de esenciales, esperados y deseables. ¿Quién decide que los DDHH deban clasificarse por niveles arbitrarios de importancia? ¿Quién decide qué DDHH corresponden a cada categoría, como se expresa en la matriz que aparece en la Guía? Evidentemente la nomenclatura y clasificación en sí de derechos específicos no son producto de un consenso con todas las partes interesadas. La BLIHR considera a estos criterios parte de las contribuciones voluntarias que las empresas pueden ofrecer sobre el tema en cuestión (página 6).

Seguramente se puede objetar que estos criterios representan a la visión del grupo de empresas de la BLIHR, mas es precisamente por el hecho de obviar a la democracia en su evaluación que no se piensa que es la institución de la sociedad civil quien tiene que tener la preeminencia en todo momento sobre la manera de abordar no sólo el tema de DDHH sino a las dimensiones económica, social y ambiental en toda su amplitud. Es por esta omisión que la BLIHR a menudo habla de contribuciones voluntarias a los DDHH cuando no se trata de voluntades sino de obligaciones concretas de respetar cabalmente los DDHH en toda su esfera de influencia. Por ello todo el análisis parte del contexto del mercado cuando debería efectuarse desde el contexto de la democracia, a pesar de que provenga de un grupo de empresas. Así, todo el análisis otorga preeminencia a la visión de la empresa. De ahí que, al hacer referencia a la necesidad de clarificar los conceptos y las normas mínimas universales de DDHH para las empresas, se exprese que éstas “deben de trabajar con los gobiernos en el desarrollo de estas normas esenciales” (reporte #3, página 12). No se considera que el diálogo deba darse de manera preponderante con los diferentes sectores de la sociedad civil que se consideren partes interesadas, especialmente cuando la misma BLIHR reconoce que muchos gobiernos no son capaces o no están dispuestos a cumplir con sus responsabilidades.

*“la democracia es condición, sine qua non, tanto de sociedades sostenibles como, en consecuencia, de entornos de negocios sostenibles”*

Así como no hay referencia alguna de democracia, la BLIHR sí otorga claramente importancia a la necesidad de crear entornos sostenibles de negocios, no sólo por considerar a los DDHH esenciales para el sostenimiento

de empresas sino también por ser columnas esenciales de las sociedades sostenibles; y de hecho considera que la actitud irresponsable de muchos gobiernos desalienta el enfoque sostenible de los negocios. Por ello, sería muy deseable que este grupo de empresas tome consciencia de que la democracia es condición, *sine qua non*, tanto de sociedades sostenibles como, en consecuencia, de entornos de negocios sostenibles.

*“el proyecto de la BLIHR está todavía muy lejos de responder adecuadamente a las demandas sociales. Suponiendo que éste tiene interés en conciliar posiciones, la única forma de acercarse a la posición social es desprendiéndose de su enfoque mercantilista y situando claramente a la sociedad por encima del mercado”*

## **VI.(i) Conclusiones en la valoración del proyecto de la BLIHR**

La labor y contribución de esta iniciativa es sin duda valiosa por el simple hecho de no insistir en que las responsabilidad de las empresas tiene que ser una cuestión exclusivamente voluntaria, así como por su disposición a probar el borrador de las Normas. Sin duda, su posición podría considerarse a grandes rasgos como un punto intermedio entre la posición puramente mercantilista de la mayoría de las empresas y la visión predominante en la sociedad civil a escala global. Es sin duda destacable por ese mero hecho.

A pesar de ello, la iniciativa persiste en situar a los intereses de los dueños del mercado y sus corporaciones sobre las personas y el planeta. Así es como la Guía para integrar a los DDHH en la empresa es un ejercicio unilateral que, pese a haberlo realizado en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de DDHH y con la Oficina del Pacto Mundial, no deja de ser una visión totalmente sesgada en favor del mercado. En efecto, mientras que en el reporte #3 se observa cierta consideración por aceptar a la sociedad civil como un interlocutor directo, la Guía proyecta la misma visión mercantil al plantearse como un instrumento a utilizarse por las empresas sin participación externa. No en balde ya hemos visto que los organismos de la ONU comparten claramente la visión de mercado y favorecen claramente sus demandas, especialmente el Pacto Mundial. Por ello, el proyecto de la BLIHR está todavía muy lejos de responder adecuadamente a las demandas sociales. Suponiendo que la BLIHR tiene interés en conciliar posiciones, la única forma de acercarse a la posición social es desprendiéndose de su enfoque mercantilista y situando claramente a la sociedad por encima del mercado. Los DDHH no pueden ser un factor de competencia ni se pueden condicionar a garantías de mercado, ni pueden ser abordados como elementos para agregar valor a la empresa. En sintonía con la visión de su gremio y de la ONU, la cuestión de los DDHH en la empresa sigue siendo una cuestión de que el Estado los

haga respetar al tiempo que se evade la verdadera cuestión de hacer a las empresas responsables de sus propios actos mediante leyes con dientes. Es por ello que debe destacarse la absoluta ausencia del contexto democrático en todas sus valoraciones.

Así las cosas, lo primero que la sociedad debe exigir del grupo de empresas de la BLIHR así como de todo su

gremio y de la ONU, es que hagan su labor desde el contexto de democracia real pues de otra forma difícilmente se podrán conciliar sus posiciones con las demandas de la sociedad civil, que exigen el alto a la violación sistemática, premeditada y perversa de los DDHH en el entorno de la empresa.

---

<sup>91</sup> Business Leaders Initiative on Human Rights. Report 3: Towards a 'Common Framework' on Business and Human Rights: Identifying Components. London, June 2006.

<sup>92</sup> BUSINESS LEADERS INITIATIVE ON HUMAN RIGHTS. A Guide for Integrating Human Rights into Business Management. May 2006.

<sup>93</sup> BUSINESS LEADERS INITIATIVE ON HUMAN RIGHTS. A Guide for Integrating Human Rights into Business Management. May 2006, página 14.

<sup>94</sup> Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre de 1966.







## VII. Hacia un nuevo paradigma de derechos humanos respecto a la responsabilidad social de las empresas

A la valoración de la labor de los principales actores en la controversia sobre las responsabilidades de las empresas en los derechos humanos corresponde una propuesta en función del análisis realizado que plantee un nuevo paradigma de DDHH como parte de un nuevo paradigma de real democracia anclado en la gente y el planeta. El nuevo paradigma de DDHH, enmarcado en una marco común universal específico, deberá de estar integrado a su vez en un marco común universal de sostenimiento, que garantice el buen desempeño –o la buena huella social y ambiental– de las empresas.

*“no hay posibilidad alguna de establecer un entorno de respeto cabal de los DDHH mientras no se le otorgue,*

*tanto en el derecho internacional como en la práctica, en las constituciones nacionales, total y absoluta preeminencia a la gente y al planeta”*

### VII.(a) Contexto

Es preciso insistir que no hay posibilidad alguna de establecer un entorno de respeto cabal de los DDHH mientras no se le otorgue, tanto en el derecho internacional como en la práctica, en las constituciones nacionales, total y absoluta preeminencia a la gente y al planeta. Pretender establecer un marco común universal de DDHH sin antes establecer sin ambages que el único fin del contrato social, en la real democracia, es procurar el bienestar social sostenible de todos los rangos de la sociedad y la protección y sostenimiento del planeta es engañarnos y limitarnos a aspavientos retóricos carentes de sustancia. Negarse a hacerlo es enviar un claro mensaje de que no hay disposición a enfrentar el problema de fondo, es oponerse a construir un entorno de real democracia, es aparentar un cambio para que todo siga igual.

*“además de ser incompatible con los DDHH el capitalismo es incompatible con la construcción de un entorno global sostenible”*

La naturaleza del capitalismo es absolutamente incompatible con el respeto a los derechos humanos porque su fin persigue maximizar la ganancia económica a costa de todos los otros participantes y del planeta. Su naturaleza voraz y depredadora, intrínsecamente inestable y carente de cualquier estructura moral, es tan insaciable que para perseguir su fin no se ha detenido, a lo largo de la historia, ante ninguna consideración, incluyendo las guerras, y ha logrado corromper a los supuestos gobiernos democráticos para situar al mercado, por encima de todo, como el fin último de las sociedades humanas.

Así mismo, además de ser incompatible con los DDHH el capitalismo es incompatible con la construcción de un entorno global sostenible. Su naturaleza exige el crecimiento irrestricto y permanente del consumo sin importar la depredación del planeta. Mas, a pesar de su obstinada evasión de la realidad, la misma degradación a grande escala del planeta nos está estrellando en el rostro la sombría realidad. Así, cada vez de manera más explícita y dramática, nuestro planeta nos demuestra fehacientemente que el capitalismo es inherentemente insostenible, por lo que está condenado irremediabilmente a sucumbir arrastrando a toda la humanidad y a la Madre Naturaleza.

Es por ello inútil hablar de DDHH sin antes construir un nuevo paradigma que someta al mercado a las estructuras democráticas reguladoras necesarias para que deje de ser un fin y se convierta estrictamente en un medio generador sostenible de bienestar. El mercado deberá ser sometido, estrictamente regulado, para que la riqueza generada deje de ser coto exclusivo de la elite global y se genere dentro del nuevo paradigma de democracia real para el sostenimiento de la gente y el planeta (paradigma DRSGP), generador de bienestar de manera equilibrada. Condición *sine qua non* de este paradigma es eliminar los patrones culturales tradicionales del capitalismo, como el consumismo, individualismo, enajenación y hedonismo exacerbados, con el fin de que la humanidad construya un entorno global sostenible a largo plazo, anclado en la real democracia, para el goce de la generaciones futuras.

Negarse al cambio radical esbozado arriba, construyendo el paradigma DRSGP, es manifestar los peores instintos humanos y pretender engañar a la humanidad. No estoy hablando de utopías ni de Apocalipsis sino de realidades fehacientes excepto para quienes se nieguen a realizar un acto de honestidad consigo mismos reconociendo la verdad. El actual paradigma capitalista darwinista y perverso es absolutamente insostenible e incompatible

con la democracia real y, por consiguiente, con los DDHH, y nos llevará a todos sin excepción a un sombrío fin en un plazo no muy distante.

## **VII.(b) Las dos premisas infranqueables de los DDHH**

El nuevo paradigma necesario para el pleno respeto de los DDHH contiene dos premisas infranqueables, premisas *sine qua non* de los DDHH: real democracia y real sostenimiento.

*“se trata, como en la antigua ágora griega, de establecer un entorno que realmente concilie los intereses públicos y privados, siempre con el bien común –el bienestar de la gente y el planeta– con preeminencia sobre el bien individual y privado. Se trata de establecer vasos comunicantes permanentes entre comunidades y gobiernos a todos los niveles, para que estos últimos realmente manden obedeciendo la voluntad popular.”*

### **VII.(b1) Real democracia**

Un entorno de pleno respeto de los DDHH requiere forzosamente de un entorno de real democracia. No se trata de democracia del pueblo, no se trata de social democracia, no se trata de ninguna pseudo-democracia que condona la explotación sistemática de la humanidad por los dueños del sistema capitalista. Se trata de un entorno en el que se ejerza la participación sistemática de la sociedad en toda la cosa pública, de tal forma que todas las decisiones de gobierno significativas sean consensuadas directamente por la ciudadanía y no sólo aprobadas por las distintas ramas de gobierno. Este gobierno de consensos deberá incluir de manera preponderante la ratificación periódica, en periodos cortos, de los puestos de elección popular en todos los niveles de gobierno, mediante referéndums, con el fin de que los gobernantes, como servidores públicos, se sientan realmente responsables antes sus gobernados.

Así las cosas, se trata de que las propuestas e iniciativas surjan principalmente dentro del tejido social hacia las ramas de gobierno. Se trata, como en la antigua ágora griega, de establecer un entorno que realmente concilie los intereses públicos y privados, siempre con el bien común –el bienestar de la gente y el planeta– con preeminencia sobre el bien individual y privado. Se trata de establecer vasos comunicantes permanentes entre comunidades y gobiernos a todos los niveles, para que estos últimos realmente manden obedeciendo la voluntad popular.

En consecuencia, se trata de que la aprobación de las decisiones trascendentes de la cosa pública (leyes, tratados comerciales, presupuestos, política económica, social, ambiental, exterior, de seguridad, etcétera) se realicen a través de consultas ciudadanas mediante referéndums. Mas estos referéndums o plebiscitos no

deberán conducirse como campañas de propaganda política, carentes de objetividad y pletóricas de manipulación, en las que generalmente ganan los intereses con mayor poder de manipulación. Las consultas deberán realizarse simplemente presentando las opciones de manera objetiva y sin campañas en favor de ellas. Se trata obviamente de que las competencias electorales sean reguladas de la misma forma. Así, en lugar de hacer propaganda, se requiere presentar propuestas de gobierno concretas y objetivas. Se trata de proscribir toda propaganda y todo financiamiento privado de los esfuerzos de los candidatos para dar a conocer sus programas de gobierno.

*“se trata, finalmente, de establecer un “campo parejo de práctica democrática” capaz de garantizar el pleno goce de los DDHH de todos los miembros de la sociedad”*

Se trata de evitar que los poderes fácticos inclinen la balanza a su favor, proscribiendo así el mercantilismo corruptor de la política. Se trata de expulsar el poder corrosivo del capital y el interés privado de la cosa pública. Se trata, finalmente, de establecer un “campo parejo de práctica democrática” capaz de garantizar el pleno goce de los DDHH de todos los miembros de la sociedad.

Sin una democracia, directa, plena y participativa será imposible dar clara preeminencia a la gente y el planeta, estableciendo un entorno que garantice el pleno goce de los DDHH. Es muy fácil esbozar un cambio paradigmático, mas pretender hacer valer a los DDHH en el ámbito del actual paradigma mercadocrático es rayar en el ilusionismo y la prevaricación. Por ello, comprometerse a construir gradualmente un entorno de verdadera democracia es una premisa infranqueable para ir en pos de un entorno de goce de los DDHH.

*“tendremos que dejar de ser sociedades de consumo por antonomasia para convertirnos en sociedades ancladas en la cultura del verdadero sostenimiento de la gente y el planeta. Tendremos que pasar del consumo irracional al racional y sostenible –reduciéndose en el Norte y aumentando en el Sur– para dejar una huella de consumo global inferior”*

## **VII.(b2) Real sostenimiento holístico**

Siendo depredadora la naturaleza del capitalismo, el pleno goce de los DDHH requiere de la construcción de un entorno de real sostenimiento de manera holística en todos los aspectos de la vida humana y del planeta. Esta es la otra premisa infranqueable para el goce de los DDHH. Así, por ejemplo, para el pleno goce del derecho humano a una vida económicamente digna, la vara para las empresas tendrá que ser elevada significativamente en las zonas de explotación laboral sistemática; no sólo para garantizar a sus empleados y a los de sus cadenas de

abastos una existencia por encima de la línea de pobreza, sino para garantizar términos equitativos laborales y de comercio que provean una vida digna equivalente a todas las partes interesadas en la actividad de las empresas, tanto en el Norte como en el Sur. Mas esta calidad de vida digna deberá estar enmarcada por indicadores de consumo y comodidad sostenibles holísticamente. Es decir, que dicha calidad de vida tome en cuenta a todos los factores en las dimensiones económica, social y ambiental, de tal forma que se arribe a un sostenimiento basado en el equilibrio de todos los recursos naturales y de las especies, que permita la recuperación sostenida de las fuentes de energía renovables y de los recursos vitales para la vida, como el agua, a los que se pretende privatizar.

Como comentario al inicio de este estudio, esto implica desarrollar un entorno equilibrado y con futuro a largo plazo en el consumo de todas las fuentes de energía, privilegiando las menos contaminantes. Así las cosas, tendremos que modificar de raíz nuestros hábitos de consumo. Tendremos que dejar de ser sociedades de consumo por antonomasia para convertirnos en sociedades ancladas en la cultura del verdadero sostenimiento de la gente y el planeta. Tendremos que pasar del consumo irracional al racional y sostenible –reduciéndose en el Norte y aumentando en el Sur– para dejar una huella de consumo global inferior. Esto facultará a la gente no a consumir equitativamente más al nivel insostenible actual sino a desarrollar sus capacidades para contribuir a edificar comunidades dignas con niveles de consumo en un punto de equilibrio que proteja al medio ambiente de forma sostenible a largo plazo. En lugar de una cultura de competencia e individualismo exacerbado nos trasladaremos a una cultura donde nuestro centro vital de integración y pertenencia será la comunidad digna y sostenible, de la que obtenemos niveles dignos y adecuados de bienestar individual al tiempo que contribuimos a sostenerla a largo plazo.

De esta forma, el límite de los derechos humanos – porque el equilibrio impone límites– deberá ser el sostenimiento real a largo plazo, el consumo racional y equilibrado de los recursos, dentro de una nueva cultura, para las empresas y para todo órgano social. Así las cosas, en el nuevo paradigma DRSGP, el fin de las empresas tendrá que ser obligadamente modificado, como abordaré más adelante.

*“el compendio de DDHH a ser reconocido y respetado por las empresas debe comprender a todos los DDHH contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y no sólo los que sufren mayor impacto”*



## VII.(c) Derechos Humanos y sus conceptos en el ámbito de las empresas

Los DDHH han sido identificados y enunciados desde hace más de medio siglo mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948. Posteriormente, se establecieron pactos y convenios más concretos referentes a campos específicos de la vida humana, los cuales emanan en gran medida de la Declaración de 1948. Como sabemos, muchos no han sido incorporados en convenios y, aún en los casos que sí, no todos los estados los han incorporado en sus legislaciones. Mas el hecho que muchos de ellos no hayan sido integrados a las constituciones nacionales, debido a la *real politique*, no les retira su plena vigencia moral.

Deberá reconocerse que es tan permeable y penetrante el impacto de la actividad empresarial en la vida de las sociedades de hoy en día que prácticamente todos los DDHH se ven afectados por dicha actividad. Sin duda, derechos como los laborales sufren un impacto permanente y sistemático por la relación directa que tienen con la actividad de las empresas, mientras que, por ejemplo, los derechos que protegen contra crímenes de lesa humanidad, como el caso de la tortura, padecen un impacto negativo esporádico y no sistemático. No obstante, el compendio de DDHH a ser reconocido y respetado por las empresas debe comprender a todos los DDHH contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y no sólo los que sufren mayor impacto. Si son reconocidos como derechos humanos, todos los miembros de la sociedad, incluyendo a las empresas, estamos obligados a respetarlos. Como hemos visto, esta Carta está conformada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin lugar a ninguna duda, los derechos laborales, enarbolados parcialmente a nivel internacional en los Convenios de la OIT experimentan la mayor incidencia de impacto en la actividad empresarial. No obstante, todos los DDHH deberán conformar el marco normativo de DDHH en la empresa y éste a su vez deberá incorporarse al marco normativo común universal más amplio que regule el desempeño o huella de las empresas en las dimensiones social, económica y

ambiental en el contexto de sostenimiento a largo plazo y de real democracia.

*“la nueva razón de ser de las empresas deberá ser generar bienestar social de manera sostenible”*

### VII.(c1) Fin sostenible de la empresa – un nuevo concepto

Construir el nuevo paradigma DRSGP requiere forzosamente redefinir conceptualmente el fin de las empresas para hacerlo congruente con un entorno de real democracia y convertir al mercado en uno de varios vehículos para generar el nivel adecuado de bienestar social sostenible. Esto es poner a la gente y al planeta por encima del mercado. De esta forma, la nueva razón de ser de las empresas deberá ser generar bienestar social de manera sostenible. El valor del accionista, como fin único de las empresas, tendrá que ser desterrado por su incongruencia absoluta con el bien común y por su probada capacidad para generar niveles cada vez mayores de desigualdad, exclusión, pobreza y depredación del planeta, absolutamente intolerables en la real democracia. El pleno respeto de los DDHH y el auténtico sostenimiento requieren de un equilibrio entre las responsabilidades financieras y sociales de la empresa. Como órganos sociales, las empresas no pueden continuar negando su inherente responsabilidad social por el impacto de su actividad.

Si bien no dudo que habrá muchas personas que consideren estos postulados extravagantes debido al marasmo con que viven en la lógica capitalista, cada vez hay mayores voces que plantean una nueva naturaleza para las empresas. Como he descrito ya, el investigador Theodor Rathgeber hace notar la necesidad de un sistema regulador de las empresas coherente, que asegure un mínimo de procedimientos democráticos, transparentes y participativos. Y apunta a la idea de que la práctica empresarial sea humanitaria y democrática, en lugar de autocrática, donde la toma de decisiones sea totalmente participativa entre todas las partes interesadas.<sup>95</sup> Otros argumentos provenientes del corazón del capitalismo consideran que es necesario redefinir el fin de los negocios con el propósito de trasladar el fin social de la periferia al núcleo de la cultura empresarial. Para ello, este argumento ha desarrollado seis principios a seguir para el rediseño corporativo:<sup>96</sup>

- ✓ El fin de la empresa es someter al interés privado para servir al interés público.
- ✓ Las empresas deberán distribuir su riqueza equitativamente entre aquellos que contribuyan a crearla.
- ✓ Las empresas deberán percibir rendimientos justos para sus accionistas, mas no a costa de los intereses legítimos de otras partes interesadas.
- ✓ Las empresas deberán ser gobernadas de manera participativa, transparente, ética y rindiendo cuentas.
- ✓ Las empresas deberán operar de forma sostenible, satisfaciendo las necesidades de la generación actual sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias.
- ✓ Las empresas no deberán infringir los derechos de personas naturales a gobernarse a sí mismas, ni infringir los otros derechos humanos universales.



Ahondando sobre el tema, el Instituto Tellus y Corporation 20/20 acaban de publicar un ensayo en el que exploran diferentes rutas para rediseñar el fin de las empresas describiendo los papeles que las diferentes partes interesadas pueden adoptar hacia ese fin.<sup>97</sup>

Otro cúmulo de ideas afines lo representa la Iniciativa de la Gran Transición, la cual propone otro nuevo paradigma alejado de la globalización neoliberal y centrado en la gente y el planeta.<sup>98</sup> Sucede lo mismo con las valoraciones de los investigadores franceses Serge La Touche<sup>99</sup> y Jean Marie Haribey<sup>100</sup>, quienes abiertamente cuestionan el concepto actual de desarrollo, por insostenible e injusto, y argumentan un paradigma en función del uso racional y sostenible de los recursos, y de la redistribución eficiente de la riqueza generada sin necesidad de un mayor crecimiento anclado en mayor consumo per sé. Esto es sólo un microcosmos de la amplia y creciente percepción social que confluye en la crasa inviabilidad del actual sistema, por insostenible y antidemocrático. Por ello, a pesar del incesante golpeteo de la propaganda mercantilista intentando convencer sobre las bondades de un sistema infrahumano, la verdad está cayendo por su propio peso. No en balde, la movilización social *altermundista* en todos los continentes y, preponderantemente en algunos países sudamericanos, adquiere cada vez mayor presencia. Son decenas de millones de ciudadanos de muchos países del mundo, en una tendencia creciente, quienes se movilizan y organizan de variadas formas exigiendo un mundo sostenible opuesto al dogma capitalista.

*“en lugar de buscar maximizar ganancias con ánimo depredador, a costa de todo y de todos, las empresas tendrán la obligación de encontrar un equilibrio entre su responsabilidad de respetar las reglas específicas de DDHH y sostenimiento y la responsabilidad ante sus inversionistas, para cumplir con su nuevo fin, que es contribuir a generar bienestar holísticamente”*

Es por ello condición indeclinable, para la construcción del nuevo paradigma DRSGP, la redefinición radical del fin de las empresas. Así, la obligación estricta de respetar los DDHH tendrá que convertirse en parte integral de la naturaleza de los negocios. Inversionistas y empresas, por más que sigan gozando de su derecho a la propiedad privada, no podrán anteponer el interés privado al bienestar social, ergo el interés público. Así las cosas, su derecho a generar utilidades deberá de ser atemperado por su obligación con el respeto a los DDHH y con su obligación de generar sostenimiento holístico. En lugar de buscar maximizar ganancias con ánimo depredador, a costa de todo y de todos, las empresas tendrán la obligación de encontrar un equilibrio entre su responsabilidad de respetar las reglas específicas de DDHH y sostenimiento y la responsabilidad ante sus inversionistas, para cumplir con su nuevo fin, que es

contribuir a generar bienestar holísticamente. Además, el bien común, la gente y el planeta siempre deberán tener precedencia sobre la ganancia en sus decisiones. Nuevamente, el fin de las empresas ya no será la reproducción y acumulación de capital, sino fungir como vehículos que contribuyan a generar un nivel sostenible de bienestar para la sociedad mediante los bienes, servicios e ingresos que generen.

## VII(c2) Conceptos de DDHH en el nuevo concepto de la empresa

Como parte esencial de la nueva naturaleza de las empresas, el respeto estricto a los DDHH tendrá que ser una obligación no negociable. Cualquier actividad humana considerada un derecho humano tiene que ser respetado obligatoriamente o no es un derecho. Por ello, las empresas tendrán que respetar todos y cada uno de los DDHH reconocidos en la Carta Internacional de DDHH. Es, por consiguiente, necesario que una parte medular de la construcción de la real democracia sea obligar a los gobiernos a respaldar a los DDHH con leyes claras y precisas dentro del marco legal nacional, a partir del marco normativo universal de DDHH, como parte primordial del marco común universal regulador de la huella empresarial.

♦ **Responsabilidad de las empresas.** Es responsabilidad de los gobiernos atender a las demandas de la sociedad civil y proteger debidamente los DDHH. De la misma forma, es obligación de las empresas respetar los DDHH y hacerse responsables de cómo sus propios actos influyen en el respeto a los DDHH de tal forma que garanticen su goce a lo largo de toda su esfera de influencia.

*“los gobiernos con la participación directa y democrática de la sociedad civil deberán definir la esfera de influencia para cada empresa y mantenerla actualizada periódicamente...toda persona ubicada en la esfera de influencia de una empresa es parte interesada en esa empresa. De este modo, las empresas no son quienes eligen a sus partes interesadas según su conveniencia, sino es la esfera de influencia la que debe definir quienes son todas las partes interesadas”*

♦ **Esfera de influencia.** La esfera de influencia queda delimitada por el confín hasta donde llega el impacto de todos los actos de una empresa, sin importar si tienen control directo o no. Esto es aún de mayor relevancia en la nueva naturaleza de la empresa, pues la obliga a asegurarse que todas las entidades con las que entabla cualquier tipo de relación en función de su actividad de negocios respeten los DDHH en su propia esfera de influencia al cumplir éstas últimas con la parte que les corresponda de su relación con la primera empresa. Como bien esgrime la BLIHR, a mayor tamaño de la empresa mayor será su esfera de

influencia; y deberá reconocerse de antemano que cada empresa tiene un esfera distinta a las demás. No obstante, las empresas no pueden ser jueces y parte para definir los límites de su propia esfera de influencia. Por ello, los gobiernos con la participación directa y democrática de la sociedad civil deberán definir la esfera de influencia para cada empresa y mantenerla actualizada periódicamente.

♦ **Complicidad.** Aunque este tema nunca dejará de estar provisto de cierta subjetividad y, por tanto, ser muy susceptible a controversias, en mi opinión encuentro dos escenarios claros de complicidad en las actividades de las empresas:

- **cuando la violación no hubiese ocurrido sin la actuación de la empresa:** una empresa es cómplice de cualquier violación a un DDHH violado por un tercero, sea entidad privada, pública o persona física, si participa en dicha violación por acción u omisión material o moral (tolerando o alentando), sabiendo que dicha violación no hubiese ocurrido si la empresa no hubiese entablado una relación con la parte violadora.
- **cuando se saca provecho de una violación que ya ocurre o va a ocurrir:** una empresa es cómplice de la violación de un DDHH violado por un tercero, sea entidad privada, pública o persona física, si la empresa se beneficia directa o indirectamente de la violación sin importar si dicha violación ya estuviese ocurriendo o de todos modos fuese a ocurrir, aún si la empresa originalmente no hubiese decidido beneficiarse de ella.

♦ **Partes interesadas.** En el nuevo paradigma DRSGP las empresas tienen partes interesadas directa o indirectamente. El impacto de las empresas, especialmente de las globales, puede generar trastornos que afectan muy significativamente la vida de las personas, aún a miles de kilómetros de su radio directo de acción. Así, toda persona que se vea afectada por la actividad de la empresa pertenece a la esfera de influencia de la empresa. Por tanto, toda persona ubicada en la esfera de influencia de una empresa es parte interesada en esa empresa. De este modo, las empresas no son quienes eligen a sus partes interesadas según su conveniencia, sino es la esfera de influencia la que debe definir quienes son todas las partes interesadas.

*“en un entorno de real democracia, es la sociedad civil quien libremente –objetivamente informada sin ninguna influencia propagandística– deberá definir todos los conceptos y elementos del marco regulador de los DDHH en el ámbito empresarial”*

### VII.(c3) Marco valorativo de los DDHH en el paradigma DRSGP

En el paradigma en pos del bienestar sostenible de la gente y el planeta no pueden haber DDHH de varios niveles. Como he argüido antes, todo derecho debe de ser respetado cabalmente o no es un derecho. Entre otros actores, la BLIHR y el RESG-DDHH Ruggie han abogado por derechos esenciales, esperados y deseables. En el nuevo paradigma, todos los DDHH contenidos en la Carta Internacional de DDHH tienen que ser cabalmente respetados al mismo nivel. Una cosa es que la brecha entre lo derechos que están hoy respaldados por el derecho internacional –principalmente los derechos políticos y civiles– y todos los demás sea muy grande, y otra muy distinta es asignar a unos DDHH el carácter obligatorio y a otros el carácter voluntario, aunque luego se les considere esenciales. Por ello, en la construcción del nuevo paradigma DRSGP es necesario exigir que todos los DDHH sean considerados como tales legalmente desde un principio. Así deberá establecerse un compromiso para que todos los derechos que no tienen el respaldo del derecho internacional lo tengan en un plazo corto razonable, de tal forma que progresivamente tengamos un marco legal que proteja a todos los DDHH contenidos en la Carta Internacional de DDHH de manera específica y precisa.

Esta propuesta considera iniciar el desarrollo del marco común universal de DDHH, partiendo directamente de la Carta Internacional de DDHH, incorporando a todos los DDHH en el marco común universal, ignorando premeditadamente cuales sufren mayor impacto. Otro posible escenario podría ser partir del borrador de la Normas de DDHH de la ONU, incorporando todos los demás derechos no incluidos en dicho borrador y que aparecen en la Carta Internacional de DDHH. Así, todos los DDHH tendrán carácter obligatorio para las empresas en toda su esfera de influencia. Subsecuentemente, será responsabilidad de la sociedad civil de cada país obligar a sus gobiernos a integrar a todos los DDHH del marco común en sus cartas magnas. Los únicos casos en donde puede existir carácter voluntario es en los que algunos denominan derechos deseables, que son meras prácticas empresariales que pueden coadyuvar a fortalecer aún más algunos derechos específicos y ser aprovechados para aumentar los valores intangibles de la empresa al fortalecer su imagen pública y entre los consumidores.

Uno de los rasgos más persistentes en el ámbito empresarial y entre aquellos que se inclinan por anteponer el mercado a la democracia y el bienestar sostenible es auto-regularse arrogándose el derecho a decidir, por ejemplo, qué es esencial y esperado o quienes son las partes interesadas relevantes. En un entorno de real democracia, es la sociedad civil quien libremente –objetivamente informada sin ninguna influencia propagandística– deberá definir todos los

conceptos y elementos del marco regulador de los DDHH en el ámbito empresarial. En ese sentido, tengo la certeza de que si en la sociedad civil logramos llevar este tema a un debate directo y democrático, para luego realizar consultas democráticas en cada país, la gran mayoría elegiremos que todos los derechos contenidos en la Carta Internacional de DDHH, derechos inalienables, sean respetados por todos los actores obligatoriamente, incluyendo de manera preponderante a gobiernos y empresas, al forzar a los gobiernos, mediante el voto, a incorporarlos en las cartas magnas nacionales y establecer un marco y mecanismos reguladores ad hoc.

*“en el Sur, los salarios de cuasi-esclavitud, el moderno trabajo esclavo de servidumbre, aunque no esté específicamente tipificado como un crimen de lesa humanidad, se ha vuelto la norma”*

### **VII.(d) Derecho a un salario digno – el DDHH de mayor impacto en el ámbito de la empresa**

Sería deseable que fuese una pérdida de tiempo argumentar en favor del salario digno como el derecho de mayor importancia fundamental en la esfera de la empresa, por parecer enfáticamente obvio y del más primario sentido común. Desafortunadamente, es menester insistir en ello cuantas veces sea necesario debido a la muy consciente, premeditada y perversa negativa por parte de las empresas y de la vasta mayoría de los gobiernos a reconocerlo.

#### **VII.(d1) Por el fin del trabajo esclavo**

En el sistema capitalista, los dueños de los medios de producción siempre se han adjudicado el derecho a retener la mayor parte de la plusvalía del factor trabajo. La explotación humana en la economía de mercado no es una alucinación de algunos locos sino una constante insistentemente evidente a lo largo de la historia. Hoy en día, esa explotación puede constatarse a diario con sólo pararse en la salida de una fábrica en el Sur y observar las condiciones físicas deplorables de los trabajadores; y luego ir a las favelas, villas miseria, ciudades perdidas, chabolas y otros nombres descriptivos donde moran, para ver las condiciones de hacinamiento y miseria en las que sobreviven decenas de millones de seres humanos. Estas condiciones han sido denunciadas a través de la historia por una diversidad de autores literarios y académicos, especialmente en el corazón de capitalismo. Dickens, Owen, Stuart Mill en la revolución industrial inglesa, Galbraith, Emmanuel y Hoogvelt en el siglo XX, entre muchos otros, han considerado a la explotación humana –mediante la participación otorgada al factor trabajo en el ingreso generado– una consecuencia inherente al sistema de mercado.

Esta explotación es tan evidente y elemental que muchas veces se ha reconocido la necesidad de pagar salarios dignos como factor elemental para impulsar a una

economía. El fordismo percibía claramente la necesidad de poner dinero en los bolsillos de los trabajadores para disparar el consumo y crear mercado, al generar demanda agregada. Luego de las atroces épocas de la “edad dorada” y los “barones ladrones”, de los grandes trusts de finales del siglo XIX y de la Gran Depresión, los dueños del mercado en Estados Unidos prestaron importancia a la necesidad de mantener un equilibrio entre dividendos, precios y salarios. La Administración de Recuperación Nacional (NRA por sus siglas en inglés) en la época de F.D. Roosevelt, buscaba establecer códigos de negociación justa, incluyendo precios y salarios para cada sector industrial. Se pretendía garantizar participaciones justas para el capital y el trabajo. Se hablaba de eliminar del juego del mercado el derecho de cortar los precios a un grado que ya no se pudiese sostener el nivel de vida estadounidense. Se argumentaba que los precios deberían ser fijados para permitir al fabricante pagar un precio justo por sus materias primas, pagar salarios justos a sus trabajadores y pagar un dividendo justo por su inversión.<sup>101</sup>

Llevamos ahora ya más de tres décadas en el mundo entero padeciendo el dogma del paradigma económico de oferta. Ahora la única lógica es maximizar el valor del accionista, fijando los objetivos de las empresas cada tres meses en función de los dictados autocráticos de los inversionistas institucionales. Así, los salarios reales han caído sustancialmente tanto en el Norte como en el Sur. En Estados Unidos las familias se han visto obligadas a trabajar muchas horas más a costa de su calidad de vida y, a pesar de ello, la desigualdad ha crecido, como hemos visto en el análisis del Economic Policy Institute. En el Sur, los salarios de cuasi-esclavitud, el moderno trabajo esclavo de servidumbre, aunque no esté específicamente tipificado como un crimen de lesa humanidad, se ha vuelto la norma. En México, sardónicamente llamado *país emergente*, los salarios reales manufactureros se han desplomado a la mitad en el lapso de treinta años.<sup>102</sup> Esta tendencia ocurre a lo largo de todos los países del Sur. Es una lacra sistémica del capitalismo que se apropia de la participación que legítimamente corresponde al factor trabajo. Se trata de un robo no tipificado legalmente que constituye un nítido acto de apropiación de lo ajeno desde el ángulo moral. Sucede en todo el mundo, mas en el Sur esa es la condición esencial exigida para que las empresas globales decidan invertir o hacer negocios en estos países. Es imperativo eliminar el trabajo esclavo de la faz de la tierra.

*“este derecho está claramente expresado en la Declaración Universal de DDHH de 1948 y de forma similar en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966”*

## VII.(d2) El salario digno como derecho humano

Este robo que se apropia de lo ajeno impide directa y activamente del goce del derecho humano a gozar de una calidad de vida acorde con la dignidad humana. Este derecho está claramente expresado en la Declaración Universal de DDHH de 1948 y de forma similar en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. El artículo 23 de la Declaración Universal dice:<sup>103</sup>

- ✓ *Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.*
- ✓ *Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.*
- ✓ *Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.*
- ✓ *Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.*

El primer punto deja a la libre interpretación lo que pueden ser condiciones equitativas y satisfactorias y de trabajo, mas el tercer punto claramente establece que las remuneraciones equitativas y satisfactorias tienen que asegurar al trabajador y su familia una calidad de vida acorde con la dignidad humana, incluyendo protecciones sociales adicionales para garantizar esa calidad de vida.

El Pacto Internacional de Derechos ECOSOC establece en su artículo 7, entre otros puntos, lo siguiente:<sup>104</sup>

*Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:*

- a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:*
  - i) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;*
  - ii) condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;*

*“como no hay un Convenio que enarbole el derecho a un salario digno, el convenio 100 sólo protege a las mujeres de que no se les explote más que a los hombres. El Convenio 100 es un anacronismo absoluto porque no*

*aborda el tema de la explotación laboral en el contexto global que se vive hoy en día y evade enunciarlo explícitamente en un contexto de salarios dignos”*

## VII.(d3) Evasión institucional del derecho a un salario digno

El Pacto ECOSOC es menos específico que la Declaración Universal, pero no deja dudas al calificar a las condiciones de vida requeridas como “dignas”. Es curioso, sin embargo, que un pacto dieciocho años posterior a la Declaración sea menos claro en sus enunciados. En la práctica, a pesar de su clara enunciación en la Declaración y en el Pacto, las remuneraciones dignas nunca han sido trasladadas a un convenio laboral específico de la OIT, debido a la abierta falta de voluntad política de los gobiernos tanto en el Norte como en el Sur. Consecuentemente, la OIT evade total y absolutamente el derecho a un salario digno. Como hemos expuesto, sólo el salario mínimo se aborda en el Convenio 131, que además no está clasificado ni como fundamental ni como prioritario, sino como uno más entre muchos convenios. Esto exhibe claramente la poca importancia que otorgan los estados al tema de las remuneraciones salariales.

En cuanto al concepto de condiciones equitativas y satisfactorias, sin discriminación alguna, de la Declaración y del Pacto, éste se refiere al derecho a un salario igual por trabajo igual entre hombres y mujeres. Este derecho sí está enarbolado en el Convenio 100 de la OIT, de 1951, sobre igualdad de remuneración, que además es un convenio clasificado como fundamental, uno de los ocho de mayor importancia. Sería una ironía, si no se tratase de una cuestión de espíritu humano miserable, que la lógica utilizada en este convenio sea en el contexto de las economías locales, cuando se nos ha impuesto un contexto de mercado global, con miles de empresas globales. El Convenio 100 de la OIT supone acabar con la discriminación de género en las prácticas laborales. No obstante, de acuerdo a esta lógica de mercado doméstico, si los hombres están siendo explotados en un país dado, el Convenio 100 de la OIT pide igual trato para las mujeres. Por lo que si los hombres son explotados, las mujeres también podrán ser explotadas al mismo nivel, pero no más. Obviamente, el Convenio supone que los hombres están recibiendo un salario digno, mas esto sólo ocurre en las economías del Norte. Como no hay un Convenio que enarbole el derecho a un salario digno, el convenio 100 sólo protege a las mujeres de que no se les explote más que a los hombres. El Convenio 100 es un anacronismo absoluto porque no aborda el tema de la explotación laboral en el contexto global que se vive hoy en día y evade enunciarlo explícitamente en un contexto de salarios dignos.



Esta evasión premeditada del derecho a salarios dignos sucede en todos los gobiernos y organismos multilaterales. Incluso, como hemos visto, la norma ocho del borrador de las Normas hace una vaga alusión a remuneraciones adecuadas que también usa el contexto de “condiciones nacionales”. Así las cosas, si las condiciones son de explotación, éstas serán la norma. De la misma forma, la vasta mayoría de las herramientas voluntarias siguen exactamente el mismo derrotero, evadiendo el derecho a remuneraciones dignas y limitándose a referirse a los convenios de la OIT. Sólo la Iniciativa del Comercio Ético etiqueta a su código #5 como salario digno, pero vuelve a caer en el error de la ambigüedad y en hacer referencia a que se *cumplirán como mínimo la normativa legal nacional o la normativa industrial de referencia*.<sup>105</sup> Es por ello que llama la atención que la BLIHR al menos considere a los salarios dignos como un posible derecho esperado que debe explorarse más a fondo.

*“se debe establecer un sistema de participaciones laborales Norte-Sur aplicable tanto a hombres como mujeres, definido utilizando el mismo concepto de igual paga por igual trabajo de igual valor del Convenio 100 de la OIT, usando al Norte como el punto de referencia y no a los hombres en el contexto nacional”*

#### **VII.(d4) La propuesta LISDINYS hacia un salario digno<sup>106</sup>**

La propuesta de la iniciativa LISDINYS es primero establecer claramente como un derecho medular el derecho a un salario digno. Enseguida, este derecho debe ser establecido dentro del contexto de una economía global. Es decir, se debe establecer un sistema de participaciones laborales Norte-Sur aplicable tanto a hombres como mujeres, definido utilizando el mismo concepto de igual paga por igual trabajo de igual valor del Convenio 100 de la OIT, usando al Norte como el punto de referencia y no a los hombres en el contexto nacional. De este modo, los trabajadores del Sur deben de tener el derecho a percibir igual paga, por trabajo de igual valor en términos de salarios reales universales. El mecanismo que propone LISDINYS para determinar los salarios reales es utilizar las paridades de poder de compra (PPCs) que publica el Banco Mundial anualmente, aplicándolas para definir los salarios dignos de un país por trabajo equivalente. El otro dato de referencia es los salarios estadounidenses que publica anualmente el Departamento del Trabajo de ese país.

Así, si el salario por hora manufacturero en Estados Unidos en 2004 es de \$23 dólares y las PPCs de Argentina en ese año indican un costo de vida de 28 por ciento, el salario digno equivalente debe de ser de \$6,57 en promedio. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publica anualmente los salarios para todas las categorías manufactureras, agrícolas y mineras, por lo que las comparaciones pueden ser mucho más

específicas. En la práctica, la responsabilidad de una TNL es pagar igual salario real por igual trabajo de igual valor en términos de PPCs. De este modo, si una empresa abre operaciones en Argentina, deberá establecer sus salarios utilizando como parámetro los salarios que paga para puestos equivalentes en su país matriz. Si una TNL considera transferir, por ejemplo, un centro de atención al cliente de Omaha a la India o una operación de ensamble de Arizona a Costa Rica, los salarios que deberá pagar son los mismos salarios calculados en términos de poder adquisitivo utilizando las PPCs. Los salarios que paga en su país matriz deben de ser su cota de referencia en todo momento, asumiendo que paga salarios dignos a todos sus trabajadores en su país matriz.

Las PPCs no son un sistema exacto, por supuesto, pues tanto los precios como los salarios son dinámicos, por lo que las PPCs son cálculos aproximados de los costos de vida en función del comportamiento de los precios en un país, utilizando a Estados Unidos como parámetro de referencia.<sup>107</sup> No obstante, si las PPCs se utilizan profusamente para el análisis de importantes indicadores, como son el ingreso nacional bruto (INB) y el tipo de cambio, se pueden perfectamente utilizar para establecer los salarios dignos correspondientes, si obligamos a los gobiernos a tener la voluntad política. La brecha entre los salarios reales que se pagan actualmente en el Sur y los que deberían pagarse para ser salarios dignos equivalentes es tan enorme que las posibles discrepancias entre los estimado y lo real se vuelven una nimiedad.

*“el derecho a una remuneración digna es un derecho humano que debemos exigir con absoluta firmeza debido a su impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Debe dejarse claro a las empresas que es imposible pretender ser empresas responsables si no cumplen plenamente con el derecho al salario digno, aunque respeten todos los demás DDHH”*

✦ **Derecho progresivo en treinta años.** No obstante, precisamente porque la brecha es tan grande, este es un derecho en el que es necesario fijar una meta para que las empresas se comprometan a cerrar la brecha progresivamente, desde el primer año, hasta eliminar la brecha y cumplir cabalmente con el respeto a este derecho humano en el largo plazo. En el caso de LISDINYS se propone que las empresas se comprometan a cerrar la brecha en un periodo máximo de treinta años, con aumentos anuales desde el primer año. Es tan grande la brecha que, en el análisis de LISDINYS, en el caso de México, por ejemplo, tomará treinta años cerrar la brecha de los salarios manufactureros si se aumentan los salarios reales un promedio de 6,5 por ciento anualmente. En la práctica, considerando el dinamismo natural de las PPCs, el ritmo de homologación gradual de salarios a través de pequeños incrementos al salario real requiere de ajustes periódicos. Mas la brecha es tan enorme que es imposible

que el proceso gradual de homologación a través de PPCs no sea muy efectivo en alcanzar su meta en el tiempo máximo de treinta años.

El periodo de treinta años es una consideración mucho más política que técnica. El pago de salarios dignos se encuentra en la médula del cambio del paradigma de mercado al paradigma DRSGP. Considerando la naturaleza humana, es imposible avizorar un cambio paradigmático en un periodo corto. Sencillamente hay muchos intereses creados opuestos para lograr un cambio convenido por todos las naciones, especialmente aquellas que tienen más TNLs. Técnicamente, si una empresa global tienen operaciones en su país matriz –donde paga salarios dignos que nominalmente son diez o más veces mayores que los salarios de hambre que paga por el mismo trabajo en los países del Sur, en donde tiene operaciones similares– perfectamente podría entonces aumentar los salarios 500% en un sólo incremento, para homologarlos y convertirlos en salarios dignos. Si genera utilidades en su país matriz con salarios dignos del Norte, entonces perfectamente puede hacer lo mismo en el Sur, con salarios dignos del Sur, que de todos modos serán más bajos por un largo periodo. Mas la naturaleza humana no funciona así y no puede esperarse que una empresa, su Consejo, y los corredores de bolsa institucionales acuerden cerrar la brecha en un sólo paso. Un caso muy ilustrativo fue la reciente suspensión de Levi Strauss como miembro pleno de la Iniciativa del Comercio Ético, por negarse a adoptar el código #5 de su Código Base, referente a los salarios dignos.<sup>108</sup>

El derecho a una remuneración digna es un derecho humano que debemos exigir con absoluta firmeza debido a su impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Debe dejarse claro a las empresas que es imposible pretender ser empresas responsables si no cumplen plenamente con el derecho al salario digno, aunque respeten todos los demás DDHH. Es evidente que este derecho es evadido por los principales actores porque es un derecho que rompe de frente con el paradigma actual. Por ello, porque es intrínsecamente inalienable y porque tiene la mayor transcendencia –al establecer cómo debe acontecer la relación diaria entre trabajo y capital, la relación más cotidiana de todas y con las mayores implicaciones para ambas partes– este derecho tiene que ir por delante de todos los otros derechos en el ámbito de las empresas. Por ello, porque la sociedad civil se enfrenta aquí a la médula del capitalismo, este derecho tiene que lograrse de manera progresiva. Cambiar de paradigma es una meta para ofrecer a las generaciones futuras y completarlo tomará al menos una generación.

*“todos los mecanismos deberán de estar sustentados firmemente en el marco común universal de DDHH. Por ello mismo, los mecanismos de rendición de cuentas*

*deberán de ser también universales con el fin de que las empresas apliquen las mismas prácticas en todas partes, y sean evaluadas con los mismos criterios”*

## **VII.(e) Los mecanismos de rendición de cuentas**

En el nuevo paradigma de democracia real y sostenimiento de la gente y el planeta (DRSGP), tiene que haber un marco regulador de vigilancia, auditoría y certificación de la responsabilidad empresarial obligatorio. El nuevo contexto convierte al bienestar social en el fin de las empresas, en el carácter de éstas como agentes contribuyentes a la generación de bienestar. Así, las empresas estarán obligadas a rendir cuentas sobre la calidad de su huella social y ambiental. Esta responsabilidad deberá incorporar en primera línea a su desempeño en el respeto a los DDHH en su esfera de influencia. De este modo, las empresas deberán de ser monitoreadas periódicamente y auditadas una vez entregado su reporte anual de desempeño social y ambiental. Esto último con el fin de verificar la veracidad de su reporte y certificar o no, según los resultados de la auditoría. Todos los mecanismos deberán de estar sustentados firmemente en el marco común universal de DDHH. Por ello mismo, los mecanismos de rendición de cuentas deberán de ser también universales con el fin de que las empresas apliquen las mismas prácticas en todas partes, y sean evaluadas con los mismos criterios.

♦ **Sistema de contrapeso público-ciudadano.** El órgano responsable de gestionar el mecanismo de rendición de cuentas deberá de ser una entidad gubernamental. Partimos del supuesto de que ya hemos logrado obligar a los gobiernos a cumplir plenamente con sus responsabilidades y que hemos reemplazado al capitalismo con el nuevo paradigma DRSGP. En este nuevo paradigma, la participación directa de la sociedad civil en la cosa pública es ya un rasgo inherente al nuevo ámbito, participando a lo largo y ancho de toda la amplia gama de cuestiones públicas propias de la verdadera democracia. Así, la entidad encargada de medir la huella social y ambiental de las empresas deberá de incorporar, tanto en el nivel administrativo como en el operativo, a miembros de la sociedad civil, mediante mecanismos plenamente transparentes y previamente diseñados y aprobados conjuntamente con ésta última. Se trata de entidades híbridas pública-ciudadanas.

El propósito evidente es que la participación social en la cosa pública funja como contrapeso y garantía de la gestión de los servidores públicos, apegada al derecho y a la normativa establecida, participando directamente en la función en cuestión. A su vez, los mecanismos de transparencia en la selección de los miembros a integrarse en la función de la responsabilidad social y ambiental de las empresas deberán tener como meta garantizar la probidad en todo momento de los miembros seleccionados, asegurando que desempeñen su papel de

forma ética, independiente y comprometida con la responsabilidad adquirida ante la sociedad. Estos miembros deberán actuar de manera independiente al mando existente en la entidad de gobierno, rindiendo cuentas a uno o varios órganos de la sociedad civil organizada, los que democráticamente se definan como necesarios para establecer un sistema de contrapesos que garanticen la probidad de todo el proceso. Haciendo uso del cinismo podrá pensarse que al final siempre faltará alguien más que vigile a la última línea de vigilancia, conociendo la naturaleza humana; mas si somos capaces de establecer un entorno de real democracia, seremos capaces de establecer componentes de gestión que sean fieles a los objetivos del nuevo entorno, nunca perfectos mas si efectivos en impedir desviaciones.

#### ♦ **Valoración ex ante del impacto de nuevos proyectos.**

La valoración del impacto sobre los DDHH para todo nuevo proyecto de inversión deberá de ser previo a su ejecución. Dicha valoración deberá de ser realizada por todas las partes interesadas para dictaminar la aprobación o rechazo del proyecto y deberán de estar fuera del control e influencia de las empresas. En el nuevo paradigma DRSGP el marco normativo de los DDHH es común para todas las empresas y universal para todos los países. Aún si dentro de una generación siguen habiendo países que se nieguen a adoptar el marco común, las empresas seguirán siendo responsables de sus actos de manera holística y en todas partes. Cuando no haya nuevos proyectos involucrados, la valoración del desempeño para cada empresa la ejecutarán las entidades público-ciudadanas anualmente.

♦ **Reporte de desempeño.** Las empresas deberán reportar anualmente sobre su desempeño para contribuir al sostenimiento social y ambiental, conforme al marco normativo común universal, en el cual los DDHH deberán tener máxima prioridad. Dichos reportes deberán de incluir puntualmente todos los indicadores que forman parte del marco normativo y seguir un formato homogéneo con el fin de que las valoraciones sean uniformes, medibles y comparables globalmente de manera objetiva.

♦ **Monitoreo, verificación y certificación.** En el nuevo paradigma estas funciones cierran el proceso de cumplimiento de las normativas de sostenimiento. Todas ellas deberán ser gestionados por la entidad publico-ciudadana correspondiente –en conformidad con el marco común universal– utilizando tanto recursos internos como servicios especializados externos, siempre independientes y fuera del control de las empresas. La verificación deberá confirmar lo reportado por la empresa y valorar el grado en que se apega a las normas correspondientes. La valoración positiva o correctiva deberá ser consecuencia directa de los resultados. Todo aquello que no pueda confirmarse deberá corregirse por

la empresa dentro de un plazo razonable conforme lo establezca la propia normativa. La certificación de la empresa como organismo responsable deberá otorgarse sólo cuando cumpla cabalmente con toda la normativa requerida.

*“el poder de imponer penas que sean conmensurables con el daño incurrido es otro elemento básico sine qua non para construir un entorno de real sostenimiento y respeto a los DDHH en el ámbito empresarial”*

♦ **Penas correctivas.** La normativa, sustentada en el derecho, deberá contar con los recursos legales para aplicar penas a las empresas por violar la normativa. El poder de imponer penas que sean conmensurables con el daño incurrido es otro elemento básico sine qua non para construir un entorno de real sostenimiento y respeto a los DDHH en el ámbito empresarial. Dichas penas deberán establecerse de tal forma que provoquen que las empresas prefieran cumplir con las normativas al imponer costos mayores que el beneficio obtenido por su incumplimiento. Es imperativo desterrar todo instinto mercantilista imponiendo penas duras, incluyendo en primera línea la penalización de las personas físicas que tengan bajo control a las empresas. Estas penalizaciones no deben de ser sometidas a juicios sino deben de ser automáticas. Si una empresa viola una normativa plena y claramente establecida, deberá de hacerse acreedora a la pena concreta correspondiente, sin necesidad de emplazarla a un juicio. Las entidades de regulación deben de tener el poder de actuar directamente, materializando la pena sin que el dictamen pueda ser recurrido y sometido a juicio. En el nuevo paradigma, el interés privado y el mercado no están ya por encima de la gente y el planeta y la naturaleza de las empresas ya ha sido modificada para hacerla acorde con el nuevo paradigma. Por ello, en principio, la imposición de penas debería de ser esporádico.

## VII.(f) Realidad en el largo plazo

Un nuevo paradigma de real democracia y de sostenimiento de la gente y el planeta, como prerrequisito para el pleno goce de los DDHH, es una meta generacional que sólo podremos fijar de manera realista a lograrse en el largo plazo, tomándonos al menos una generación, o treinta años. En consecuencia, el sendero hacia ella tendrá que enfocarse desde ahora en la movilización social para su construcción, organizándonos para romper los diques impuestos por las clases políticas de la llamada democracia representativa, que actualmente mantienen a la esfera pública como coto privado de caza.

♦ **Demandas democráticas de primera generación.** Para la construcción del nuevo paradigma, el primer paso es enfocarnos en establecer demandas democráticas de primera generación, sin las cuales no tendremos

posibilidad alguna de iniciar ningún cambio significativo ni en los DDHH ni en ningún otro tema. Entre las que considero de mayor trascendencia se encuentran las siguientes:

• **Consultas públicas.** La primera debe de ser eliminar el virtual monopolio de decisión de los gobiernos. Así, las esporádicas consultas públicas de hoy en día, deberán convertirse en una práctica cotidiana de la democracia real. Dichas consultas públicas deberán ser organizadas sin la manipulación de la propaganda para la aprobación de cada tema público de trascendencia y como forma de ejercer la transparencia en todo el espectro público sin ningún cortapisas. Así mismo, la sociedad civil debe tener pleno derecho a convocar a consulta pública cualquier tema con sólo reunir un mínimo razonable de adhesiones ciudadanas a la convocatoria. De esta forma, la normativa de los DDHH en la esfera de la empresa deberá llevarse a un debate pleno en la esfera pública y someterse a referéndum o plebiscito en todos los estados. Una normativa sin la plena participación ciudadana jamás podrá ser una normativa democrática.

• **Fin de los cabildeos corporativos.** Una estrategia muy utilizada por las empresas para controlar la agenda pública, además del financiamiento de campañas, es el cabildeo en los parlamentos para introducir propuestas que favorezcan a sus negocios y bloquear las que los perjudiquen reduciendo su capacidad competitiva. El cabildeo de las compañías de seguros estadounidenses en contra de cualquier plan para establecer un sistema de salud universal o el cabildeo de las empresas automotrices para reducir al máximo las propuestas para establecer normas que las obliguen a aumentar la oferta de vehículos de combustión híbrida y la eficiencia promedio en el uso de combustibles son casos emblemáticos del cabildeo corporativo. Las empresas invariablemente presionan en contra de bien social y a favor del valor de sus accionistas. Esto tiene que cambiar radicalmente. En el nuevo paradigma, las empresas, como vehículos generadores de bien social, no deberán tener acceso alguno, a través de sus ejércitos de cabilderos y de “expertos de opinión,” a los Miembros de los Parlamentos. Sólo los ciudadanos y sus comunidades deberán tener acceso pleno, incluyendo su participación directa en la toma de decisiones de la cosa pública como parte medular del nuevo paradigma DRSGP.

• **Transparencia sin cortapisas.** A pesar de los esfuerzos de la sociedad, la transparencia de la cosa pública ha avanzado muy limitadamente y muestra un largo camino por recorrer. Todos los días puede uno encontrar decenas de instancias en las que la ausencia de transparencia impide el debido proceso democrático. Aunque la transparencia en el debate del tema de DDHH en la empresa no está actualmente limitado y podemos decir que hay acceso para quien lo desee, hay muchas áreas en

las que la transparencia es muy pobre y que, de no abordarse, impedirán la construcción del nuevo paradigma. Una simple consulta en cualquier diario nos muestra fácilmente cuestiones concretas de importancia, con graves implicaciones para los DDHH, carentes de transparencia.

Así las cosas, un rápido vistazo a los diarios de hoy nos ofrece un claro ejemplo de la falta de transparencia y de la falta de aquiescencia ciudadana. Este es el caso de los gobiernos mexicano y estadounidense que acaban de anunciar el acuerdo para la llamada Iniciativa Mérida, un eufemismo para establecer un plan muy similar al Plan Colombia, en el que supuestamente se invertirán millardos de dólares en el combate al narcotráfico y la seguridad bilateral, en el que México recibirá todo tipo de asesoría técnica para combatir dichas cuestiones. En México se argumenta, utilizando como referencia al Plan Colombia, que se violará la soberanía y que hay muy poca transparencia en su manejo. Aunque el acuerdo será sometido a la aprobación de los congresos en ambos países, muchos de sus miembros se quejan de no haber sido consultados en la elaboración del plan.<sup>109</sup> Así las cosas, las ramas ejecutivas lanzan campañas para convencer a congresistas y ciudadanos de las bondades del acuerdo. Mas no hay la menor intención de someter a debate público y ciudadano este acuerdo entre cúpulas y mucho menos de someterlo a un plebiscito. La discreción y la falta de transparencia son muy evidentes. En la democracia real, dicho acuerdo será sencillamente imposible, porque las iniciativas surgirán principalmente de la ciudadanía y porque, en cualquier caso, deberán de ser sometidas al pleno escrutinio público, sin campañas propagandísticas, y al debido plebiscito.

• **Candidaturas independientes.** El derecho a la postulación de candidatos ciudadanos independientes, en los países en los que actualmente las leyes electorales los excluyan, privilegiando el monopolio de los partidos en el acceso a los puestos de elección popular.

• **Proscripción de fondos privados y propaganda en los procesos electorales.** Una democracia real requiere proscribir los fondos privados en los procesos electorales. Así mismo, es necesario transformar a las campañas electorales en procesos desprovistos de propaganda, aún con fondos públicos, y lo más cercanos a la presentación de propuestas de gobierno sometidas al escrutinio y discusión pública en un ámbito de nítida transparencia. Aunque algunos países, especialmente en Europa, prohíben el financiamiento privado de las campañas, en muchos más, incluyendo a Estados Unidos continúa siendo la norma. Esto tiene que erradicarse de la faz de la tierra porque es un caldo de cultivo de todo tipo de corrupción y de anulación del juego democrático. El caso de México en las elecciones pasadas exhibe un obscuro y claro secuestro de las elecciones en las que los



medios masivos jugaron un papel estratégico preponderante y en donde incluso han tenido el poder de cambiar la legislación al respecto a su conveniencia. Ha sido tan explícito el contubernio entre gobierno, entidad reguladora de las elecciones y medios para realizar unas elecciones fraudulentas, que la sociedad civil ha reaccionado construyendo una inmensa red de fuentes alternativas de información para exhibir la realidad sobre el proceso electoral y oponerse a lo que consideran un gobierno ilegítimo. Ni el financiamiento privado ni el público para la propaganda maniquea puede existir en el nuevo paradigma de real democracia. Las campañas deben limitarse a la puntual presentación y debate de propuestas de gobierno y nada más.

•**Poder de revocación.** De la misma forma, las sociedades deberán construir mecanismos que comprometan a los candidatos a cumplir puntualmente con sus ofertas con el fin de que se elimine la retórica y el engaño y las propuestas se conviertan en planes de gobierno realistas. Este mismo mecanismo deberá incluir el derecho a la revocación del mandato de todos los puestos de elección popular mediante consultas públicas que los confirmen o los revoquen en fechas periódicas dentro de sus periodos de gobierno.

Debo insistir en plantear como condición *sine qua non* para el cabal respeto de los derechos humanos en el ámbito de las empresas y fuera de él que la sociedad civil organizada nos movilizemos de inmediato para enfocarnos en la construcción de entornos de real democracia, como elemento medular del paradigma DRSGP. Como he expresado, esto nos llevará sin duda al menos una generación. De no lograrlo, todo el planteamiento que presento arriba evidentemente devendría en un imaginario plenamente utópico, y lo real sería un entorno infrahumano cada vez más insostenible y de autodestrucción.

<sup>95</sup> Theodor Rathgeber. UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations. Dialogue Globalization. OCCASIONAL PAPERS. N° 22. Friedrich-Ebert-Stiftung. Geneva April 2006. Geneva, página 12.

<sup>96</sup> Corporation 20/20. Principles of Corporate Redesign. <http://www.corporation2020.org/> November 2007.

<sup>97</sup> Marjorie Kelly y Allan White. Corporate Redesign. The Missing Business and Public Policy Issue of Our Time. Tellus Institute and Corporation 20/20, November 2007.

<sup>98</sup> Why a Great Transition? Great Transition Initiative: <http://www.gtinitiative.org/>. November 2007

<sup>99</sup> Ver Serge Latouche, Degrowth economics. Why less should be so much more?, Le Monde Diplomatique, noviembre 2004

<sup>100</sup> DO WE REALLY WANT DEVELOPMENT? Growth, the world's hard drug, Le Monde Diplomatique, agosto, 2004

<sup>101</sup> Robert B. Reich. Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life. Alfred A. Knopf. 2007. Página 26.

<sup>102</sup> La Alianza Global Jus Semper. Gráficas de brecha salarial para México frente a economías desarrolladas y "emergentes" seleccionadas, con datos salariales y PPC disponibles (1975-2004). LAGJS 2006.

<sup>103</sup> Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948

<sup>104</sup> Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre de 1966.

<sup>105</sup> Iniciativa del Comercio Ético. Código Base. 2007. <http://www.ethicaltrade.org/>

<sup>106</sup> La Alianza Global Jus Semper. La Iniciativa Salarios Dignos Norte y Sur (LISDINYS). Marzo 2006. ([www.jussemper.org/Inicio/Index\\_castellano.html](http://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html))

<sup>107</sup> La paridad de poder de compra refleja la cantidad en dólares que se requiere en un país en cuestión para tener el mismo poder de compra que tiene \$1 dólar EEUU en Estados Unidos; v.gr.: si el índice PPC en un país es 69, entonces se requieren \$0.69 dólares en ese país para comprar lo mismo que compra \$1 dólar en EEUU; el costo de vida es, por tanto, más bajo.

<sup>108</sup> ETI Statement. Suspension of Levi Strauss & Co. from ETI membership. 20 December 2006

<sup>109</sup> David Brooks. "Nuevo paradigma", dicen funcionarios de la Casa Blanca; "no se nos consultó": legisladores. Surgen en EU dudas sobre la efectividad de la Iniciativa Mérida. La Jornada, 24 de octubre de 2007.







## VIII. Implementación del Nuevo Paradigma de DDHH

La Implementación del nuevo paradigma se plantea para avanzar progresivamente a lo largo de una generación, definida en términos de treinta años, y completarla al final de ese periodo. Mediante la movilización social organizada en todo el mundo debemos demandar de inmediato que todos los DDHH contenidos en los tres Declaraciones y Pactos que conforman la Carta Internacional de DDHH pasen a integrar el Marco Común Universal de los DDHH en la Esfera de la Empresa. Es de vital importancia que el derecho a un salario digno sea agregado sin cortapisas por ser elemento de mayor impacto directo y de mayor trascendencia social en la relación entre seres humanos y empresas. Así mismo, será necesario asignar fechas para que algunos de estos derechos se vayan cumpliendo progresivamente hasta arribar al pleno goce de ellos en

una fecha determinada no mayor de treinta años, como es el caso de los salarios dignos.

En principio deben establecerse dos grupos de DDHH:

### ♦ *los de cumplimiento inmediato:*

- Todos los DDHH civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que ya forman parte de convenios. Este es el caso, por ejemplo, de todos los convenios de la OIT cuyo contenido aborden a un derecho humano específico. Deben incluirse todos los convenios y recomendaciones de la OIT que se refieran a un derecho humano y no sólo los Convenios Fundamentales, como muchos actores tienden a hacer (UE, empresas, Oficina del Alto Comisionado de la ONU, etcétera).
- Todos los derechos humanos que no han sido incorporados a ningún convenio, que sí están enunciados explícitamente en la Carta Internacional de DDHH y en donde las condiciones actuales no justifiquen su cumplimiento progresivo.



- Cualquier derecho humano sometido por la sociedad civil que no esté contemplado en la Carta Internacional de DDHH y en donde las condiciones actuales no justifiquen su cumplimiento progresivo.

#### ♦ **los de cumplimiento progresivo:**

- Derecho a un salario digno. El de mayor preponderancia sin lugar a dudas, aplicable tanto a los propios empleados de la empresa como a lo largo de toda su cadena de abastos global.
- Todos los derechos humanos que no han sido incorporados a ningún convenio, que sí están enunciados explícitamente en la Carta Internacional de DDHH y que requieren, por las condiciones actuales, de un cumplimiento progresivo.
- Cualquier derecho humano sometido por la sociedad civil que no esté contemplado en la Carta Internacional de DDHH y que requiere, por las condiciones actuales, de un cumplimiento progresivo.

*“la movilización social tiene que ser muy amplia, partiendo desde las bases comunitarias, informando, educando y creando conciencia para la movilización en diferentes papeles ciudadanos”*

### **VIII.(a) Rutas de implementación**

Enfrentar la muy poderosa oposición de las empresas y de la mayoría de los gobiernos y de sus organismos multilaterales a que la agenda de DDHH quede bajo control ciudadano, como parte de nuestra construcción del nuevo paradigma DRSGP, requerirá de muy fuertes convicciones, compromisos y persistencia en la movilización social a nivel mundial. Esto es imprescindible para lograr enmarcar a todos los DDHH dentro del derecho internacional y en las cartas magnas de los estados dentro de un marco común universal que regule el impacto que sufran en el ámbito de la empresa. La movilización social tiene que ser muy amplia, partiendo desde las bases comunitarias, informando, educando y creando conciencia para la movilización en diferentes papeles ciudadanos. Para este cometido existen dos vías de acción una lenta y otra con efectos mucho más rápidos:

*“es de vital importancia concentrar esfuerzos en cabildear para elevar el nivel de participación social mediante la consulta ciudadana”*

#### **VII.(a1) Vía lenta**

Esta es la esfera pública en la que la sociedad civil organizada debe abordar directamente a gobiernos y organismos multilaterales con el objeto de cabildear en favor del nuevo paradigma de DDHH. Este es un campo en el que la sociedad civil ya lleva mucho camino

recorrido y donde lentamente se va avanzando. El actual debate, la presión directa sobre la ONU, la Unión Europea y sobre algunos otros gobiernos es parte de esa labor que poco a poco va sumando pequeños puntos a favor. No obstante, es imprescindible aumentar la presión. Así, conforme se vaya creando mayor conciencia a nivel comunitario y más ciudadanos se sumen, es de vital importancia concentrar esfuerzos en cabildear para elevar el nivel de participación social mediante la consulta ciudadana. La sociedades civiles nacionales tenemos que movilizarnos para hacer de la figura del referéndum un instrumento ciudadano que pueda invocarse para cualquier asunto de relevancia en la cosa pública como los son plenamente los DDHH en el ámbito de las empresas.

Lograr este cometido constituye un pivote estratégico que puede catapultar la velocidad de avance en el establecimiento y defensa de los DDHH en el derecho internacional y de cada Estado. El campo del cabildeo público está minado por el terreno tan desigual de acción –dado el poder económico del capital sobre los gobiernos, que incluso alcanza a maniar el nivel de compromiso de muchas organizaciones sociales. No obstante, este es el campo de acción, el de la esfera pública, el del ágora griega, donde debemos de actuar para construir el paradigma de DRSGP. Así, aumentar la presión para aumentar el nivel de participación social en la cosa pública es la forma más efectiva de acelerar el ritmo de avance por esta vía del nuevo paradigma.

*“nada provocará mayor reacción de corporaciones y gobiernos a las demandas legítimas de sociedades supuestamente democráticas que la lógica del mercado cuando ésta golpea directamente en la línea de resultados de las empresas y, consecuentemente, en los inversionistas de los mercados financieros”*

#### **VII.(a2) Vía rápida**

Esta es la esfera privada de los mecanismos de mercado. Como parte del proceso para dar plena preeminencia a la gente y el planeta, sometiendo al mercado a la voluntad ciudadana, debemos utilizar sus mecanismos actuales para influir de manera efectiva y directa en la conducta empresarial y aún influir en los gobiernos aprovechando la misma lógica del mercado. En esta vía existen dos senderos que debemos recorrer:

♦ **El poder del consumidor.** Nada provocará mayor reacción de corporaciones y gobiernos a las demandas legítimas de sociedades supuestamente democráticas que la lógica del mercado cuando ésta golpea directamente en la línea de resultados de las empresas y, consecuentemente, en los inversionistas de los mercados financieros. Nuestro poder como consumidores puede hacerle a las empresas sumamente difícil rehusarse a cambiar sus prácticas. Para gradualmente construir el



paradigma DRSGP, el poder de los consumidores tiene que ejercerse desde el inicio para desafiar al actual sistema. Conforme las empresas luchan por ganarse la buena voluntad de los consumidores por sus prácticas empresariales, esperando convertirla en beneficios tangibles de mercado, el poder del consumidor puede hacer que el respeto pleno de los DDHH y volverse un negocio realmente sostenible sea una cuestión de supervivencia.

- **Boicots de consumo.** El papel del consumidor es fundamental en la construcción del nuevo paradigma.<sup>110</sup> Conforme la violación sistemática de los DDHH alcanza niveles significativos de consciencia entre los consumidores, nuestro poder y nuestras crecientes demandas de prácticas de respeto y sostenimiento se están convirtiendo en una fuerza con la que las empresas, les guste o no, tienen que lidiar. Un boicot de consumo puede tornarse en una verdadera pesadilla aún para las empresas más poderosas, como puede observarse en los testimonios que han dejado empresas como Wal-Mart, al intentar limpiar su imagen. Frente a la explotación humana, un boicot de consumo es la acción más pacífica y políticamente correcta que la sociedad puede adoptar para desafiar al sistema. Utilizar nuestra consciencia social en función de nuestros valores morales, para alinear nuestras conductas de consumo con nuestros valores, es la única contribución directa que podemos hacer para votar con nuestro poder de consumo en la dirección que queremos que adopten gobiernos y corporaciones. No hay manera mas efectiva de hacerlo.

- **Toma de consciencia.** En esta vía ya se da una creciente movilización ciudadana, desde el comercio justo hasta el boicot puntual, que está generando resultados concretos tangibles y bien documentados en favor de demandas que han logrado modificar la toma de decisiones en las empresas. Un caso muy reciente, es la decisión de Starbucks –una de las empresas que no se adhirieron al Pacto Mundial hasta que no quedaron blindadas por el acuerdo entre la ONU y la Asociación de Barras Estadounidense– de aceptar el registro de marca de los cafés producidos por los agricultores etíopes, luego de la movilización de poco más de cien mil consumidores en Norteamérica.<sup>111</sup> Así mismo, cada vez hay más encuestas que consistentemente muestran que el grado de inquietud por la responsabilidad social de las empresas entre los consumidores se está tornando muy significativa y sigue creciendo, especialmente entre las nuevas generaciones. Los consumidores tiene cada vez mayor consciencia sobre las acciones y omisiones de las empresas, y de su impacto en el sostenimiento de la gente y el planeta, y están desarrollando una nueva escala de valores en las decisiones de consumo. No

sólo se toma consciencia sobre las responsabilidades de los negocios sino también acerca de las propias responsabilidades como ciudadanos de las llamadas sociedades democráticas en un entorno globalizado. En los últimos siete años las encuestas dan cada vez mayor testimonio de este ascenso a un plano superior.<sup>112</sup> De este modo, la toma de consciencia va mucho más allá de movilizaciones específicas para presionar a una empresa, dirigiéndose al establecimiento de una nueva cultura de consumo socialmente responsable anclada en el sostenimiento de la gente y el planeta, con el respeto a los DDHH en primera línea.

- **Movilización organizada.** Esta es sin duda la ruta en la que todos los ciudadanos del mundo con un poco de poder adquisitivo y con consciencia podemos participar y esperar resultados concretos a una velocidad mucho mayor que por la vía pública. El valor máspreciado de una empresa de consumo es su marca y, ante un boicot de consumo, reacciona de inmediato pues el costo golpea a su línea de resultados de manera muy significativa con sólo movilizar a una pequeñísima porción de su mercado para votar en contra de ella con nuestro bolsillo. Es por eso que cada vez hay más organizaciones de consumidores, desde organizaciones en el plano global, hasta pequeñas organizaciones locales de base que abordan una amplia gama de cuestiones que incluyen desde el respeto a los DDHH y laborales a proyectos de comercio justo, entre otros. De esta forma, grandes organizaciones internacionales y nacionales, como Consumers International, con más de 220 organizaciones de consumidores en 115 países, y Co-op América, con más de 60 mil miembros en Estados Unidos, tienen integrada en su agenda a la responsabilidad social de las empresas y a los DDHH de manera preeminente.

- **Apalancamiento en el poder de consumo, desde el inicio, en pos de los DDHH.** Las movilizaciones de los consumidores para demandar a empresas concretas su disposición en favor de un marco universal de DDHH y para modificar sus actuales prácticas que violan directamente a los DDHH en su esfera de influencia puede arrojar resultados significativos. Esto es valido tanto para los cambios inmediatos en las operaciones de empresas concretas, modificando su cultura corporativa, como coadyuvando a un clima favorable a los DDHH en el terreno publico de gobiernos y organizaciones multilaterales. Mientras gobiernos y organismos multilaterales van cediendo muy lentamente a la presión popular, para establecer un marco universal de DDHH obligatorio en la esfera de las empresas, los consumidores podemos exigir acciones inmediatas a las empresas que modifiquen sus prácticas para incorporar plenamente el futuro marco universal, so pena de recibir el repudio como

consumidores si se niegan a hacerlo. Es por ello imprescindible la incorporación ciudadana a las organizaciones de consumo como parte de nuestra responsabilidad social individual.

♦ **El poder del accionista ético.** La otra vía que puede generar resultados en el corto plazo es la que siguen las organizaciones de inversionistas con consciencia social. Como he expuesto, al valorar las posiciones del grupo de inversionistas ICCR sobre el trabajo del RESG-DDHH, hay cada vez más grupos de inversionistas éticos que se preocupan por la forma en que la actividad de las empresas en las que invierten o consideran invertir impacta en los DDHH y el sostenimiento de las sociedades y el planeta. El concepto de inversiones socialmente responsables (ISR) ha crecido mucho en la última década. Una encuesta europea con una muestra de 300 inversionistas profesionales arrojó que una tercera parte de ellos ofrecen portafolios éticos de inversión a sus clientes y que otro 15 por ciento lo planeaban hacer. En cuanto a Estados Unidos, el crecimiento es similar y existen ya más de 200 fondos mutualistas de inversión ética. Tanto en Europa como en Estados Unidos el crecimiento de estos portafolios está creciendo a un ritmo más rápido que el resto de la industria.<sup>113</sup> Por supuesto, no existe uniformidad en los criterios para evaluar a las empresas y pueden variar desde sólo incluir el ámbito

ecológico hasta incluir toda la gama con especial énfasis en los DDHH, como es el caso de ICCR.

Lo cierto es que, al contrario de lo que se pronosticaba hace diez años, las inversiones responsables se han convertido en un segmento de inversión significativo que además ejerce una creciente presión en las prácticas empresariales en la dirección de prácticas realmente sostenibles. Esto está forzando a muchas empresas a tomar en cuenta sus demandas las cuales tienen cada vez mayor voz pues estos inversionistas, en los que incluso se encuentran muchas organizaciones sin ánimo de lucro, tienen pleno derecho a participar en las reuniones de accionistas. El poder que sus inversiones pueden tener sobre las prácticas empresariales, no obstante, ciertamente no se puede comparar con la presión que podemos ejercer los consumidores. Todo consumidor tiene poder de presión y casi todos los ciudadanos tenemos algún poder de consumo, mientras que, comparativamente, pocos son los que pueden invertir en los mercados financieros. A pesar de ello, este pequeñísimo segmento social está teniendo el poder de inversión suficiente para modificar las prácticas empresariales en el corto plazo. Es por ello un elemento más que coadyuva positivamente a establecer un marco obligatorio universal de responsabilidad social y ambiental en las empresas.

<sup>110</sup> Álvaro de Regil Castilla. El Poder del Consumidor en la Lógica del Mercado: Democracia real y directa en busca de la RSC. Ensayo Temático LISDINYS, Ensayo Temático LISDINYS. Diciembre de 2004.

<sup>111</sup> Oxfam Celebrates Win-Win Outcome for Ethiopian Coffee Farmers and Starbucks. 20 June 2007.

<sup>112</sup> Álvaro de Regil Castilla. ¿Qué tan Sostenible es Nuestro Latte? Una Evaluación de Tendencias y Normas en el Comercio Justo Desde la Perspectiva de un Nuevo Paradigma Realmente Sostenible Centrado en la Gente y el Planeta. Ensayo Temático LISDINYS. Mayo de 2007, p. 84.

<sup>113</sup> Business and Sustainable Investment. Sustainable Investment, 2007. [www.bsdglobal.com](http://www.bsdglobal.com)







## CONCLUSIONES

♦ **Paradigma infrahumano.** El actual paradigma capitalista darwinista, infrahumano y depredador, que enajena, manipula y degrada la condición humana, es intolerable para todos aquellos –la inmensa mayoría– que deseamos construir un porvenir digno y promisorio para la humanidad y nuestro planeta. Es intolerable porque este paradigma se sitúa en las antípodas de la esencia humana, porque viola y atenta directa y sistemáticamente contra nuestros derechos más elementales: a la vida, al trabajo, a la sensibilidad social, al sentido de pertenencia y de vida en armonía con nuestra comunidad, y a la solidaridad con todas las culturas y etnias de nuestro mundo. El poder del paradigma actual se ha logrado mediante la corrupción de las principales estructuras e instituciones sociales, carcomiendo a las estructuras de los estados y secuestrando a los principales pilares de la democracia.

♦ **Paradigma insostenible.** En el centro del sistema se encuentra la entronización del mercado, el encumbramiento del dinero como medio y fin a costa de la violación sistemática de los DDHH y de la creación de un entorno de miseria para la mayoría de la humanidad. Esto ha creado un entorno que no tiene la menor posibilidad de ser sostenible por su propia naturaleza intrínsecamente depredadora.

*“antes de poder aspirar a un entorno de respeto pleno de los DDHH en la empresa, es indispensable e impostergable primero construir un entorno de verdadera democracia”*

♦ **Paradigma holístico.** La única forma de revertir la situación actual es mediante un cambio radical, construyendo un nuevo paradigma plenamente comprometido con la construcción de un futuro promisorio para la humanidad y el planeta, anclándolo en las estructuras de la auténtica democracia, de equilibrios, mediante pesos y contrapesos efectivos, que sometan a nuestros más bajos instintos. Es por eso

menester tomar consciencia de que antes de poder aspirar a un entorno de respeto pleno de los DDHH en la empresa, es indispensable e impostergradable primero construir un entorno de verdadera democracia: una democracia real, directa, en donde todos participamos permanentemente en la cosa pública y en donde las iniciativas surgen de las comunidades y no de las elites. Sólo así podremos aspirar a establecer al sostenimiento de toda la humanidad y del planeta como el único fin de los estados y como su responsabilidad preeminente en el contrato social. Este es el nuevo paradigma de democracia real y del sostenimiento de la gente y el planeta (paradigma DRSGP); un paradigma holístico y con viabilidad a largo plazo.

♦ **Nueva razón de ser del mercado.** Conforme avancemos en la construcción de la real democracia, transformaremos al mercado para convertirlo en un medio para generar bienestar y no en un fin en sí mismo. En el corazón de esta transformación yace la transformación del propósito y naturaleza de las empresas, para que pase de ser el valor del accionista, incompatible con el goce de los DDHH, y devenga primordialmente en el bien social, con las empresas como agentes generadores de bienestar sostenible. Transformando así la razón de ser de las empresas podremos entonces establecer un entorno que garantice el pleno goce de todos los DDHH en su esfera de influencia.

♦ **Construcción urgente por doble vía.** Este compromiso con el cambio real, que constituye un compromiso de vida, urge iniciarlo hoy mismo, porque no será fácil, tomará al menos una generación y el tiempo se acaba. Así, para integrar este compromiso de vida a nuestra vida cotidiana, es necesario que dentro de las comunidades

sociales a las que pertenecemos emprendamos esta transformación tanto por la vía pública, cabildeando con gobiernos e instituciones multilaterales, como por la vía privada, aprovechando los mecanismos del mercado, utilizando la misma lógica bajo la cual funcionan las empresas.

♦ **Verdadero cambio o porvenir ominoso.** Abrigar lograr el pleno respeto de los DDHH sin transformar completamente el actual entorno solo puede implicar dos cosas: o se peca de mucha ingenuidad, porque los dueños del actual paradigma no permitirán dicho cambio, o peor aún, a pesar de reconocer la total imposibilidad de sostener a largo plazo el actual entorno, no tenemos un compromiso con el respeto de los DDHH ni con el futuro de las generaciones por venir – incluyendo a nuestros propios descendientes– ni con la viabilidad del planeta. Esto nos asegura un escenario muy ominoso para la existencia humana. Por ello, por mero instinto de supervivencia, es menester comprometernos seriamente con el verdadero cambio y olvidar la retórica que pretende cambiar para que todo siga igual.

♦ **Fin de la parodia democrática.** Esta valoración pretende como mínimo contribuir a crear el nivel de consciencia necesario para que las personas se den cuenta de que nadie más que nosotros –movilizándonos organizadamente– podremos establecer un entorno sostenible, centrado exclusivamente en la paz y en el bienestar de la gente y el planeta. Pretende así mismo contribuir a que quienes detentan el poder se den clara cuenta de que sus simulaciones y manipulaciones, con las que parodian a la democracia, engañarán a cada vez menos ciudadanos de este mundo globalizado no democráticamente.



## Bibliografía:

- ActionAid. Who Pays? ActionAid 2007.
- Jem Bendell. Barricades and Boardrooms. A Contemporary History of the Corporate Accountability Movement. UN. Research Institute for Social Development. June 2004.
- Jem Bendell, John Manoochchri and Shilpa Shah. *Serving systemic transformations*. The Lifeworth Review of 2005.
- Pierre Bourdieu, "The Essence of Neoliberalism," *Le Monde Diplomatique*, December 1998.
- Myriam Cardozo Brum and Álvaro de Regil Castilla. Non-Governmental Organisations and Corporate Social Responsibility in Iberian America. In *Corporate Social Responsibility Volume 2. Performances and Stakeholders*. Edited by José Allouche. Palgrave MacMillan, 2006.
- Bernard Cassen. THE DOHA ROUND. The great trade fair. *Le Monde Diplomatique*, December 2005.
- Noam Chomsky. Profit over People. Neoliberalism and Global Order. Seven Stories Press, 1999.
- Corporation 20/20. Creating the vision and charting the course of the Future Corporation. 2006 Brochure.
- CSR Worldwide Week Network. Netherlands. November 2004 Conference.
- Deborah Doane. The Myth of CSR. *Stanford Social Innovation Review*. Fall 2005.
- Economic, Social and Cultural Rights Network. Letter to John Ruggie of 25 October 2007.
- Marco Haan. The Competitive Effects of a Consumer Boycott. University of Groningen. The Netherlands. May 2007.
- International Labour Rights Fund. 2005 Annual Report.
- Joshua Karliner. The Corporate Planet. Sierra Club. 1997.
- Jean Marie Krier. Fair Trade Europe 2005. FLO, IFAT, NEWS, EFTA.
- Frédéric Lasserre and Philippe Rekacewicz. The water dossier. Blue gold rush. *Le Monde Diplomatique*, March 2005.
- Ted Nace. Gangs of America. The Rise of Corporate Power and the Disabling of Democracy. Berret-Koheler, 2003.
- OECD Watch. Guía para el procedimiento de reclamo de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 2006.
- Joris Oldenziel & Myriam Vander Stichele. Trade and the need to apply international Corporate Social Responsibility (CSR) standards. SOMO Discussion paper 2 November 2005.
- Álvaro de Regil Castilla. El Futuro de la RSC Reflejará la Salud de la Sociedad: Ponderando la Evolución de la RSC. Ensayo Temático LISDINYS. La Alianza Global Jus Semper. Noviembre 2005.
- Álvaro de Regil Castilla. Salarios Dignos: La Responsabilidad Social Corporativa sin Salarios Dignos es Irresponsable e Insostenible. Breviario Temático LISDINYS. La Alianza Global Jus Semper. Julio 2003.
- Philippe Rivière. Drug deals in Europe. *Le Monde Diplomatique*, February 2002.
- Bernard Sanders. Waking Up the Global Elite: Activism in the Streets Has Led to an Outpouring of Platitudes in the Suites. *The Nation*. 2 October 2000.
- Starbucks Coffee. Beyond the cup. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FISCAL 2005 ANNUAL REPORT.
- Myriam Vander Stichele and Sander van Bennekom. Investment agreements and Corporate Social Responsibility (CSR): contradictions, incentives and policy options. SOMO Discussion paper 1 November 2005.
- Anne Tallontire and Bill Vorley. Achieving fairness in trading between supermarkets and their agrifood supply chains, pg. 12. UK Food Group Briefing, September 2005.
- Allen L White. Business Brief: Intangibles and CSR. Business for Social Responsibility. February 2006.
- Allen L. White, Fade, Integrate or Transform? The Future of CSR, Business for Social Responsibility, August 2005.

## Lecturas claves adicionales sugeridas:

- Samir Amin. El Capitalismo en la Era de la Globalización. Paidós, 1999.
- Zygmunt Bauman. En Busca de la Política. Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Cornelius Castoriadis. The Imaginary Institution of Society. The MIT Press, 1998.
- Corporate Social Responsibility Volume 1. Concepts, Accountability and Reporting. Edited by José Allouche. Palgrave MacMillan, 2006.
- Corporate Social Responsibility Volume 2. Performances and Stakeholders. Edited by José Allouche. Palgrave MacMillan, 2006.
- Corporation 20/20 and Tellus Institute. Paper Series on Corporate Design. November 2007.
- Gerard Fonteneau. Responsabilidad Social Corporativa: Previendo sus Implicaciones Sociales. Ensayo Temático LISDINYS. La Alianza Global Jus Semper. Octubre 2003.
- Víctor Flores Olea y Abelardo Mariñana Flores. Crítica de la Globalidad. Fondo de Cultura Económica, 2004.
- John Kenneth Galbraith. The Affluent Society. Houghton Mifflin Company, 1998.
- John Kenneth Galbraith. The Good Society. Houghton Mifflin Company, 1996.
- David Held. La Democracia y el Orden Global. Paidós, 1997.
- John Maynard Keynes. Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura Económica, 1997.
- John Stuart Mill. On Liberty and Utilitarianism. Alfred A. Knopf, 1992.
- Monica Prasad, Howard Kimeldorf, Rachel Meyer, and Ian Robinson. Consumers of the World Unite. *LABOR STUDIES JOURNAL*, Vol. 29, No. 3 (Fall 2004).
- Adam Smith. The Wealth of Nations. Random House, 1994.

\*Álvaro de Regil Castilla es Director Ejecutivo de La Alianza Global Jus Semper







**La Alianza Global Jus Semper**  
Moorpark, California, E.U.A.  
© 2008